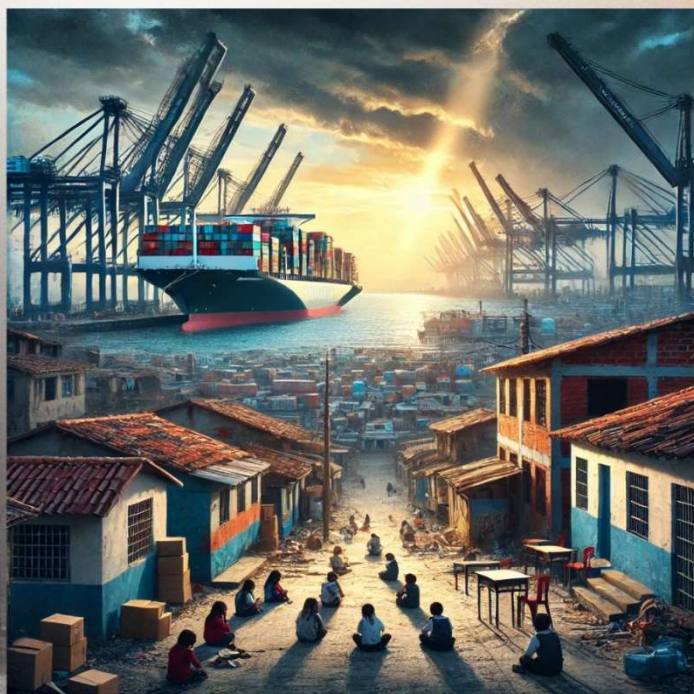


BUENAVENTURA EN DECLIVE

Cierre empresarial, crisis educativa y
degradación socioeconómica



Urbano Angulo Mosquera

Título: Buenaventura en Declive: cierre empresarial, crisis educativa y degradación socioeconómica

Autor: Urbano Angulo Mosquera

Edición, diagramación y portada: Edit. Cuarto Creciente –
Leonardo Valencia Echeverry

© Urbano Angulo Mosquera

© EDITORIAL LIBROS PARA PENSAR

Primera Edición: diciembre de 2026

ISBN: 978-628-02-2359-9

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia u otro método, sin el permiso previo y por escrito del autor.

Hecho en Colombia

Printed in Colombia

Queda hecho el Depósito Legal



Resumen

El libro *Buenaventura en Declive* ofrece un análisis profundo y riguroso sobre las causas estructurales que explican el deterioro educativo, empresarial y socioeconómico del Distrito de Buenaventura, a pesar de su papel estratégico como principal puerto marítimo de Colombia. La obra sostiene que el crecimiento portuario no se ha traducido en bienestar para la población local, configurando una paradoja territorial marcada por la coexistencia entre centralidad logística y pobreza persistente.

Desde un enfoque educativo-económico-social, el autor demuestra que la crisis educativa —especialmente en la educación básica, media y superior— ha limitado la acumulación de capital humano, afectando directamente la productividad laboral, la sostenibilidad empresarial y la movilidad social. La baja cobertura educativa, la deserción escolar y la débil articulación entre educación y mercado laboral han generado una fuerza laboral mayoritariamente poco calificada, lo que se refleja en altos niveles de informalidad, desempleo juvenil y empleo precario.

En el plano empresarial, el libro evidencia una estructura productiva frágil, dominada por microempresas de baja productividad y elevada mortalidad. A partir del análisis de series

históricas y comparaciones con otras ciudades portuarias del país, se muestra que el cierre recurrente de empresas en Buenaventura está estrechamente vinculado al déficit educativo y a la ausencia de capacidades técnicas y administrativas, más que a factores geográficos o coyunturales.

El texto también examina los efectos sociales del declive económico, destacando procesos de fragmentación urbana, debilitamiento del capital social, aumento de la vulnerabilidad social y reproducción intergeneracional de la pobreza. La crisis educativa aparece, así, no solo como un problema sectorial, sino como un factor estructural que alimenta la degradación social y territorial.

Finalmente, el libro plantea que la educación debe asumirse como eje estratégico de la recuperación territorial. Propone lineamientos orientados a fortalecer la educación en todos sus niveles, articular el sistema educativo con el sector productivo y mejorar la gobernanza institucional, como condiciones indispensables para revertir el declive y construir un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible para Buenaventura.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	10
METODOLOGÍA	18
CAPÍTULO 1. BUENAVENTURA: CONFIGURACIÓN HISTÓRICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL TERRITORIO	22
1.1. FORMACIÓN HISTÓRICA DE LA CIUDAD Y SU ROL ESTRATÉGICO NACIONAL.....	25
1.2. ECONOMÍA PORTUARIA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA LOCAL	31
1.3. ESTADO, INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA TERRITORIAL	36
1.4. DESIGUALDADES ESTRUCTURALES Y EXCLUSIÓN URBANA PERSISTENTE.....	41
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO: EDUCACIÓN, CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO TERRITORIAL	48
2.1. EDUCACIÓN Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: FUNDAMENTOS CONCEPTUALES	51
2.2. CAPITAL HUMANO, PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL	56
2.3. EDUCACIÓN, DESIGUALDAD Y MOVILIDAD SOCIAL	61
CAPÍTULO 3. EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA EN BUENAVENTURA	72
3.1. COBERTURA EDUCATIVA: TENDENCIAS HISTÓRICAS Y COMPARACIONES NACIONALES	74
3.2. DESERCIÓN, REPITENCIA Y PERMANENCIA ESCOLAR	78
3.3. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CALIDAD Y BRECHAS TERRITORIALES.....	81
3.4. IMPACTOS SOCIALES DE LA CRISIS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA	84
CAPÍTULO 4. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN BUENAVENTURA: BAJA COBERTURA Y LIMITACIONES ESTRUCTURALES	88
4.1. OFERTA INSTITUCIONAL Y ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR.....	90
4.2. TASAS DE TRÁNSITO DE LA EDUCACIÓN MEDIA A LA SUPERIOR	93
4.3. EDUCACIÓN TÉCNICA, TECNOLÓGICA Y UNIVERSITARIA: DESEQUILIBRIOS FORMATIVOS.....	96

4.4. CONSECUENCIAS DEL DÉFICIT DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO LOCAL	99
CAPÍTULO 5. MERCADO LABORAL Y CAPITAL HUMANO EN CONTEXTOS DE FRAGILIDAD EDUCATIVA	102
5.1. PERFIL EDUCATIVO DE LA FUERZA LABORAL BONAVERENSE.....	104
5.2. EMPLEO FORMAL, INFORMALIDAD Y SUBEMPLEO.....	107
5.3. RELACIÓN ENTRE NIVEL EDUCATIVO Y CALIDAD DEL EMPLEO...	110
5.4. JUVENTUD, EDUCACIÓN TRUNCADA Y EXCLUSIÓN LABORAL....	112
CAPÍTULO 6. DINÁMICA EMPRESARIAL EN BUENAVENTURA: CREACIÓN, CIERRE Y EXTINCIÓN DE EMPRESAS.....	116
6.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y SECTORES ECONÓMICOS PREDOMINANTES.....	118
6.2. CREACIÓN VERSUS LIQUIDACIÓN EMPRESARIAL: ANÁLISIS DE SERIES HISTÓRICAS.....	121
6.3. MORTALIDAD EMPRESARIAL Y FRAGILIDAD PRODUCTIVA	125
6.4. COMPARACIÓN CON OTRAS CIUDADES PORTUARIAS COLOMBIANAS.....	127
CAPÍTULO 7. CRISIS EDUCATIVA Y CIERRE EMPRESARIAL: RELACIONES CAUSALES Y EVIDENCIAS EMPÍRICAS	130
7.1. DÉFICIT DE CAPITAL HUMANO Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL	133
7.2. ESCASEZ DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS	136
7.3. EDUCACIÓN, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD LOCAL	138
7.4. EVIDENCIAS ESTADÍSTICAS DEL VÍNCULO EDUCACIÓN-EMPRESA	141
CAPÍTULO 8. DEGRADACIÓN ECONÓMICA: POBREZA, INFORMALIDAD Y ESTANCAMIENTO PRODUCTIVO	144
8.1. EVOLUCIÓN DE LA POBREZA MONETARIA Y MULTIDIMENSIONAL	146
8.2. INFORMALIDAD ECONÓMICA Y SUBSISTENCIA URBANA.....	149
8.3. DESIGUALDAD DE INGRESOS Y FRAGMENTACIÓN SOCIAL.....	152
8.4. EFECTOS ACUMULATIVOS DEL CIERRE EMPRESARIAL EN LA ECONOMÍA LOCAL.....	154
CAPÍTULO 9. DEGRADACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN BUENAVENTURA	158

9.1. IMPACTOS SOCIALES DEL DESEMPLEO Y LA PRECARIEDAD EDUCATIVA	160
9.2. FRAGMENTACIÓN URBANA Y EXCLUSIÓN TERRITORIAL	163
9.3. EDUCACIÓN, VIOLENCIA ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SOCIAL	165
9.4. CAPITAL SOCIAL DEBILITADO Y PÉRDIDA DE COHESIÓN COMUNITARIA	167
CAPÍTULO 10. BUENAVENTURA FRENTE AL PROMEDIO NACIONAL: BRECHAS EDUCATIVAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES	170
10.1. COMPARACIONES NACIONALES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR	172
10.2. BRECHAS EMPRESARIALES Y PRODUCTIVAS	174
10.3. INDICADORES SOCIALES COMPARADOS	177
10.4. EL REZAGO ESTRUCTURAL COMO PROBLEMA PERSISTENTE ...	179
CAPÍTULO 11. EDUCACIÓN COMO EJE DE RECUPERACIÓN TERRITORIAL Y REACTIVACIÓN EMPRESARIAL.....	182
11.1. LA EDUCACIÓN COMO INVERSIÓN ESTRATÉGICA DE LARGO PLAZO	184
11.2. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, EMPRESA Y DESARROLLO LOCAL	186
11.3. ARTICULACIÓN ENTRE SISTEMA EDUCATIVO, SECTOR PRODUCTIVO Y ESTADO	189
11.4. LINEAMIENTOS PARA UNA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL DEL TERRITORIO.....	191
BIBLIOGRAFÍA	200
EL AUTOR	206

Introducción

Buenaventura en el contexto del desarrollo desigual colombiano

El desarrollo territorial colombiano se ha caracterizado históricamente por profundas desigualdades regionales que reflejan la coexistencia de espacios altamente integrados a la economía nacional y global con territorios que permanecen estructuralmente rezagados. Estas disparidades no son accidentales ni coyunturales, sino el resultado de trayectorias históricas diferenciadas en términos de inversión pública, acumulación de capital humano, articulación productiva e institucionalidad estatal. En este marco, Buenaventura ocupa una posición singular: es un territorio estratégico para el comercio exterior del país, pero al mismo tiempo uno de los municipios con mayores déficits sociales y económicos persistentes (CEPAL, 2018; Monroy, Ramírez & Núñez, 2021).

La paradoja bonaverense se expresa en la desconexión entre su centralidad logística y las condiciones de vida de su población. Mientras el puerto concentra una proporción significativa del comercio marítimo colombiano, los indicadores de pobreza, informalidad laboral y rezago educativo del municipio se mantienen sistemáticamente por encima del promedio

nacional (DANE, 2020; DANE, 2023). Esta disociación pone en evidencia los límites de un modelo de desarrollo que ha privilegiado la eficiencia económica sectorial sin garantizar la redistribución territorial de los beneficios del crecimiento.

Desde una perspectiva comparada, Buenaventura comparte rasgos con otros territorios periféricos de América Latina donde los enclaves productivos operan con escasa integración local. La CEPAL ha documentado que estos enclaves tienden a reproducir desigualdades estructurales cuando no se articulan con políticas de desarrollo humano, educación y fortalecimiento productivo local (CEPAL, 2021). En este sentido, la experiencia bonaverense no es excepcional, pero sí ilustrativa de las tensiones del desarrollo desigual en economías abiertas.

Comprender a Buenaventura dentro del contexto del desarrollo desigual colombiano implica reconocer que sus problemas no se explican únicamente por fallas locales, sino por patrones nacionales de acumulación y exclusión territorial. Esta perspectiva resulta indispensable para evitar interpretaciones simplistas y para situar el análisis en un marco estructural más amplio.

Justificación del enfoque educativo-económico-social

La complejidad de los problemas que enfrenta Buenaventura exige un enfoque analítico que trascienda las lecturas sectoriales aisladas. La pobreza persistente, la fragilidad empresarial y la degradación social no pueden comprenderse de manera independiente, ya que se alimentan mutuamente a través de mecanismos estructurales que operan en el largo plazo. En este contexto, el enfoque educativo-económico-social adoptado en este libro responde a la necesidad de analizar dichas interrelaciones de forma integrada.

La educación constituye un eje central de este enfoque por su papel en la acumulación de capital humano, la movilidad social y la productividad económica. La evidencia empírica muestra que los territorios con mayores déficits educativos presentan mayores niveles de informalidad, menor sostenibilidad empresarial y mayores tasas de pobreza (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2015). En Buenaventura, la baja culminación de la educación media y la limitada cobertura de educación superior se proyectan directamente sobre el mercado laboral y el tejido productivo local.

El componente económico del enfoque permite analizar cómo estas limitaciones educativas se traducen en una estructura empresarial frágil, caracterizada por

microempresas de baja productividad y alta mortalidad. Los datos de Confecámaras evidencian que la creación empresarial, en ausencia de capital humano suficiente, no garantiza sostenibilidad ni generación de empleo formal (Confecámaras, 2024). Este fenómeno resulta particularmente relevante en territorios donde la empresa cumple funciones de subsistencia más que de acumulación productiva.

Finalmente, la dimensión social del enfoque reconoce que los efectos del rezago educativo y económico se manifiestan en procesos de exclusión, fragmentación territorial y debilitamiento del capital social. La degradación social no es un resultado colateral, sino una consecuencia directa de la interacción entre pobreza, informalidad y precariedad educativa, tal como lo documentan la CEPAL y el PNUD (CEPAL, 2018; PNUD, 2022). Integrar estas tres dimensiones permite ofrecer una lectura más completa y rigurosa del caso bonaverense.

Del crecimiento portuario al declive territorial

El crecimiento portuario de Buenaventura ha sido uno de los pilares de la inserción internacional de Colombia. A lo largo de las últimas décadas, la modernización de la infraestructura portuaria y el aumento del comercio exterior han consolidado al municipio

como un nodo logístico de primer orden. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un proceso de desarrollo territorial inclusivo, sino que ha coexistido con un deterioro progresivo de las condiciones socioeconómicas locales.

La literatura sobre economías de enclave ha mostrado que el crecimiento sectorial puede coexistir con el estancamiento territorial cuando no existen mecanismos de articulación productiva y redistributiva (Porter, 2001; CEPAL, 2021). En Buenaventura, la actividad portuaria ha operado en gran medida desconectada del tejido empresarial local, limitando la generación de encadenamientos productivos y oportunidades de empleo de calidad para la población residente.

Este desacople entre crecimiento portuario y bienestar local ha contribuido a un proceso de declive territorial. La persistencia de altos niveles de pobreza, informalidad y rezago educativo indica que los beneficios del comercio exterior no han permeado de manera significativa la economía urbana. Por el contrario, la dependencia de actividades de subsistencia y la fragilidad empresarial han reforzado un patrón de desarrollo desigual.

Analizar el tránsito del crecimiento portuario al declive territorial permite cuestionar las narrativas que asumen que la infraestructura y

la inversión sectorial son suficientes para generar desarrollo. El caso de Buenaventura evidencia que, sin políticas complementarias en educación, empleo y fortalecimiento productivo local, el crecimiento puede convertirse en un factor que profundiza las desigualdades territoriales.

Alcances, fuentes y criterios analíticos del libro

Este libro se propone analizar de manera rigurosa las relaciones entre crisis educativa, cierre empresarial y degradación socioeconómica en Buenaventura, situando el caso dentro del contexto nacional y regional. El alcance del análisis es fundamentalmente estructural y territorial, centrado en la identificación de patrones persistentes más que en fluctuaciones coyunturales de corto plazo.

Las fuentes utilizadas incluyen estadísticas oficiales del DANE, análisis estructurales de la CEPAL, diagnósticos de empleo y empresa de Confecámaras y del Banco Mundial, así como literatura académica clásica y contemporánea sobre capital humano, desarrollo y desigualdad.

Los criterios analíticos combinan el enfoque cuantitativo —a través del uso de indicadores de pobreza, educación, empleo y dinámica empresarial— con una lectura cualitativa e interpretativa de los procesos territoriales. Este

enfoque mixto permite comprender no solo la magnitud de las brechas, sino también los mecanismos que las producen y reproducen en el tiempo.

A lo largo del libro, este enfoque se materializa en el análisis de tendencias educativas y empresariales recientes, sustentadas en información estadística e institucional verificable, que permite hacer explícitas las relaciones entre rezago educativo, fragilidad productiva y deterioro socioeconómico en Buenaventura.

Sin limitarse a descripciones teóricas, el texto examina la evolución de la educación básica, la transición hacia la educación superior y la dinámica de creación y cierre empresarial como procesos interrelacionados, cuyo encadenamiento resulta central para comprender el declive territorial del distrito. De este modo, el libro propone una lectura analítica que articula evidencia empírica y reflexión estructural para iluminar los mecanismos que han condicionado la trayectoria reciente de desarrollo de Buenaventura.

Ahora bien, a partir de este punto, los capítulos siguientes profundizan en cada una de las dimensiones analizadas, con el propósito de ofrecer una comprensión integral del declive educativo, empresarial y socioeconómico de

Buenaventura y de los desafíos que enfrenta para transformar su trayectoria de desarrollo.

Metodología

El presente libro fue elaborado a partir de un proceso de investigación académica de carácter analítico, documental y comparativo, desarrollado de manera sistemática en el marco del estudio del desarrollo territorial, la educación y la dinámica socioeconómica en contextos urbanos periféricos. La metodología adoptada responde a un enfoque cualitativo-cuantitativo integrado, orientado a comprender fenómenos estructurales complejos a partir de evidencia empírica verificable y marcos conceptuales consolidados en la literatura especializada.

El proceso de investigación se inició con la delimitación conceptual y territorial del objeto de estudio, situando a Buenaventura dentro del contexto del desarrollo desigual colombiano. Esta delimitación permitió formular preguntas analíticas orientadas a explorar la relación entre crisis educativa, fragilidad empresarial y degradación socioeconómica. A partir de este encuadre, se realizó una revisión exhaustiva y crítica de fuentes secundarias oficiales y académicas, priorizando documentos estadísticos, informes técnicos y literatura científica reconocida, con el fin de construir una base empírica sólida y coherente.

La estrategia metodológica incluyó el análisis sistemático de datos provenientes de fuentes oficiales nacionales e internacionales, tales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Confecámaras, el Ministerio de Educación Nacional (MEN-SNIES), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estos datos fueron utilizados para identificar tendencias, contrastar indicadores territoriales con promedios nacionales y establecer relaciones empíricas entre variables educativas, laborales, empresariales y sociales.

En paralelo, se desarrolló un análisis teórico apoyado en enfoques clásicos y contemporáneos sobre capital humano, desarrollo territorial, desigualdad y competitividad. La articulación entre teoría y evidencia permitió interpretar los datos más allá de su dimensión descriptiva, identificando mecanismos causales y dinámicas estructurales que explican la persistencia del rezago de Buenaventura. Este diálogo constante entre datos y teoría garantizó la coherencia interna del análisis y evitó interpretaciones aisladas o meramente coyunturales.

La redacción del libro se realizó de manera progresiva y reflexiva, siguiendo una lógica de acumulación analítica. Cada capítulo fue construido a partir de la integración de resultados empíricos, argumentos conceptuales y comparaciones territoriales, cuidando la consistencia entre secciones y la continuidad del hilo argumental. El proceso de escritura incluyó revisiones sucesivas orientadas a depurar el lenguaje, fortalecer la precisión conceptual y asegurar la correcta correspondencia entre afirmaciones y fuentes, conforme a estándares académicos rigurosos.

Finalmente, el enfoque metodológico asumido reconoce las limitaciones inherentes al uso de información secundaria, especialmente en lo relativo a la disponibilidad y desagregación territorial de algunos indicadores. No obstante, la convergencia de múltiples fuentes, la triangulación de datos y el uso de marcos teóricos robustos permiten ofrecer un análisis consistente y fundamentado. En este sentido, la metodología adoptada busca no solo describir la realidad de Buenaventura, sino contribuir a su comprensión estructural y a la reflexión crítica sobre los desafíos y posibilidades de transformación educativa, económica y social del territorio.

Capítulo 1. Buenaventura: configuración histórica, económica y social del territorio

Las trayectorias urbanas en contextos de desarrollo desigual revelan cómo territorios estratégicos para la economía nacional pueden acumular déficits sociales persistentes que comprometen su sostenibilidad de largo plazo. En Colombia, la articulación entre apertura comercial, especialización portuaria y debilidades de la política social ha reproducido brechas históricas que desbordan las capacidades locales de gestión y financiamiento.

La evidencia regional de la CEPAL muestra que la desigualdad no solo es un resultado, sino un mecanismo que erosiona productividad, limita la inversión y reduce la resiliencia de los territorios ante choques exógenos; la ineficiencia de la desigualdad opera a través de canales de capital humano, acceso a infraestructura y calidad institucional (CEPAL, 2018, 2019, 2021, 2022).

Cuando la educación pierde capacidad de formar y certificar habilidades pertinentes, el mercado laboral se fragmenta, la informalidad se expande y el tejido empresarial se precariza,

profundizando un círculo vicioso de exclusión que restringe libertades sustantivas y opciones de vida, en línea con el enfoque de desarrollo como libertad de Sen (1999).

El papel de la educación como motor del desarrollo territorial está sólidamente documentado. La teoría del capital humano subraya que la acumulación de competencias eleva la productividad individual y social, habilita adopción tecnológica y fortalece la base impositiva que sostiene bienes públicos (Becker, 1993; Hanushek y Woessmann, 2015).

En entornos portuarios, las cadenas globales de valor exigen estándares logísticos, regulatorios y digitales crecientes, y la brecha entre la demanda de habilidades y la oferta local puede amplificar vulnerabilidades. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha señalado que las disparidades territoriales en Colombia se entrelazan con brechas educativas y de formalidad, afectando tanto la calidad del empleo como la productividad total (OECD, 2024).

Sin una base educativa robusta—desde la básica y media hasta la superior—la economía local se integra de forma subordinada a flujos de comercio, con escasos encadenamientos y débiles derrames de conocimiento.

La estructura productiva asociada a los puertos tiende a configurarse como un enclave con alta rotación de mercancías y bajo valor agregado local cuando los sistemas de innovación, la formación técnica y la gobernanza urbana no logran articularse. La literatura sobre ventajas competitivas destaca que los clústeres requieren proveedores especializados, mercados laborales profundos y organizaciones de apoyo que generen aprendizaje colectivo y estándares compartidos (Porter, 2001).

A su vez, la teoría de derrames de conocimiento en el emprendimiento enfatiza que la creación de empresas innovadoras depende de la capacidad de convertir conocimiento tácito en oportunidades comercializables, un proceso poco probable en contextos de baja calidad educativa y alta informalidad (Acs, Audretsch y Lehmann, 2013). Esta tensión entre centralidad logística y periferia cognitiva se expresa en mercados laborales segmentados, mortalidad empresarial elevada y limitadas trayectorias de movilidad social, como lo evidencian diagnósticos laborales y sociales del Banco Mundial, la OIT y la CEPAL para la región (World Bank, 2023; OIT, 2018; CEPAL, 2022).

Las vulnerabilidades se amplifican ante choques como la pandemia, que interrumpió trayectorias escolares, debilitó aprendizajes y

alteró expectativas juveniles de inserción laboral. Los informes de UNESCO y UNICEF documentan los efectos de cierres de escuelas sobre los aprendizajes, la permanencia y la inequidad, con impactos más severos en territorios con baja conectividad y precariedad institucional (UNESCO, 2021, 2022; UNICEF, 2021).

En paralelo, los indicadores de pobreza monetaria y multidimensional del DANE y los análisis de desarrollo humano del PNUD sostienen que el deterioro socioeconómico se concentra en áreas urbanas periféricas con déficits históricos de servicios, empleo formal y seguridad (DANE, 2020; PNUD, 2022).

En este marco, comprender la configuración histórica, económica e institucional de un territorio portuario del Pacífico resulta clave para identificar los mecanismos a través de los cuales la crisis educativa se traduce en debilidad empresarial y degradación económica y social, así como las palancas para revertir dicho proceso.

1.1. Formación histórica de la ciudad y su rol estratégico nacional

El litoral pacífico colombiano ha operado como umbral de conexión entre el país y la cuenca Asia-Pacífico, concentrando flujos

comerciales que reconfiguran jerarquías urbanas y redes de transporte. La localización portuaria imprime una lógica territorial marcada por corredores logísticos hacia el interior, especialización de actividades y tensiones entre dinamismo externo y rezagos internos.

En el plano nacional, los ciclos de apertura y modernización del comercio exterior han reforzado el carácter estratégico de los puertos del Pacífico, sin traducir automáticamente su centralidad en oportunidades equitativas para la población.

La literatura de la CEPAL sobre heterogeneidad estructural ayuda a entender esta paradoja: la integración a mercados dinámicos no garantiza convergencia si persisten cuellos de botella en capital humano, infraestructura social y gobernanza (CEPAL, 2018, 2021). En países con grandes brechas territoriales, los beneficios del comercio se apropian de forma concentrada, mientras las periferias urbanas lidian con presiones demográficas y déficits de servicios.

Los procesos de formación urbana en ciudades portuarias combinan oleadas de migración interna, expansión de barrios populares y economías de subsistencia que coexisten con enclaves de alta productividad vinculados al comercio internacional. La

evidencia regional muestra que la desigualdad tiende a espacializarse: zonas con acceso a empleo formal y servicios de calidad conviven con sectores con provisión precaria, generando patrones persistentes de segregación (CEPAL, 2019, 2022).

En este entorno, la escuela cumple un papel ordenador del espacio social; cuando falla la oferta o la calidad, aumenta la probabilidad de abandono escolar y la transición temprana a mercados informales, reforzando trayectorias de exclusión intergeneracional. La OIT ha documentado que la inserción laboral juvenil en contextos de baja cualificación y alta informalidad se vuelve errática y con escaso aprendizaje en el puesto de trabajo (OIT, 2018), un rasgo que limita la formación de capacidades productivas a escala local. La posición estratégica de un puerto del Pacífico dentro del sistema nacional de ciudades descansa en su capacidad de articular corredores multimodales, normas aduaneras eficientes y servicios logísticos sofisticados.

Sin embargo, el peso del territorio en el comercio nacional convive con limitaciones de gobierno metropolitano y de coordinación interinstitucional, elementos señalados por diagnósticos de la OCDE para Colombia en materia de política regional y productividad (OECD, 2024).

La ausencia de arreglos robustos de gobernanza que integren políticas de suelo, vivienda, educación y empleo con la planificación portuaria tiende a fragmentar el desarrollo urbano: el puerto mira al mundo, mientras barrios y comunas negocian con escasez de oportunidades y servicios. El resultado es un desajuste entre las exigencias de una economía abierta y la base social que debería beneficiarse de ella.

Los marcos conceptuales del capital humano y del conocimiento ayudan a interpretar las trayectorias históricas de estos territorios. Becker (1993) y Mincer (1974) mostraron cómo la escolaridad y la experiencia se traducen en rendimientos salariales y productividad, mientras Hanushek y Woessmann (2015) subrayaron que no basta con años de estudio: la calidad de los aprendizajes es crucial para el crecimiento.

En los espacios portuarios, la demanda de competencias técnicas y digitales, gestión operativa, idiomas y cumplimiento normativo ha aumentado con la estandarización logística y la digitalización del comercio. Si la formación básica y media no logra consolidar habilidades fundamentales, la transición a oficios especializados se bloquea; y si la educación superior no ofrece programas pertinentes ni accesibles, las empresas recurren a mano de

obra externa o automatizan procesos, reduciendo oportunidades locales.

La vulnerabilidad ante los ciclos macroeconómicos también ha marcado la trayectoria histórica de estas ciudades. El auge y caída de precios de materias primas, así como cambios en rutas navieras y políticas arancelarias, han reconfigurado volúmenes de carga y demanda de servicios, con impactos asimétricos sobre empleo e ingresos.

La evidencia del Banco Mundial y la CEPAL sobre la región muestra que choques externos tienden a amplificar desigualdades donde la protección social es débil y la informalidad elevada (World Bank, 2023; CEPAL, 2021). Cuando la base social ingresa a las crisis con déficit educativo, la recuperación es más lenta y costosa, y el tejido empresarial local—compuesto en su mayoría por unidades pequeñas—enfrenta mayores tasas de cierre y mortalidad.

Las agendas educativas globales tras la pandemia ofrecen una lente adicional para comprender el presente de territorios portuarios del Pacífico. UNESCO (2021, 2022) ha planteado la necesidad de un nuevo contrato social para la educación que reduzca brechas y habilite transformaciones productivas sostenibles.

Allí donde la escuela es, a la vez, espacio de protección social, los cierres prolongados interrumpieron trayectorias de aprendizaje y afectaron la permanencia, en particular entre adolescentes que ya enfrentaban riesgo de rezago. UNICEF (2021) documentó que las pérdidas educativas han sido mayores en contextos de baja conectividad y recursos escolares limitados, con efectos duraderos sobre empleabilidad y cohesión social. Esos factores históricos y recientes ayudan a explicar por qué la centralidad portuaria no se ha traducido, de manera consistente, en bienestar compartido.

A lo largo del tiempo, se ha consolidado una dependencia de trayectorias donde la especialización logística convive con un rezago social que limita el desarrollo endógeno. La literatura de la CEPAL y los diagnósticos de desarrollo humano señalan que romper esas inercias requiere ampliar libertades reales: acceso a educación de calidad, servicios públicos, trabajo decente e instituciones confiables (CEPAL, 2018; PNUD, 2022; Sen, 1999).

La configuración histórica del territorio, su rol estratégico nacional y la estructura económica resultante explican la persistencia de brechas y ofrecen pistas sobre los mecanismos que conectan crisis educativa, debilidad empresarial y degradación socioeconómica.

1.2. Economía portuaria y estructura productiva local

La economía portuaria se caracteriza por la concentración de actividades de alto movimiento y bajo tiempo de permanencia: carga y descarga, almacenamiento, intermediación aduanera, transporte y servicios conexos. Este patrón genera un volumen de transacciones significativo, aunque no necesariamente una plataforma diversificada de valor agregado local si los encadenamientos con proveedores y servicios avanzados son débiles.

La OCDE ha observado que, en Colombia, la productividad territorial se asocia con la capacidad de articular servicios empresariales, infraestructura y capital humano, más que con la simple presencia de una actividad tractora (OECD, 2024). Cuando las empresas líderes externalizan servicios a otras ciudades o países, el territorio portuario puede quedar relegado a funciones operativas, con baja absorción de conocimiento y escasas oportunidades para pequeñas y medianas empresas.

El concepto de clúster ofrece un marco útil para evaluar la estructura productiva. Porter (2001) subrayó que la ventaja competitiva territorial depende de la interacción entre empresas, proveedores especializados,

instituciones de apoyo y marcos regulatorios que incentiven innovación y competencia.

En un puerto del Pacífico, el clúster logístico debería incluir operadores portuarios, transportistas, servicios financieros, aseguradoras, centros de formación técnica, incubadoras y oficinas públicas coordinadas. La ausencia o debilidad de alguno de estos componentes erosiona la productividad sistémica. Por ejemplo, si la oferta de formación técnica y tecnológica no se alinea con estándares internacionales de seguridad, trazabilidad y digitalización, las empresas locales enfrentan mayores costos de cumplimiento o dependen de talento externo, reduciendo los derrames de conocimiento sobre el territorio.

La literatura sobre derrames de conocimiento y emprendimiento refuerza esta lectura. Acs, Audretsch y Lehmann (2013) argumentan que la conversión del conocimiento en oportunidades empresariales exige canales institucionales que faciliten la circulación de ideas, la financiación y la protección de la propiedad intelectual. En contextos donde la educación básica no consolida competencias y la superior tiene baja cobertura o pertinencia, los derrames se diluyen y el emprendimiento innovador se reduce a nichos.

Se forman, entonces, economías de autoempleo e informalidad que, aunque pueden

absorber mano de obra en el corto plazo, no elevan la productividad ni la calidad del empleo. La OIT ha mostrado que la informalidad, además de ser un refugio laboral, constituye una trampa de baja productividad con efectos regresivos sobre ingresos y protección social (OIT, 2018).

El mercado laboral local refleja esa tensión entre especialización logística y base educativa frágil. Determinadas ocupaciones de la cadena portuaria requieren habilidades técnicas específicas y certificaciones, mientras una gran franja de actividades conexas opera con baja cualificación y altas tasas de rotación. La teoría de capital humano y las estimaciones mincerianas sugieren que, sin ganancias de aprendizaje en el puesto de trabajo y sin trayectorias formativas acumulativas, los rendimientos de la escolaridad se reducen y la movilidad social se estanca (Becker, 1993; Mincer, 1974).

En la práctica, esto se traduce en brechas salariales por nivel educativo, subempleo y barreras de entrada a posiciones de mayor productividad. En territorios con baja cobertura de educación superior, la distancia entre los requerimientos del clúster logístico y la oferta de habilidades locales se amplifica, afectando la competitividad.

La demografía empresarial incorpora otra capa analítica. En Colombia, los registros de

cámaras de comercio muestran una alta rotación de firmas, con tasas de creación y liquidación sensibles al ciclo económico y a shocks regulatorios y de demanda; estos patrones, documentados por Confecámaras con base en el RUES, son particularmente relevantes para sectores de servicios y comercio conexos a la actividad portuaria.

Cuando el ecosistema de apoyo al negocio es débil—crédito, servicios profesionales, capacitación, asociatividad—la mortalidad empresarial aumenta y la supervivencia a tres o cinco años se reduce, afectando la acumulación de aprendizaje productivo y redes proveedoras. La evidencia de CEPAL y del Banco Mundial resalta que la falta de densidad empresarial formal está correlacionada con mayor informalidad y menor productividad agregada (CEPAL, 2021; World Bank, 2023).

Los cuellos de botella institucionales y urbanos también condicionan la estructura productiva. La coordinación entre autoridades portuarias, gobiernos locales y agencias nacionales es indispensable para invertir en conectividad, suelo industrial, logística urbana y regulación ambiental. La OCDE ha destacado que las fallas de coordinación multiescalar en Colombia elevan costos de transacción y limitan la atracción de inversión de calidad (OECD, 2024).

Sin instrumentos de planificación que integren logística y desarrollo urbano—vivienda, movilidad, seguridad, equipamientos educativos—los costos externos de la actividad portuaria (congestión, incompatibilidades de uso del suelo, presión sobre servicios) recaen sobre la ciudad, debilitando su atractivo para actividades complementarias de mayor valor agregado.

La innovación y la digitalización abren una ventana de oportunidad, pero también plantean riesgos de sustitución si el territorio no construye capacidades. La transición hacia documentación electrónica, trazabilidad en tiempo real y automatización de procesos redefine perfiles ocupacionales y demanda aprendizaje continuo.

Hanushek y Woessmann (2015) subrayan que la calidad de los aprendizajes en matemáticas, lectura y ciencias predice la adopción tecnológica y el crecimiento de largo plazo. Donde la escuela no logra cimentar esas competencias y la educación superior no ofrece programas pertinentes, la brecha tecnológica se transforma en brecha de productividad. El resultado es una estructura productiva polarizada: pocas empresas con capacidades avanzadas y una mayoría que opera en márgenes de baja productividad.

La sostenibilidad de la economía portuaria, en suma, depende de su capacidad para irradiar encadenamientos, elevar la calidad del empleo y formar un ecosistema de negocios resiliente. La perspectiva de desarrollo humano del PNUD enfatiza que sin expansión de capacidades y libertades reales—educación, salud, seguridad, participación—los avances económicos no se traducen en bienestar (PNUD, 2022).

La CEPAL ha insistido en que transformar la educación es base del desarrollo sostenible y de la inclusión productiva (CEPAL, 2022). Para un territorio portuario del Pacífico, esto implica alinear el clúster logístico con estrategias de formación técnica y tecnológica, fortalecer instituciones de apoyo empresarial y asegurar una gobernanza que reduzca fallas de coordinación, a fin de que la centralidad estratégica se convierta en desarrollo territorial y no solo en tránsito de mercancías.

1.3. Estado, institucionalidad y gobernanza territorial

La gobernanza de Buenaventura se define por la interacción entre niveles de gobierno, agencias portuarias, entidades sectoriales y organizaciones sociales que operan con capacidades heterogéneas y mandatos a veces superpuestos. La literatura sobre desarrollo y productividad territorial subraya que los

arreglos institucionales y la coordinación multiescalar condicionan la calidad de las políticas públicas y su capacidad de reducir brechas (OECD, 2024; CEPAL, 2018).

En un nodo logístico estratégico, la ausencia de mecanismos eficaces de articulación entre planeación urbana, ordenamiento del suelo y expansión de infraestructura portuaria se traduce en costos de transacción elevados, conflictividad por usos de suelo y externalidades negativas que afectan a barrios colindantes. El resultado es un régimen de gobernanza tensionado por demandas de competitividad y exigencias de inclusión social, que requiere reglas claras y previsibles para alinear inversiones privadas y bienes públicos esenciales.

El desempeño de los sistemas educativos y de protección social depende de esa arquitectura institucional. La evidencia comparada muestra que la expansión de cobertura y la mejora de aprendizajes en educación básica y media requieren coherencia entre financiamiento, estándares, formación docente y apoyo pedagógico focalizado, además de condiciones materiales en escuela y barrio (UNESCO, 2021, 2022; CEPAL, 2022).

En Buenaventura, la escuela cumple funciones de anclaje social, allí la coordinación entre el nivel nacional—responsable de

lineamientos y financiamiento—y la administración local—encargada de la gestión operativa y la articulación intersectorial—es determinante para sostener la permanencia y reducir el rezago. La desalineación entre oferta educativa y demanda productiva, frecuente en territorios periféricos, se magnifica en clústeres logísticos sin plataformas robustas de formación técnica y tecnológica asociadas a estándares internacionales.

La calidad institucional también se expresa en la infraestructura de información. La existencia de sistemas estadísticos confiables—DANE para pobreza y mercado laboral, SNIES para educación superior, registros administrativos del MEN para básica y media, y RUES para demografía empresarial—permite orientar decisiones y evaluar resultados.

Sin embargo, la disponibilidad y oportunidad de datos a escala municipal pueden ser limitadas o presentar problemas de representatividad, lo que desafía el diseño de intervenciones precisas (DANE, 2023; Ministerio de Educación Nacional—SNIES).

La CEPAL ha enfatizado que la debilidad en capacidades estadísticas y en sistemas de monitoreo impide corregir a tiempo políticas ineficientes, generando pérdidas de bienestar y productividad (CEPAL, 2021). Un andamiaje institucional con cultura de evaluación,

transparencia y rendición de cuentas resulta, por tanto, un activo clave para un territorio con tensiones estructurales.

La regulación del trabajo y las estrategias de formalización ilustran otra dimensión de la gobernanza. En contextos con alta informalidad, la OIT ha señalado que la debilidad de la inspección laboral, la complejidad normativa y la baja productividad de unidades económicas conducen a una segmentación persistente, con efectos regresivos sobre ingresos y protección social (OIT, 2018).

En Buenaventura, conviven ocupaciones formales del sector portuario con un amplio tejido de servicios conexos de baja escala, por lo que la acción del Estado en la reducción de costos de formalización, mejora del acceso a servicios empresariales y promoción de la formación para el trabajo, es determinante para elevar la calidad del empleo. La coordinación con políticas educativas y de apoyo empresarial evita que los esfuerzos se dispersen y permite generar trayectorias de aprendizaje laboral efectivas.

La gobernanza económica incorpora además la interacción con cámaras de comercio, operadores logísticos y entidades financieras. El registro de creación, cierre y extinción de empresas—compilado en el RUES—funciona como termómetro de la vitalidad productiva y

del clima institucional (Confecámaras—RUES). Un entorno con reglas claras, servicios empresariales disponibles y ventanillas únicas efectivas reduce tiempos y costos, mejora la supervivencia de firmas jóvenes y favorece la inversión.

La literatura sobre derrames de conocimiento y competitividad sugiere que instituciones de apoyo—incubadoras, centros tecnológicos, alianzas universidad-empresa—operan como catalizadores del aprendizaje y la innovación, siempre que la base educativa lo permita (Acs, Audretsch y Lehmann, 2013; Porter, 2001). La ausencia de estos nodos institucionales encarece la construcción de capacidades locales y favorece dinámicas de enclave.

Por último, la dimensión cívica de la gobernanza—confianza, participación y capital social—incide en la capacidad de ejecutar políticas transformadoras. El enfoque de desarrollo humano destaca que la expansión de libertades requiere instituciones que garanticen acceso a servicios, seguridad y oportunidades de participación, en especial para jóvenes (PNUD, 2022; Sen, 1999).

Durante y después de la pandemia, la coordinación interinstitucional para asegurar continuidad educativa, conectividad y apoyo psicosocial se convirtió en una prueba de estrés para los arreglos locales de gobierno (UNICEF,

2021; UNESCO, 2021). En territorios como Buenaventura, la solidez de la institucionalidad y la gobernanza colaborativa definen si los choques refuerzan vulnerabilidades o, por el contrario, abren ventanas de cambio mediante respuestas integrales y sostenidas.

1.4. Desigualdades estructurales y exclusión urbana persistente

Las desigualdades en Buenaventura se tejen en múltiples planos—educativo, laboral, de ingresos, de acceso a servicios y de oportunidades empresariales—y se espacializan en el territorio urbano mediante patrones de segregación y acceso desigual a bienes públicos.

La CEPAL ha documentado que la heterogeneidad estructural latinoamericana se manifiesta en la coexistencia de segmentos productivos de alta y baja productividad, con barreras de movilidad entre ambos (CEPAL, 2018, 2019). En una ciudad-puerto, esta dualidad adopta formas aparentes: sectores conectados al comercio internacional con estándares elevados y barrios populares con servicios precarios, movilidad limitada y opciones educativas restringidas. La persistencia de estas brechas compromete la cohesión social y reduce el potencial de

aprendizaje colectivo que sostendría una trayectoria de desarrollo más inclusiva.

Las desigualdades educativas constituyen un núcleo duro de esta dinámica. La interrupción de trayectorias escolares durante la pandemia agravó rezagos en aprendizajes fundamentales y permanencia, especialmente en hogares con menor conectividad y apoyo escolar en casa (UNESCO, 2021, 2022; UNICEF, 2021).

En los territorios con oferta educativa históricamente tensionada, los riesgos de deserción y repitencia aumentan, lo que repercute en la tasa de culminación de la educación media y, en consecuencia, en el tránsito hacia la educación superior. La baja cobertura de programas técnicos, tecnológicos y universitarios en el entorno inmediato reduce opciones de continuidad, encareciendo los estudios por motivos de desplazamiento y manutención (SNIES—Ministerio de Educación Nacional). Este conjunto de restricciones limita la acumulación de capital humano, con efectos multiplicadores sobre empleo e ingresos.

La estructura del mercado de trabajo refleja y reproduce esas brechas. La teoría del capital humano y la evidencia minceriana muestran que la escolaridad y la calidad de los aprendizajes se traducen en primas salariales y en mayor probabilidad de empleo formal (Becker, 1993; Mincer, 1974; Hanushek y Woessmann, 2015).

En contextos urbanos con alta informalidad, las trayectorias laborales juveniles se concentran en ocupaciones de baja productividad, con rotación elevada y aprendizaje limitado en el puesto de trabajo (OIT, 2018). La combinación de menor escolaridad efectiva y débil certificación de competencias reduce la movilidad ocupacional y consolida segmentaciones por nivel educativo, género y territorio. Esta estructura impacta la demanda de bienes y servicios locales, restringe la base fiscal y debilita la viabilidad de inversiones públicas de calidad.

El tejido empresarial local añade otra capa de desigualdad. La evidencia administrativa sugiere que las micro y pequeñas unidades económicas enfrentan obstáculos para consolidarse—acceso al crédito, servicios de desarrollo empresarial, adopción tecnológica—y son particularmente sensibles a choques de demanda y a costos regulatorios (Confecámaras—RUES; World Bank, 2023).

En un entorno donde los eslabonamientos con el clúster logístico son débiles, la supervivencia a mediano plazo es baja y la renovación empresarial no se traduce en escalamiento productivo. La teoría de derrames de conocimiento advierte que, sin canales institucionales que conviertan conocimiento en oportunidades, la innovación queda

encapsulada y no permea al conjunto del ecosistema (Acs, Audretsch y Lehmann, 2013). Este patrón profundiza una brecha entre empresas integradas a cadenas de mayor valor y un universo de negocios de subsistencia.

Las desigualdades de ingresos y la pobreza—monetaria y multidimensional—operan como síntesis de estas dinámicas. Los análisis del DANE y de la CEPAL para Colombia han mostrado que los choques macroeconómicos recientes elevaron la pobreza y la vulnerabilidad en áreas urbanas con alta informalidad, afectando de manera desproporcionada a hogares con menor nivel educativo (DANE, 2020; CEPAL, 2021).

El PNUD ha insistido en que las privaciones acumuladas—educación, salud, vivienda, seguridad—limitan la capacidad de las personas para participar en mercados dinámicos y beneficiarse de las oportunidades del crecimiento (PNUD, 2022). En Buenaventura, estas restricciones se traducen en trayectorias de exclusión que difícilmente se revierten sin intervenciones integrales y sostenidas que aborden simultáneamente educación, empleo, servicios urbanos y seguridad económica.

La exclusión urbana persistente también tiene una dimensión territorial concreta: distancias efectivas a oportunidades, conectividad y costos de transporte,

disponibilidad de equipamientos y seguridad en los desplazamientos. La OCDE ha señalado que la productividad regional depende no solo de la localización de actividades, sino de la calidad de las conexiones físicas e institucionales que las vinculan (OECD, 2024).

En ciudades-puerto como Buenaventura, la desconexión entre corredores logísticos y movilidad urbana puede incrementar tiempos y costos para estudiantes y trabajadores, afectando asistencia escolar y participación laboral. Estos factores, sumados a la debilidad de servicios educativos y empresariales en barrios periféricos, consolidan patrones de baja movilidad social y de segmentación persistente.

En conjunto, las desigualdades estructurales configuran un entramado que limita el impacto territorial de la centralidad portuaria. Los marcos de la CEPAL y UNESCO convergen en destacar que la transformación educativa es condición para un desarrollo sostenible e inclusivo, mientras que la perspectiva de competitividad subraya la necesidad de clústeres con densidad institucional y aprendizaje continuo (CEPAL, 2022; UNESCO, 2021; Porter, 2001).

Para Buenaventura, el desafío consiste en cerrar las brechas que separan el dinamismo del comercio internacional de la vida cotidiana en los barrios, expandiendo capacidades,

fortaleciendo instituciones y articulando políticas que permitan traducir la posición estratégica en bienestar compartido.

Capítulo 2. Marco teórico: educación, capital humano y desarrollo territorial

La relación entre educación y desarrollo territorial descansa en una lógica de acumulación de capacidades que habilita tanto el aprendizaje individual como la transformación productiva colectiva. El enfoque de capacidades propone que las libertades para elegir y llevar adelante proyectos de vida están condicionadas por dotaciones educativas y por la calidad de los bienes públicos que sostienen la ciudadanía social (Sen, 1999; PNUD, 2022).

En economías abiertas y urbanizaciones aceleradas, los sistemas educativos definen la posición de los territorios frente a la innovación, la especialización productiva y la resiliencia ante choques; cuando fallan, la desigualdad se convierte en mecanismo reproductor de ineficiencias, frenando el crecimiento y deteriorando el bienestar (CEPAL, 2018, 2021, 2022).

El tránsito desde una escolaridad meramente acumulativa a una educación que garantice aprendizajes relevantes, competencias socioemocionales y formación para el trabajo configura el núcleo de un desarrollo inclusivo y sostenible.

Los fundamentos económicos de la educación se anclan en la teoría del capital humano, según la cual la escolaridad y la experiencia elevan la productividad y los ingresos, generando retornos privados y sociales (Becker, 1993; Mincer, 1974). Sin embargo, la evidencia comparada destaca que no basta con años de estudio: la calidad de los aprendizajes explica variaciones en crecimiento a largo plazo, adopción tecnológica y competitividad (Hanushek y Woessmann, 2015).

La articulación entre educación y sistema productivo opera también a través de derrames de conocimiento y del dinamismo emprendedor, que requieren canales institucionales para transformar ideas en oportunidades de negocio (Acs, Audretsch y Lehmann, 2013). En clústeres territoriales, la densidad institucional y la interacción entre empresas, centros de formación y agencias públicas definen el potencial de innovación y especialización (Porter, 2001; OECD, 2024).

La estructura social y laboral media, a su vez, modula el alcance de los efectos educativos. En mercados con alta informalidad, la transición de jóvenes desde la escuela hacia el empleo se ve condicionada por segmentaciones que penalizan a quienes acumulan menos credenciales y aprendizajes efectivos (OIT, 2018; ILO, 2020).

Los diagnósticos para Colombia resaltan restricciones de demanda de trabajo calificado en territorios periféricos, brechas de pertinencia entre oferta educativa y necesidades productivas, y déficits de habilidades básicas y digitales (Carranza et al., 2021; OECD, 2024). Estos rasgos inciden tanto en el nivel de productividad como en la capacidad de generar y sostener empresas formales, y se reflejan en patrones de pobreza, desigualdad de ingresos y movilidad social limitada (DANE, 2020; CEPAL, 2019, 2022; PNUD, 2022).

Las transformaciones aceleradas por la pandemia intensificaron estas tensiones. La interrupción educativa afectó de manera desigual a estudiantes y territorios con menor conectividad y menor disponibilidad de recursos pedagógicos, con impactos medibles sobre permanencia y aprendizajes (UNESCO, 2021, 2022; UNICEF, 2021).

En el plano macro, las disrupciones en empleo y actividad económica elevaron la vulnerabilidad de hogares con menor capital humano, profundizando la heterogeneidad territorial (CEPAL, 2021; World Bank, 2023).

Un marco teórico que conecte educación, capital humano y desarrollo territorial debe, por tanto, integrar la calidad de los aprendizajes, la estructura del mercado laboral, la dinámica empresarial y la gobernanza local, para explicar

por qué ciertos territorios transforman la escolaridad en productividad e innovación, mientras otros quedan atrapados en círculos de baja calificación, informalidad y fragilidad productiva.

2.1. Educación y crecimiento económico: fundamentos conceptuales

El punto de partida conceptual reside en la noción de que la educación acumula capital humano, elevando la productividad de las personas y generando externalidades que se traducen en crecimiento económico. Becker (1993) formalizó la inversión en educación como una decisión intertemporal basada en costos presentes y beneficios futuros, donde los rendimientos dependen de la calidad del proceso formativo y de la demanda de habilidades en el mercado.

Mincer (1974) aportó una formulación empírica que asocia la escolaridad y la experiencia con el logaritmo del salario, proporcionando una base para estimar primas educativas. Estas ideas, al trasladarse a escalas territoriales, implican que una mayor dotación de educación relevante puede modificar trayectorias de productividad y de ingresos agregados, siempre que existan mercados y estructuras institucionales capaces de absorber y recompensar esas competencias.

La calidad de los aprendizajes es un determinante crítico del vínculo entre educación y crecimiento. Hanushek y Woessmann (2015) han documentado que las competencias en matemáticas, lectura y ciencias predicen el crecimiento económico más que los años de escolaridad por sí solos, al capturar la capacidad de las personas para resolver problemas, adaptarse tecnológicamente y aprender a lo largo de la vida.

Esta perspectiva se alinea con la agenda de UNESCO sobre la necesidad de renovar el contrato social de la educación, de modo que los sistemas no solo expandan cobertura sino que aseguren aprendizajes con sentido y pertinencia para sociedades en transformación digital y ecológica (UNESCO, 2021, 2022). En territorios con brechas de calidad, incluso expansiones de cobertura pueden derivar en retornos decrecientes si no se corrigen rezagos en aprendizaje efectivo.

Los canales a través de los cuales la educación impulsa el crecimiento se despliegan en múltiples niveles. A nivel micro, mayores competencias elevan la productividad individual y la capacidad de acceder a empleos formales, con efectos sobre ingresos y estabilidad laboral (Becker, 1993; Mincer, 1974).

A nivel meso, la agregación de talento facilita la adopción de tecnologías y la difusión de buenas prácticas productivas, así como la constitución de clústeres con proveedores y servicios avanzados (Porter, 2001; OECD, 2024).

A nivel macro, la masa crítica de capital humano favorece la innovación y los derrames de conocimiento, dinamizando el emprendimiento y la diversificación productiva (Acs, Audretsch y Lehmann, 2013). Cada uno de estos niveles requiere instituciones que coordinen esfuerzos, financien bienes públicos y aseguren reglas previsibles, de modo que las inversiones educativas se conviertan en crecimiento sostenido.

La desigualdad condiciona fuertemente estos mecanismos. La CEPAL ha enfatizado que la desigualdad no solo es ineficiente, sino que introduce fricciones que reducen la productividad: restringe el acceso a educación de calidad, segmenta mercados de trabajo y desincentiva la inversión en capital humano entre hogares de bajos ingresos (CEPAL, 2018, 2019, 2022).

En este contexto, la expansión educativa que no corrige las brechas de calidad tiende a mantener o incluso ampliar las disparidades en retornos, limitando el impacto sobre el crecimiento. La perspectiva de desarrollo humano añade que las privaciones acumuladas

en salud, vivienda y seguridad merman la capacidad de los individuos para convertir la escolaridad en logros efectivos, con pérdidas de bienestar y eficiencia (PNUD, 2022; Sen, 1999).

El entorno macroeconómico y la estructura institucional determinan la magnitud de los rendimientos sociales de la educación. Diagnósticos internacionales señalan que en economías con mercados competitivos, protección de derechos y políticas de innovación, el capital humano se traduce con mayor facilidad en productividad y crecimiento (OECD, 2024; World Bank, 2023).

Por el contrario, en entornos con informalidad extendida, débil competencia y baja densidad institucional, los incentivos a invertir en educación disminuyen y los retornos efectivos se diluyen. La OIT ha documentado que los jóvenes en mercados informales enfrentan trayectorias laborales fragmentadas que limitan el aprendizaje en el puesto de trabajo, reduciendo el acervo de habilidades acumuladas a lo largo de la vida (OIT, 2018; ILO, 2020). Esas condiciones restringen el potencial de la educación para impulsar el crecimiento territorial.

La evidencia reciente sobre choques como la pandemia muestra cómo la interrupción de procesos educativos puede repercutir a medio plazo en la productividad agregada. Las

pérdidas de aprendizaje documentadas por UNESCO y UNICEF, especialmente en contextos de baja conectividad, anticipan menores habilidades básicas y digitales entre cohortes afectadas, con efectos sobre la adopción tecnológica y la transición al empleo (UNESCO, 2021, 2022; UNICEF, 2021).

La CEPAL ha subrayado que, sin políticas compensatorias, estos choques amplifican rezagos estructurales y reducen el potencial de crecimiento, particularmente en territorios con baja capacidad fiscal y alta informalidad (CEPAL, 2021). La resiliencia del vínculo educación-crecimiento, por tanto, depende de la capacidad institucional para sostener continuidad pedagógica, recuperar aprendizajes y alinear formación con requerimientos productivos.

Finalmente, la mirada territorial matiza los fundamentos conceptuales. La misma inversión educativa puede generar impactos dispares según la estructura productiva local, la conectividad y la gobernanza. En ciudades con clústeres dinámicos y redes de conocimiento, los derrames son más probables y los retornos sociales de la educación se amplifican; en territorios con economías de enclave y escasos encadenamientos, la escolaridad puede traducirse en migración de talento o en subutilización de habilidades.

Esta heterogeneidad refuerza la importancia de articular políticas educativas con estrategias de desarrollo productivo y fortalecimiento institucional, de modo que el capital humano se convierta en un motor de crecimiento y no en una promesa incumplida (Porter, 2001; Acs, Audretsch y Lehmann, 2013; OECD, 2024).

2.2. Capital humano, productividad y sostenibilidad empresarial

El desempeño de las empresas depende de la combinación entre organización del trabajo, tecnologías disponibles y calidad del capital humano que movilizan. La teoría del capital humano postula que trabajadores con mayor escolaridad y formación específica elevan la eficiencia de los procesos, reducen errores y habilitan adaptaciones rápidas a cambios técnicos (Becker, 1993).

En términos microeconómicos, la productividad marginal del trabajo aumenta con competencias cognitivas y no cognitivas, mientras la estructura de salarios refleja estas diferencias a través de primas educativas y ocupacionales (Mincer, 1974). En contextos de acelerada digitalización, la calidad de los aprendizajes básicos—resolver problemas, comunicar, manejar información—se vuelve determinante para absorber tecnologías y reorganizar procesos, como subraya la

evidencia internacional sobre conocimiento y crecimiento (Hanushek y Woessmann, 2015).

La sostenibilidad empresarial se construye sobre la capacidad de aprender y de innovar. Los derrames de conocimiento—formales e informales—alimentan procesos de mejora continua, diversificación de productos y adopción de estándares, pero requieren una base mínima de habilidades y canales institucionales que conviertan información en valor (Acs, Audretsch y Lehmann, 2013).

La densidad de un clúster, en el sentido de Porter (2001), refuerza estos efectos al facilitar el encuentro entre proveedores especializados, servicios técnicos, centros de formación y financiamiento. Allí donde faltan eslabones—instituciones de apoyo, oferta de formación técnica pertinente, redes empresariales—las empresas enfrentan mayores costos para innovar y menores probabilidades de supervivencia frente a la competencia y los choques de demanda.

Las brechas de habilidades tienen efectos medibles sobre productividad y costos. El desajuste entre las competencias que demanda el puesto y las que posee el trabajador genera ineficiencias, rotación y sobrecostos en inducción y supervisión. Diagnósticos recientes para Colombia identifican cuellos de botella en habilidades básicas, digitales y gerenciales que

afectan especialmente a micro y pequeñas empresas, que son, a su vez, las más expuestas a la informalidad y a la volatilidad de la demanda (Carranza et al., 2021; OECD, 2024).

La OIT ha señalado que, en entornos con alta informalidad, las firmas reducen su horizonte de planificación y evitan inversiones en capacitación, lo que atrapa al tejido productivo en un equilibrio de baja productividad y baja calidad del empleo (OIT, 2018). Esta trampa erosiona la sostenibilidad empresarial al limitar la acumulación de capacidades organizacionales.

La relación entre capital humano y supervivencia de empresas jóvenes es particularmente estrecha. La literatura de emprendimiento basada en conocimiento sugiere que la conversión de ideas en modelos de negocio viables depende tanto del stock de habilidades técnicas y gerenciales como de la disponibilidad de mentoría, redes y financiamiento (Acs, Audretsch y Lehmann, 2013).

En Colombia, la dinámica de creación y extinción registradas en el RUES ilustra la sensibilidad de las firmas a cambios de ciclo, costos regulatorios y shocks externos; la supervivencia a 1, 3 y 5 años se asocia positivamente con capacidades de gestión, formalización y acceso a servicios

empresariales, condiciones que a su vez reflejan dotaciones locales de capital humano y densidad institucional (Confecámaras—RUES; OECD, 2024). Sin fortalecer estas capacidades, la rotación empresarial se traduce en aprendizaje frágil y escasos encadenamientos.

La organización del trabajo y la calidad gerencial median la productividad. Estudios comparados han destacado que prácticas de gestión—metas claras, monitoreo, incentivos y mejora continua—explican variaciones significativas de productividad entre firmas y territorios, pero su adopción es más probable cuando hay perfiles formados que puedan implementarlas y sostenerlas (OECD, 2024; World Bank, 2023).

La formación para el trabajo con foco en habilidades técnicas y transversales, combinada con educación superior pertinente y accesible, aumenta la probabilidad de que las empresas internalicen rutinas de calidad, estandarización y trazabilidad, fundamentales en cadenas logísticas y manufactureras. El resultado es un círculo virtuoso donde el capital humano mejora procesos, y procesos más sofisticados elevan la demanda por habilidades.

La sostenibilidad empresarial también depende de la capacidad de adaptarse a transiciones tecnológicas y regulatorias. La digitalización de trámites, la trazabilidad en

tiempo real y los estándares ambientales exigen nuevas competencias en todos los niveles de la organización. Hanushek y Woessmann (2015) enfatizan que los sistemas que garantizan aprendizajes sólidos logran adoptar tecnologías con menores costos de ajuste; sin ese piso, la automatización puede desplazar ocupaciones sin crear empleos de mayor calidad en el territorio.

La UNESCO ha planteado que reformas curriculares y modelos pedagógicos que integren ciudadanía digital, pensamiento crítico y colaboración son claves para preparar a la fuerza laboral frente a transformaciones futuras (UNESCO, 2021, 2022). Para las empresas, esto se traduce en una mayor resiliencia operacional y estratégica.

Por último, la sostenibilidad financiera y social de las firmas se relaciona con la estabilidad del empleo y la formalización. La evidencia de la OIT y del Banco Mundial muestra que empresas que invierten en formación y consolidan relaciones laborales formales no solo elevan productividad, sino que amortiguan choques y reducen rotación, con impactos positivos sobre ingresos y recaudación (OIT, 2018; World Bank, 2023).

En territorios donde el capital humano es escaso y la educación superior tiene baja cobertura, las firmas sustituyen inversión en

personas por estrategias de subcontratación y automatización, limitando la creación de valor local. Revertir esta trayectoria requiere alinear la estrategia empresarial con políticas de capital humano, encadenamientos productivos y servicios de desarrollo empresarial, una agenda que la OCDE y la CEPAL consideran esencial para cerrar brechas territoriales de productividad (OECD, 2024; CEPAL, 2022).

2.3. Educación, desigualdad y movilidad social

Por una parte, la educación opera como el principal mecanismo institucional de igualación de oportunidades; por otra, cuando la calidad y el acceso son desiguales, la escuela cristaliza brechas y reproduce jerarquías sociales. La teoría del capital humano sugiere que el retorno a la escolaridad depende tanto de años cursados como de competencias efectivamente adquiridas (Becker, 1993; Mincer, 1974; Hanushek y Woessmann, 2015).

En territorios periféricos, la dispersión en aprendizajes básicos genera primas educativas heterogéneas y, por ende, trayectorias laborales divergentes. La CEPAL ha insistido en que la desigualdad actúa como freno a la productividad al limitar la acumulación de capacidades en los hogares con menos recursos, profundizando la

heterogeneidad estructural (CEPAL, 2018, 2019).

En efecto, la movilidad social se ve constreñida cuando la escuela no logra compensar desventajas de origen y cuando el mercado de trabajo castiga a quienes no alcanzan certificaciones clave.

Asimismo, la evidencia sugiere que la calidad educativa es el eslabón crítico entre escolaridad y movilidad. Hanushek y Woessmann (2015) muestran que las habilidades en lectura, matemáticas y ciencias son predictores robustos de ingresos y crecimiento, más allá de la cantidad de años de estudio. En contextos urbanos con infraestructura escolar desigual y limitaciones de conectividad, la brecha de calidad se traduce en rezagos persistentes.

La agenda de UNESCO sobre un nuevo contrato social para la educación enfatiza que garantizar aprendizajes relevantes y equitativos es condición para sociedades más cohesionadas y productivas (UNESCO, 2021, 2022). De no hacerlo, los retornos a la educación se polarizan: altos para segmentos con escuelas efectivas, bajos para quienes acumulan credenciales con contenidos frágiles.

A la par, la transición de la escuela al trabajo es un momento de alta vulnerabilidad. Diagnósticos laborales en Colombia identifican

barreras de acceso a empleos de calidad para jóvenes con menos capital educativo y con competencias digitales incipientes, particularmente en territorios con escasa demanda de trabajo calificado (Carranza et al., 2021; OECD, 2024).

La OIT documenta que, en mercados con elevada informalidad, los jóvenes tienden a aceptar ocupaciones de baja productividad que ofrecen escaso aprendizaje en el puesto, consolidando trayectorias de precariedad (OIT, 2018; ILO, 2020). De esta forma, la ausencia de prácticas de formación para el trabajo, pasantías y articulación educativa-empresarial limita la movilidad intergeneracional al reducir la probabilidad de acceso a empleos formales desde etapas tempranas.

No obstante, las dinámicas de género y territorio complejizan el panorama. La desigual distribución del trabajo de cuidado y la inseguridad en la movilidad urbana afectan la permanencia educativa y las decisiones de participación laboral de las mujeres, condicionando sus retornos educativos (CEPAL, 2019, 2022; PNUD, 2022). Además, en ciudades portuarias con segregación residencial, las distancias efectivas a equipamientos educativos de calidad y a oportunidades laborales incrementan costos de tiempo y de transporte, con efectos sobre asistencia y retención.

Tales fricciones territoriales interactúan con la estructura productiva para generar trampas espaciales de baja movilidad social, donde la combinación de escuela débil e inserción informal reproduce desigualdades.

Por consiguiente, la educación superior adquiere un papel decisivo como pasarela hacia ocupaciones de mayor productividad. Las brechas de acceso y permanencia en programas técnicos, tecnológicos y universitarios —mediadas por costos directos e indirectos, así como por la oferta local— determinan en gran medida la probabilidad de movilidad ascendente (SNIES—Ministerio de Educación Nacional).

Sin embargo, cuando la pertinencia curricular no dialoga con las demandas del tejido productivo, incluso la titulación puede traducirse en subempleo o desajuste de habilidades. La OCDE ha señalado que la alineación entre competencias y necesidades sectoriales eleva la productividad y reduce la informalidad, mientras que su ausencia perpetúa ineficiencias (OECD, 2024).

Entre tanto, la pandemia añadió un shock que exagera los mecanismos de transmisión intergeneracional de la desigualdad. La interrupción prolongada de clases presenciales afectó con mayor intensidad a estudiantes de hogares con menor conectividad y apoyo

pedagógico, elevando rezagos en aprendizaje y riesgos de abandono (UNESCO, 2021, 2022; UNICEF, 2021). La CEPAL advierte que, sin políticas de recuperación focalizadas, estos déficits pueden traducirse en menores ingresos a lo largo de la vida y en mayor probabilidad de informalidad (CEPAL, 2021). En territorios con restricciones fiscales y capacidades institucionales limitadas, la recuperación de aprendizajes requiere coordinación intersectorial y estrategias costo-efectivas para evitar la ampliación de las brechas.

En suma, la movilidad social depende de un conjunto integrado de condiciones: calidad educativa en los primeros ciclos, transiciones ordenadas a la media y a la superior, articulación con el mercado laboral y protección frente a choques. La perspectiva de desarrollo humano subraya que expandir libertades reales — educación, salud, seguridad y participación— es indispensable para convertir la escolaridad en logros de vida y productividad (Sen, 1999; PNUD, 2022).

Allí donde estas dimensiones se articulan, la educación cumple su promesa igualadora; donde no, opera como filtro que selecciona y reproduce ventajas preexistentes. 2.4. Enfoques críticos sobre desarrollo urbano en territorios periféricos De entrada, los enfoques críticos sostienen que la inserción de territorios

periféricos en circuitos globales de acumulación puede configurar economías de enclave que maximizan flujos externos sin generar encadenamientos locales sólidos.

La heterogeneidad estructural descrita por la CEPAL implica la coexistencia de sectores de alta productividad vinculados al comercio internacional con amplias franjas de baja productividad y precariedad laboral (CEPAL, 2018, 2021). Esta dualidad, reforzada por fallas de gobernanza y debilidades en el capital humano, dificulta la transformación productiva y alimenta patrones de segregación urbana. En ciudades-puerto, el riesgo consiste en consolidar un corredor logístico eficiente hacia afuera y un sistema urbano fragmentado hacia adentro.

Ahora bien, la teoría de clústeres de Porter (2001) ofrece un contrapunto útil: la especialización puede ser palanca de desarrollo si se acompaña de proveedores sofisticados, servicios avanzados, instituciones de apoyo y mercados laborales profundos.

Con todo, los enfoques críticos advierten que, en ausencia de capacidades locales, el clúster degenera en enclave: los eslabones de mayor valor se localizan fuera, los derrames de conocimiento son exiguos y la competencia se centra en costos, no en innovación (Acs, Audretsch y Lehmann, 2013). En tales casos, la

escolaridad insuficiente y la oferta formativa poco pertinente impiden convertir la centralidad logística en plataforma de aprendizaje territorial.

Por otro lado, la perspectiva de capacidades resalta que el desarrollo no se reduce a crecimiento del ingreso, sino a la ampliación de libertades reales para elegir proyectos de vida (Sen, 1999; PNUD, 2022). Bajo esta lente, la planificación urbana en territorios periféricos debe priorizar bienes públicos que habiliten capacidades —educación, salud, movilidad segura, conectividad— y una arquitectura institucional que reduzca arbitrariedades.

La OCDE subraya que políticas place-based, coordinadas multiescalarmente, mejoran la productividad regional cuando integran inversiones en capital humano con infraestructura y servicios (OECD, 2024). Sin esa coordinación, las políticas sectoriales operan en silos y refuerzan la fragmentación urbana.

A su vez, la estructura de la informalidad es clave para entender las trayectorias urbanas periféricas. La OIT sostiene que la informalidad no solo refleja costos regulatorios, sino también baja productividad y falta de capacidades, lo que configura equilibrios de subsistencia que son difíciles de romper (OIT, 2018).

En ciudades-portuarias con demanda estacional o volátil, esta informalidad se expande en torno a servicios conexos, transporte y comercio menor, absorbiendo empleo pero sin generar aprendizaje acumulativo. El resultado es una circulación de mano de obra entre ocupaciones de baja calidad que erosiona la base fiscal y debilita la provisión de bienes públicos.

Conviene subrayar, además, el papel de la información y la evaluación para orientar la acción pública. Los sistemas estadísticos y registros administrativos —DANE para pobreza y mercado laboral; SNIES para educación superior; registros educativos para básica y media; RUES para demografía empresarial— posibilitan diagnósticos más finos y políticas adaptadas a las necesidades locales (DANE, 2020, 2023; SNIES—Ministerio de Educación Nacional; Confecámaras—RUES).

No obstante, las limitaciones de oportunidad, cobertura y representatividad a escala municipal imponen cautela y exigen complementar con análisis cualitativos y de territorio. La CEPAL ha sostenido que sin capacidades de monitoreo y evaluación, las intervenciones tienden a ser reactivas y poco sostenibles (CEPAL, 2021).

En paralelo, los choques recientes mostraron los costos de la descoordinación. La pandemia

desnudó brechas de conectividad escolar, acceso a salud y protección social, con impactos diferenciales por barrio y condición socioeconómica (UNESCO, 2021, 2022; UNICEF, 2021; CEPAL, 2021).

En los territorios periféricos, la continuidad educativa dependió de redes comunitarias y de la resiliencia institucional local, y su ausencia amplificó el deterioro de aprendizajes y bienestar. Por ende, los enfoques críticos proponen fortalecer la gobernanza colaborativa, integrar a organizaciones sociales en la planificación y priorizar inversiones que reduzcan vulnerabilidades estructurales en educación y empleo.

Finalmente, la inserción internacional debe reequilibrarse mediante políticas que promuevan encadenamientos y aprendizaje. El Banco Mundial y la OCDE señalan que estrategias de competitividad inclusiva — formación dual, certificación de competencias, servicios de desarrollo empresarial, financiamiento para adopción tecnológica— incrementan la productividad y la formalidad cuando se alinean con clústeres locales (World Bank, 2023; OECD, 2024).

Alineado con la CEPAL, este enfoque enfatiza que transformar la educación es base del desarrollo sostenible y que la reducción de desigualdades es condición para el aumento de

la productividad (CEPAL, 2022). En territorios periféricos, la combinación de políticas place-based, fortalecimiento institucional y capital humano pertinente es el camino para superar la lógica de enclave y construir un desarrollo urbano más equitativo y resiliente.

Capítulo 3. Evolución de la educación básica y secundaria en Buenaventura

La educación básica y secundaria constituye uno de los pilares centrales para la acumulación de capital humano y la reproducción social de los territorios, particularmente en contextos marcados por desigualdades estructurales persistentes.

En ciudades como Buenaventura, en las que la precariedad socioeconómica se entrelaza con una histórica debilidad institucional, el sistema educativo ha operado bajo condiciones de alta fragilidad, lo que se traduce en trayectorias escolares inestables, coberturas insuficientes y profundas brechas frente a los promedios nacionales. Estas dinámicas no pueden entenderse como fallas aisladas del sector educativo, sino como expresiones de un entramado más amplio de exclusión social y económica que condiciona el acceso, la permanencia y el logro educativo.

El análisis de la evolución educativa en este territorio revela que los avances formales en cobertura no han sido suficientes para revertir los patrones de rezago estructural. Aun cuando Colombia ha logrado incrementos sostenidos en la asistencia escolar durante las últimas

décadas, dichos progresos han sido desiguales entre regiones y grupos poblacionales, reproduciendo una geografía educativa profundamente segmentada.

La evidencia nacional muestra que los territorios con mayores niveles de pobreza monetaria y multidimensional presentan tasas más bajas de asistencia y mayores probabilidades de abandono escolar, especialmente en los niveles de secundaria y media (DANE, 2020; Monroy, Ramírez & Núñez, 2021).

En Buenaventura, estas tensiones se manifiestan con particular intensidad debido a la combinación de ingresos familiares inestables, alta informalidad laboral y limitadas capacidades de absorción del sistema educativo local. La educación básica y media se convierte así en un espacio donde confluyen las carencias materiales de los hogares, las restricciones de infraestructura escolar y la débil articulación entre política educativa y realidad socioeconómica.

Esta convergencia termina afectando de manera directa la continuidad educativa de niños y adolescentes, reforzando trayectorias de exclusión que se proyectan posteriormente sobre el mercado laboral y la estructura productiva del territorio. Desde una perspectiva de desarrollo territorial, la crisis educativa en

los niveles básicos no solo compromete las oportunidades individuales, sino que limita las posibilidades colectivas de transformación económica y social.

La acumulación deficiente de capital humano en etapas tempranas condiciona la productividad futura, reduce la movilidad social y debilita la base sobre la cual podrían sostenerse procesos de diversificación productiva e innovación. En este sentido, la evolución de la educación básica y secundaria en Buenaventura se configura como un eje explicativo central del deterioro socioeconómico más amplio que atraviesa la ciudad, en coherencia con los diagnósticos sobre desigualdad estructural y desarrollo desigual en Colombia (CEPAL, 2018; CEPAL, 2022).

3.1. Cobertura educativa: tendencias históricas y comparaciones nacionales

La cobertura educativa en Colombia ha experimentado una expansión progresiva desde comienzos del siglo XXI, particularmente en los niveles de educación primaria y básica secundaria, como resultado de políticas orientadas a la universalización del acceso.

De acuerdo con información oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las tasas de asistencia escolar a nivel

nacional alcanzaron valores cercanos al 90 % en los grupos de edad correspondientes a la educación básica, lo que refleja un avance significativo en términos agregados (DANE, 2019). Sin embargo, este comportamiento promedio oculta profundas disparidades territoriales que afectan de manera desproporcionada a ciudades portuarias y periféricas como Buenaventura.

Al desagregar la información por niveles educativos, se observa que la asistencia escolar nacional para la población entre 11 y 14 años —correspondiente a la educación básica secundaria— se sitúa alrededor del 88 %, mientras que, para el grupo de 15 a 16 años, asociado a la educación media, la tasa desciende de forma marcada hasta aproximadamente el 74 % (DANE, 2020).

Esta caída evidencia un punto crítico del sistema educativo colombiano, en el que la transición hacia niveles superiores se convierte en un filtro social que expulsa progresivamente a los estudiantes provenientes de hogares más vulnerables. En territorios con altos índices de pobreza, esta tendencia se intensifica.

Buenaventura se inscribe plenamente dentro de este patrón de rezago. Los diagnósticos sobre pobreza monetaria y multidimensional muestran que el municipio ha presentado niveles persistentemente superiores al

promedio nacional, lo cual incide directamente en la capacidad de los hogares para sostener la escolaridad de niños y adolescentes (DANE, 2020; Monroy et al., 2021). En contextos donde una proporción significativa de la población depende de ingresos informales e inestables, la educación secundaria suele verse interrumpida por la necesidad de contribuir económicamente al hogar o por la imposibilidad de asumir costos asociados a la permanencia escolar.

La comparación con otras zonas urbanas del país permite dimensionar la magnitud de la brecha. Mientras en ciudades con mayor diversificación económica y mejores indicadores de ingreso la cobertura en secundaria y media logra amortiguar los efectos de choques económicos, en Buenaventura la asistencia escolar resulta altamente sensible a crisis sociales y laborales. La literatura sobre desigualdad educativa en Colombia ha documentado que en municipios con mayores niveles de exclusión, las tasas de asistencia pueden situarse varios puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, profundizando la desigualdad interregional (CEPAL, 2019; CEPAL, 2022).

Este comportamiento no responde únicamente a factores individuales, sino a una estructura territorial que limita el ejercicio efectivo del derecho a la educación. La cobertura

formal, medida en términos de matrícula, no siempre se traduce en asistencia regular ni en trayectorias educativas continuas. En Buenaventura, la fragilidad del entorno socioeconómico incrementa la probabilidad de interrupciones escolares, particularmente en la secundaria, donde las exigencias académicas y los costos indirectos aumentan de manera significativa.

Desde una perspectiva histórica, la evolución de la cobertura educativa en el municipio revela una expansión incompleta y desigual, incapaz de cerrar las brechas frente al promedio nacional. Aunque los indicadores nacionales sugieren avances sostenidos en acceso, la persistencia de condiciones estructurales adversas en Buenaventura ha impedido que dichos avances se consoliden de manera efectiva.

Esta situación refuerza un círculo de rezago educativo que se proyecta hacia el mercado laboral, la productividad local y la sostenibilidad empresarial, configurando uno de los núcleos centrales del deterioro socioeconómico del territorio (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2015).

3.2. Deserción, repitencia y permanencia escolar

La deserción escolar constituye uno de los indicadores más sensibles de la fragilidad estructural de los sistemas educativos en contextos de pobreza persistente. En Colombia, los datos oficiales muestran que la probabilidad de abandono aumenta significativamente a partir de la educación secundaria, especialmente entre estudiantes provenientes de hogares con menores niveles de ingreso y alta vulnerabilidad socioeconómica (DANE, 2020).

Este fenómeno no responde únicamente a decisiones individuales, sino a la interacción entre condiciones materiales adversas, trayectorias educativas fragmentadas y limitadas capacidades institucionales para garantizar la permanencia escolar.

Para comprender la dimensión cuantitativa del deterioro de la educación media en Buenaventura es necesario observar las tendencias de matrícula y deserción en los últimos años. Según los datos consolidados por la Fundación ExE a partir de registros oficiales de la Secretaría de Educación y el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), entre 2019 y 2022 la tasa de deserción en educación secundaria en el distrito pasó de 2,03 % a 5,66 %, indicando no solo mayores tasas de

abandono sino, en términos efectivos, una reducción del número de estudiantes activos en ese nivel educativo.

En particular, en 2022 la deserción en secundaria se situó en 7,06 %, la más alta entre los niveles educativos de básica y media registrados para ese año, lo que confirma que el fenómeno de abandono escolar en adolescencia es un componente estructural del rezago educativo local y no un hecho coyuntural aislado.

En Buenaventura, la deserción escolar se configura como una expresión aguda de estas tensiones estructurales. La elevada incidencia de pobreza monetaria y multidimensional incrementa la presión económica sobre los hogares, lo que se traduce en la necesidad de que niños y adolescentes participen tempranamente en actividades informales o de subsistencia.

De acuerdo con los análisis de pobreza urbana en Colombia, los municipios con mayores privaciones estructurales presentan tasas de abandono escolar superiores al promedio nacional, particularmente en los niveles de secundaria y media (Monroy et al., 2021).

La repitencia escolar, estrechamente vinculada a la deserción, refuerza estos patrones de exclusión educativa. Los estudiantes que repiten grados enfrentan mayores

probabilidades de abandonar el sistema educativo de manera definitiva, debido al rezago edad-grado y a la estigmatización asociada al bajo rendimiento académico.

La evidencia nacional indica que la repitencia se concentra en contextos donde confluyen deficiencias en la calidad educativa, carencias socioeconómicas y limitada atención a la diversidad de trayectorias escolares (CEPAL, 2019). En Buenaventura, estas condiciones se superponen, generando trayectorias educativas discontinuas y altamente vulnerables.

La permanencia escolar, entendida como la capacidad del sistema educativo para retener a los estudiantes hasta la finalización de los ciclos formativos, se ve seriamente comprometida en este contexto. Mientras en zonas con mayor estabilidad económica la permanencia se ve respaldada por redes familiares, ingresos más previsibles y mayores expectativas de movilidad social, en Buenaventura la escolaridad compite directamente con la urgencia de la subsistencia diaria. Esta tensión erosiona el valor social de la educación en el corto plazo, aun cuando sus beneficios de largo plazo sean ampliamente reconocidos (Becker, 1993).

Los efectos acumulativos de la deserción y la repitencia trascienden el ámbito educativo. La interrupción temprana de la escolaridad limita la adquisición de competencias básicas, reduce

las oportunidades de inserción laboral formal y refuerza la reproducción intergeneracional de la pobreza. Desde una perspectiva de capital humano, estas dinámicas debilitan la base productiva del territorio, condicionando su capacidad de atraer inversión, sostener empresas y generar empleo de calidad (Hanushek & Woessmann, 2015).

En síntesis, la deserción, la repitencia y la baja permanencia escolar en Buenaventura no constituyen fenómenos aislados ni coyunturales, sino manifestaciones estructurales de un modelo de desarrollo territorial excluyente. Su persistencia consolida un ciclo de vulnerabilidad educativa que se proyecta directamente sobre el deterioro económico y social del municipio, reforzando las brechas frente al promedio nacional y limitando las posibilidades de transformación estructural.

3.3. Infraestructura educativa, calidad y brechas territoriales

La infraestructura educativa representa un componente fundamental para garantizar condiciones mínimas de calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A nivel nacional, los avances en cobertura han convivido con rezagos persistentes en infraestructura, particularmente en territorios periféricos y con menor capacidad fiscal. La evidencia disponible señala que la

calidad de los entornos escolares incide directamente en la permanencia, el rendimiento académico y la motivación estudiantil, configurándose como un factor clave en la reproducción de desigualdades educativas (CEPAL, 2018).

En Buenaventura, las brechas en infraestructura educativa reflejan de manera nítida las desigualdades territoriales históricas. La insuficiencia de aulas, el deterioro físico de las instituciones, la limitada dotación tecnológica y las restricciones en servicios básicos afectan de manera directa la experiencia escolar de niños y adolescentes. Estas carencias no solo dificultan la implementación de currículos pertinentes, sino que refuerzan la percepción de una educación de menor calidad en comparación con otros contextos urbanos del país.

La calidad educativa, entendida de forma integral, no puede desvincularse de las condiciones materiales en las que se desarrolla el proceso formativo. Estudios sobre desigualdad educativa en América Latina han demostrado que los estudiantes que asisten a instituciones con infraestructura precaria presentan mayores probabilidades de bajo desempeño y abandono escolar (CEPAL, 2019).

En Buenaventura, esta relación se ve amplificada por la combinación de

infraestructura deficiente y contextos sociales altamente vulnerables, lo que limita la efectividad de las políticas educativas tradicionales.

Las brechas territoriales en infraestructura también se expresan en la capacidad de adaptación del sistema educativo frente a choques externos. Durante la pandemia de COVID-19, las limitaciones tecnológicas y de conectividad profundizaron las desigualdades existentes, afectando con mayor intensidad a los territorios con menor acceso a recursos digitales (CEPAL, 2020; UNICEF, 2021). En Buenaventura, estas restricciones interrumpieron procesos de aprendizaje y aumentaron el riesgo de deserción, especialmente en la educación secundaria.

Desde una perspectiva de desarrollo territorial, la persistencia de infraestructuras educativas precarias limita la acumulación de capital humano y reduce las posibilidades de movilidad social. La calidad de la educación básica y media condiciona directamente la transición hacia la educación superior y el mercado laboral, generando efectos de largo plazo sobre la productividad y la cohesión social (Hanushek & Woessmann, 2015). En este sentido, las brechas en infraestructura no son únicamente un problema sectorial, sino un obstáculo estructural para el desarrollo local.

La superación de estas brechas requiere una mirada integral que reconozca la interdependencia entre infraestructura, calidad educativa y contexto socioeconómico. Mientras estas dimensiones continúen abordándose de manera fragmentada, la educación en Buenaventura seguirá reproduciendo patrones de exclusión territorial, reforzando el rezago frente al promedio nacional y limitando la capacidad transformadora del sistema educativo.

3.4. Impactos sociales de la crisis en educación básica y media

La crisis de la educación básica y media en Buenaventura genera impactos sociales que trascienden ampliamente el ámbito escolar. La interrupción de trayectorias educativas en etapas tempranas debilita los procesos de socialización, limita el desarrollo de competencias fundamentales y reduce las oportunidades de integración social de niños y adolescentes. En contextos de alta vulnerabilidad, la escuela cumple una función protectora que va más allá de la transmisión de conocimientos, por lo que su debilitamiento tiene efectos sociales profundos y duraderos (UNESCO, 2021).

Uno de los impactos más visibles de esta crisis es la incorporación temprana de jóvenes a

actividades informales y precarias. La falta de permanencia en el sistema educativo incrementa la probabilidad de inserción en ocupaciones de baja productividad, caracterizadas por ingresos inestables y ausencia de protección social. La evidencia nacional indica que los jóvenes con niveles educativos incompletos presentan tasas significativamente más altas de informalidad y desempleo, reforzando ciclos de exclusión económica (OIT, 2018; Carranza et al., 2021).

La crisis educativa también incide en la profundización de la desigualdad social y territorial. La educación básica y media actúa como un mecanismo clave de movilidad social; cuando este mecanismo falla, las desigualdades de origen tienden a reproducirse de manera intergeneracional. En Buenaventura, la persistencia de trayectorias educativas truncadas refuerza la segmentación social y limita la capacidad del territorio para generar capital social y cohesión comunitaria (CEPAL, 2018; Monroy et al., 2021).

Adicionalmente, la desvinculación temprana del sistema educativo incrementa la exposición de niños y adolescentes a contextos de riesgo social. La ausencia de la escuela como espacio de protección y acompañamiento favorece la vinculación a dinámicas de violencia estructural, economías ilegales y entornos de alta

vulnerabilidad. Diversos informes internacionales han señalado que la interrupción educativa en contextos urbanos marginales incrementa la probabilidad de trayectorias vitales marcadas por la exclusión y la precariedad (UNICEF, 2021; UNESCO, 2022).

Desde una perspectiva territorial, estos impactos sociales afectan la capacidad de Buenaventura para construir un proyecto de desarrollo inclusivo. La erosión del capital humano desde la educación básica compromete la sostenibilidad de los procesos productivos, debilita el tejido empresarial y limita la atracción de inversiones que demandan fuerza laboral calificada. La crisis educativa se convierte así en un factor estructural del estancamiento económico y social del municipio (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2015).

En conjunto, los impactos sociales de la crisis en educación básica y media configuran un escenario de alta vulnerabilidad para el presente y el futuro de Buenaventura. La persistencia de estos patrones refuerza el declive educativo, económico y social del territorio, consolidando brechas profundas frente al promedio nacional y evidenciando la urgencia de intervenciones estructurales que reconozcan la centralidad de la educación en cualquier estrategia de recuperación territorial.

Capítulo 4. La educación superior en Buenaventura: baja cobertura y limitaciones estructurales

La educación superior es un eslabón decisivo en la transición entre el sistema educativo y el aparato productivo, al concentrar la formación de competencias avanzadas, capacidades técnicas y saberes especializados necesarios para el desarrollo económico contemporáneo.

En Colombia, la expansión de la matrícula en educación superior durante las últimas décadas ha sido presentada como uno de los principales logros del sector educativo; sin embargo, dicho crecimiento ha sido profundamente desigual en términos territoriales. Las brechas entre regiones centrales y periféricas revelan que el acceso a este nivel educativo continúa condicionado por la estructura socioeconómica y la capacidad institucional de los territorios.

Desde una perspectiva de capital humano, la educación superior cumple una función estratégica en la mejora de la productividad, la innovación y la competitividad empresarial. La literatura económica ha mostrado de manera consistente que los territorios con mayores niveles de formación terciaria presentan

mejores indicadores de crecimiento, diversificación productiva y generación de empleo de calidad (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2015). Cuando el acceso a este nivel educativo es limitado, las economías locales tienden a especializarse en actividades de bajo valor agregado, reforzando patrones de estancamiento y dependencia.

En Buenaventura, la educación superior se desarrolla en un contexto marcado por la fragilidad del sistema educativo previo, la precariedad económica de los hogares y una débil articulación entre formación y mercado laboral. La baja cobertura en este nivel no puede interpretarse únicamente como una insuficiencia de oferta institucional, sino como el resultado acumulado de trayectorias educativas truncadas desde la educación básica y media. De este modo, el déficit de educación superior se configura como una consecuencia directa de la crisis educativa estructural del territorio, y a la vez como un factor que la reproduce.

El análisis de la educación superior en Buenaventura permite comprender cómo las desigualdades educativas se traducen en desigualdades económicas y sociales de largo plazo. La limitada formación terciaria restringe la capacidad del territorio para generar capital humano calificado, debilita el tejido empresarial y reduce las posibilidades de movilidad social.

En este sentido, la baja cobertura y las limitaciones estructurales de la educación superior constituyen uno de los núcleos explicativos del declive socioeconómico de la ciudad, en coherencia con los diagnósticos nacionales e internacionales sobre desarrollo desigual (CEPAL, 2018; PNUD, 2022).

4.1. Oferta institucional y acceso a educación superior

La oferta institucional de educación superior en Colombia se caracteriza por una fuerte concentración territorial en las principales áreas metropolitanas, donde se localiza la mayor parte de universidades, instituciones universitarias y centros tecnológicos. Según los registros del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, más del 60 % de la matrícula nacional se concentra en unas pocas ciudades, mientras que municipios periféricos presentan una oferta reducida y fragmentada (Ministerio de Educación Nacional, s. f.). Esta distribución desigual condiciona de manera directa las oportunidades de acceso para poblaciones históricamente excluidas.

En Buenaventura, la oferta de educación superior es limitada tanto en número de instituciones como en diversidad de programas académicos. La presencia institucional se ha concentrado principalmente en programas

técnicos y tecnológicos, con una oferta universitaria restringida y escasa cobertura en áreas estratégicas para el desarrollo productivo local. Esta configuración reduce las posibilidades de formación avanzada para la población joven y obliga, en muchos casos, a la migración educativa hacia otras ciudades, una alternativa inviable para hogares con bajos niveles de ingreso.

Las cifras nacionales permiten dimensionar esta brecha de acceso. Mientras la tasa bruta de cobertura en educación superior en Colombia superó el 50 % hacia finales de la década de 2010, de acuerdo con registros oficiales del sector educativo, los territorios con mayores niveles de pobreza y exclusión presentan coberturas sustancialmente inferiores (Ministerio de Educación Nacional, s. f.). En estos contextos, la transición desde la educación media hacia la superior se ve severamente limitada, consolidando un cuello de botella estructural en la formación del capital humano.

El acceso efectivo a la educación superior no depende únicamente de la existencia de instituciones, sino también de las condiciones socioeconómicas que permitan sostener la trayectoria educativa. En Buenaventura, la alta incidencia de pobreza monetaria y multidimensional reduce la capacidad de los hogares para asumir costos directos e indirectos

asociados a la educación superior, incluso cuando existen programas de matrícula subsidiada. Esta situación coincide con los diagnósticos nacionales que identifican el ingreso del hogar como uno de los principales determinantes del acceso a la educación terciaria en Colombia (DANE, 2020; Monroy et al., 2021).

La limitada oferta institucional también afecta la pertinencia de la formación frente a las necesidades del territorio. La escasa articulación entre programas académicos y la estructura productiva local restringe la generación de capacidades alineadas con el desarrollo empresarial y portuario de la ciudad. Desde la perspectiva de la teoría del capital humano, esta desconexión reduce el retorno social de la inversión educativa y debilita la capacidad de la educación superior para actuar como motor de desarrollo territorial (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2015).

En conjunto, la oferta institucional restringida y las barreras de acceso a la educación superior en Buenaventura configuran un escenario de exclusión educativa persistente. Este déficit no solo limita las oportunidades individuales de formación y movilidad social, sino que condiciona estructuralmente la capacidad del territorio para diversificar su economía, fortalecer su tejido empresarial y revertir los

procesos de degradación socioeconómica que lo caracterizan.

4.2. Tasas de tránsito de la educación media a la superior

El tránsito de la educación media a la educación superior constituye uno de los puntos de mayor selectividad social del sistema educativo colombiano. A nivel nacional, las estadísticas del sector educativo muestran que, aunque la cobertura en educación media ha mejorado, una proporción significativa de los egresados no logra incorporarse de manera inmediata a programas de formación terciaria. De acuerdo con los registros oficiales, solo alrededor de la mitad de los jóvenes que culminan la educación media acceden efectivamente a la educación superior en los años siguientes, lo que evidencia un cuello de botella estructural en la trayectoria educativa (Ministerio de Educación Nacional, s. f.).

En el caso específico de Buenaventura, este cuello de botella se expresa con particular intensidad. De acuerdo con el Perfil Territorial de Buenaventura elaborado por el Ministerio de Educación Nacional a partir de los registros del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), la tasa de tránsito inmediato de la educación media a la educación

superior en el distrito pasó de 13,82 % en 2014 a 33,27 % en 2020.

Si bien este incremento refleja ciertos avances en el acceso, la magnitud del indicador continúa siendo baja en términos relativos y se mantiene muy por debajo de los promedios nacionales, donde la proporción de jóvenes que acceden a la educación superior tras culminar la media es sustancialmente mayor.

Esta brecha evidencia que una parte significativa de los egresados de secundaria en Buenaventura no logra incorporarse oportunamente a la educación superior, interrumpiendo sus trayectorias educativas y limitando la acumulación de capital humano avanzado en el territorio (Ministerio de Educación Nacional – SNIES, 2022).

En territorios con alta vulnerabilidad socioeconómica, este tránsito se reduce de manera aún más pronunciada. La evidencia nacional indica que los jóvenes pertenecientes a los quintiles más bajos de ingreso presentan probabilidades significativamente menores de acceso a la educación superior, incluso cuando han completado la educación media. Este patrón responde a la interacción entre restricciones económicas, menor capital cultural y expectativas limitadas de retorno educativo, factores ampliamente documentados en los

estudios sobre pobreza y desigualdad en Colombia (DANE, 2020; Monroy et al., 2021).

Buenaventura se inscribe plenamente dentro de este escenario de exclusión educativa. La finalización de la educación media no garantiza, en la práctica, una transición efectiva hacia la educación superior, debido a la combinación de oferta institucional limitada y condiciones económicas adversas de los hogares. En un contexto donde la pobreza monetaria ha afectado históricamente a una proporción considerable de la población, la continuidad educativa se ve interrumpida por la necesidad de generar ingresos de manera inmediata, desplazando la educación superior a un horizonte inalcanzable para muchos jóvenes.

Las tasas reducidas de tránsito también reflejan las debilidades acumuladas del sistema educativo previo. Trayectorias marcadas por repitencia, rezagos académicos y déficits en competencias básicas limitan la capacidad de los egresados de educación media para cumplir con los requisitos de acceso y permanencia en la educación superior. Desde esta perspectiva, el bajo tránsito no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia lógica de un proceso educativo fragmentado desde los niveles básicos (CEPAL, 2019).

Este quiebre en la trayectoria educativa tiene implicaciones profundas para el desarrollo

territorial. La interrupción del tránsito hacia la educación superior reduce la acumulación de capital humano avanzado, limita la movilidad social y debilita la base sobre la cual podrían construirse procesos de innovación y diversificación productiva. La evidencia internacional ha mostrado que los territorios con bajas tasas de transición a la educación superior tienden a reproducir estructuras económicas de bajo valor agregado y alta informalidad (Hanushek & Woessmann, 2015).

En consecuencia, las reducidas tasas de tránsito de la educación media a la superior en Buenaventura consolidan un patrón de exclusión educativa estructural. Este patrón no solo restringe las oportunidades individuales de los jóvenes, sino que condiciona de manera decisiva la capacidad del territorio para revertir su proceso de degradación económica y social.

4.3. Educación técnica, tecnológica y universitaria: desequilibrios formativos

La estructura de la educación superior en Colombia presenta una marcada diferenciación entre programas técnicos, tecnológicos y universitarios, cada uno con funciones específicas dentro del sistema productivo. A nivel nacional, la expansión de la matrícula se ha concentrado de manera significativa en los niveles técnico y tecnológico, mientras que la

formación universitaria mantiene una distribución más restringida y territorialmente concentrada (Ministerio de Educación Nacional, s. f.). Esta configuración ha generado desequilibrios formativos que afectan la calidad y la pertinencia del capital humano disponible.

En Buenaventura, estos desequilibrios adquieren una dimensión particularmente crítica. La oferta educativa se orienta predominantemente hacia programas técnicos y tecnológicos, con una presencia limitada de programas universitarios y una escasa diversificación disciplinar. Si bien la formación técnica cumple un papel relevante en contextos de alta demanda de habilidades operativas, su predominio exclusivo restringe el desarrollo de capacidades analíticas, gerenciales e innovadoras necesarias para la transformación productiva del territorio.

La evidencia sobre capital humano sugiere que los territorios con mayor proporción de formación universitaria presentan mejores indicadores de productividad, innovación y sostenibilidad empresarial (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2015). En contraste, cuando la estructura formativa se concentra en niveles educativos de menor complejidad, las economías locales tienden a especializarse en actividades de bajo valor agregado, con escasas posibilidades de escalamiento productivo.

Estos desequilibrios formativos también inciden en la segmentación del mercado laboral. Los egresados de programas técnicos y tecnológicos enfrentan mayores probabilidades de inserción en empleos informales o de baja estabilidad, especialmente en contextos donde el tejido empresarial es frágil. En Buenaventura, la limitada articulación entre educación superior y sector productivo reduce las oportunidades de absorción laboral incluso para quienes logran completar estudios terciarios, reforzando la percepción de bajos retornos a la inversión educativa (Carranza et al., 2021).

Desde una perspectiva territorial, la ausencia de una oferta universitaria robusta limita la capacidad de generar liderazgo local, investigación aplicada y gestión empresarial avanzada. La educación superior universitaria cumple un papel clave en la formación de cuadros técnicos y profesionales que pueden impulsar procesos de planificación, innovación y gobernanza económica. Su debilidad en Buenaventura constituye, por tanto, un obstáculo estructural para el desarrollo integral del territorio.

En conjunto, los desequilibrios entre educación técnica, tecnológica y universitaria consolidan una estructura formativa incompleta y poco articulada con las necesidades de desarrollo local. Esta configuración restringe el

potencial transformador de la educación superior y contribuye a la persistencia de un modelo económico dependiente, vulnerable y socialmente excluyente.

4.4. Consecuencias del déficit de educación superior para el desarrollo local

El déficit de educación superior en Buenaventura produce efectos de largo alcance sobre la estructura económica y social del territorio. La limitada formación terciaria reduce la disponibilidad de capital humano calificado, un insumo fundamental para la competitividad empresarial, la innovación y la generación de empleo de calidad. La teoría del capital humano ha demostrado que los niveles educativos avanzados están estrechamente asociados con mayores tasas de productividad y crecimiento económico sostenido (Becker, 1993).

En el ámbito empresarial, la escasez de profesionales con formación universitaria y especializada afecta la capacidad de las empresas locales para adaptarse a entornos competitivos cada vez más complejos. La falta de habilidades gerenciales, técnicas avanzadas y capacidades de innovación limita la sostenibilidad de los emprendimientos y

aumenta la probabilidad de cierre empresarial, especialmente en contextos de alta volatilidad económica. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en los diagnósticos sobre empleo y estructura productiva en Colombia (Carranza et al., 2021).

El déficit de educación superior también tiene implicaciones directas sobre la movilidad social. La evidencia nacional muestra que los retornos salariales asociados a la educación universitaria son significativamente mayores que los de niveles educativos inferiores, lo que convierte a la educación superior en un mecanismo central de reducción de la desigualdad (Mincer, 1974). Cuando el acceso a este nivel educativo es restringido, las brechas de ingreso tienden a perpetuarse, consolidando patrones de pobreza intergeneracional.

Desde una perspectiva territorial, la debilidad del capital humano avanzado limita la capacidad de Buenaventura para diversificar su estructura productiva más allá de actividades portuarias y de subsistencia. La ausencia de una masa crítica de profesionales dificulta la atracción de inversiones intensivas en conocimiento y restringe la posibilidad de desarrollar encadenamientos productivos de mayor valor agregado, profundizando el estancamiento económico local (Porter, 2001).

Los efectos sociales de este déficit son igualmente significativos. La frustración de expectativas educativas y laborales entre los jóvenes incrementa el riesgo de exclusión social, informalidad y desvinculación institucional. En contextos de alta desigualdad, estas dinámicas debilitan el capital social y erosionan la cohesión comunitaria, afectando la estabilidad social del territorio (PNUD, 2022; UNESCO, 2022).

En síntesis, el déficit de educación superior en Buenaventura constituye un factor estructural del declive económico y social de la ciudad. Sus consecuencias se manifiestan en la fragilidad empresarial, la persistencia de la pobreza, la limitada movilidad social y la incapacidad de construir un modelo de desarrollo territorial inclusivo y sostenible. La superación de este déficit emerge, por tanto, como una condición indispensable para cualquier estrategia de recuperación y transformación de largo plazo.

Capítulo 5. Mercado laboral y capital humano en contextos de fragilidad educativa

El mercado laboral constituye el espacio donde se materializan, de forma más visible, los efectos acumulados de las trayectorias educativas de una población. En contextos territoriales marcados por déficits estructurales en educación básica, media y superior, el empleo tiende a organizarse en torno a actividades de baja productividad, alta informalidad y limitada estabilidad. En Colombia, múltiples diagnósticos han mostrado que las brechas educativas se traducen directamente en brechas laborales, reproduciendo desigualdades de ingreso y exclusión social a lo largo del ciclo de vida (Mincer, 1974; Carranza et al., 2021).

Desde una perspectiva de capital humano, el nivel educativo de la fuerza laboral condiciona la capacidad de un territorio para generar valor agregado, innovar y sostener dinámicas empresariales competitivas. La evidencia empírica internacional y nacional ha demostrado que los territorios con mayores niveles de escolaridad presentan mejores indicadores de empleo formal, productividad y crecimiento económico sostenido (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2015). Cuando

la educación es incompleta o de baja calidad, el mercado laboral absorbe a los trabajadores en segmentos precarios, reforzando ciclos de pobreza y vulnerabilidad.

En Buenaventura, la configuración del mercado laboral refleja con nitidez las consecuencias de una estructura educativa frágil. La interrupción temprana de trayectorias escolares, la baja cobertura en educación superior y los desequilibrios formativos descritos en capítulos anteriores han limitado la acumulación de capital humano, afectando tanto la oferta como la demanda de trabajo calificado. Este escenario ha favorecido la expansión de la informalidad, el subempleo y las ocupaciones de subsistencia, en un contexto donde el tejido empresarial es débil y altamente vulnerable.

El análisis del mercado laboral bonaverense permite comprender cómo la crisis educativa se proyecta sobre la economía local y la estructura social del territorio. La precariedad del empleo no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una interacción compleja entre educación, pobreza, estructura productiva y ausencia de oportunidades de movilidad social. En este sentido, el estudio del perfil educativo de la fuerza laboral y de sus condiciones de inserción resulta central para explicar el deterioro socioeconómico de la ciudad y sus limitadas

perspectivas de transformación (CEPAL, 2018; PNUD, 2022).

5.1. Perfil educativo de la fuerza laboral bonaverense

El perfil educativo de la fuerza laboral constituye uno de los indicadores más reveladores del potencial productivo de un territorio. A nivel nacional, la Gran Encuesta Integrada de Hogares muestra que, aunque Colombia ha incrementado gradualmente los años promedio de escolaridad, persisten diferencias significativas entre regiones y grupos poblacionales (DANE, 2023). Estas diferencias se traducen en capacidades laborales desiguales y en una segmentación del mercado de trabajo que penaliza a los territorios con menores niveles educativos.

En Buenaventura, el perfil educativo de la población ocupada se caracteriza por una alta concentración en niveles educativos bajos e incompletos. Los diagnósticos nacionales sobre pobreza y empleo evidencian que una proporción significativa de la fuerza laboral en municipios con alta vulnerabilidad no ha culminado la educación media, y un porcentaje aún menor ha accedido a la educación superior (DANE, 2020; Monroy et al., 2021). Esta estructura limita de manera sustantiva la disponibilidad de trabajadores con

competencias técnicas y profesionales avanzadas.

La información de la GEIH permite identificar que, a nivel nacional, los trabajadores con educación superior completa representan el segmento con mayores tasas de ocupación formal y mejores ingresos laborales, mientras que aquellos con educación básica incompleta se concentran en ocupaciones informales y de baja productividad (DANE, 2023). En contextos como Buenaventura, donde la culminación de la educación media y superior es reducida, el mercado laboral se ve obligado a absorber una fuerza de trabajo con competencias limitadas, reforzando la precariedad estructural.

Este perfil educativo también condiciona la inserción sectorial del empleo. Las actividades que predominan en el territorio —comercio informal, servicios personales, transporte de baja escala y trabajos asociados a la economía portuaria de baja calificación— demandan niveles educativos reducidos y ofrecen escasas oportunidades de aprendizaje y ascenso laboral. La ausencia de una masa crítica de trabajadores calificados limita la posibilidad de atraer sectores intensivos en conocimiento o de mayor valor agregado, consolidando un modelo productivo de baja complejidad (Porter, 2001).

Las consecuencias sociales de este perfil educativo son profundas. La limitada

escolaridad de la fuerza laboral reduce los ingresos promedio, incrementa la vulnerabilidad frente a choques económicos y restringe el acceso a mecanismos de protección social. La evidencia nacional indica que los trabajadores con menores niveles educativos presentan una mayor probabilidad de pobreza laboral, aun cuando se encuentren ocupados, fenómeno particularmente acentuado en contextos urbanos periféricos (DANE, 2020; CEPAL, 2022).

Desde una perspectiva intergeneracional, el bajo perfil educativo de la fuerza laboral bonaverense tiende a reproducirse en las generaciones siguientes. Los hogares encabezados por adultos con escolaridad incompleta enfrentan mayores dificultades para sostener la educación de niños y adolescentes, reforzando ciclos de exclusión educativa y laboral. Este mecanismo de reproducción social ha sido ampliamente documentado en los estudios sobre desigualdad y movilidad social en Colombia (Monroy et al., 2021; CEPAL, 2018).

El perfil educativo de la fuerza laboral en Buenaventura constituye un reflejo directo de la crisis estructural del sistema educativo y un factor central del deterioro económico del territorio. La concentración de trabajadores con baja escolaridad limita la productividad, debilita el tejido empresarial y reduce las posibilidades

de movilidad social, configurando uno de los principales obstáculos para la recuperación económica y social de la ciudad.

5.2. Empleo formal, informalidad y subempleo

El mercado laboral colombiano se caracteriza por una persistente dualidad entre empleo formal e informal, fenómeno que adquiere una expresión particularmente aguda en territorios con debilidades estructurales en educación y desarrollo productivo.

A nivel nacional, la Gran Encuesta Integrada de Hogares muestra que la informalidad laboral afecta de manera sistemática a una proporción elevada de la población ocupada, con una incidencia significativamente mayor en ciudades intermedias y puertos periféricos (DANE, 2023). Esta estructura segmentada limita la estabilidad de los ingresos, reduce el acceso a la protección social y debilita la capacidad de los hogares para planificar trayectorias educativas y laborales de largo plazo.

En Buenaventura, la informalidad no constituye un fenómeno residual, sino un componente central del funcionamiento del mercado laboral. La fragilidad del tejido empresarial y la escasa diversificación

productiva han generado una absorción laboral concentrada en actividades de subsistencia, comercio informal, servicios personales y ocupaciones de baja productividad asociadas al entorno portuario.

Los diagnósticos nacionales sobre empleo señalan que los territorios con menores niveles educativos presentan mayores tasas de informalidad, una relación que se verifica de manera consistente en contextos como el bonaverense (Carranza et al., 2021).

El empleo formal, por su parte, se encuentra limitado tanto en volumen como en calidad. Las oportunidades de trabajo con contrato, afiliación a seguridad social y estabilidad laboral se concentran en un número reducido de sectores y empresas, incapaces de absorber la creciente oferta de mano de obra. Esta restricción se ve agravada por el bajo nivel educativo promedio de la fuerza laboral, que reduce la empleabilidad en ocupaciones que demandan competencias técnicas y profesionales más avanzadas, reforzando la segmentación del mercado de trabajo.

El subempleo, entendido como la ocupación en actividades que no corresponden a la formación, experiencia o aspiraciones del trabajador, constituye otra manifestación relevante de esta precariedad laboral. En contextos de baja calificación educativa, el

subempleo se expresa tanto en términos de ingresos insuficientes como de utilización ineficiente de las capacidades laborales disponibles. La evidencia nacional indica que una proporción significativa de trabajadores en condiciones de informalidad manifiesta insatisfacción con su ocupación, reflejando un desajuste estructural entre educación, empleo y productividad (DANE, 2023).

Estas dinámicas tienen efectos acumulativos sobre la economía local. La predominancia de empleo informal y subempleo reduce la base tributaria, limita la inversión pública y privada y debilita los encadenamientos productivos. Desde una perspectiva de desarrollo territorial, la informalidad masiva actúa como un freno estructural al crecimiento, al impedir la consolidación de empresas sostenibles y la generación de empleo de calidad (Porter, 2001).

En conjunto, la coexistencia de bajos niveles de empleo formal, alta informalidad y subempleo persistente configura un mercado laboral frágil y excluyente. Este escenario no solo refleja las carencias educativas del territorio, sino que contribuye activamente a reproducirlas, al limitar los incentivos y las capacidades de los hogares para invertir en educación y formación de largo plazo.

5.3. Relación entre nivel educativo y calidad del empleo

La relación entre nivel educativo y calidad del empleo constituye uno de los hallazgos más robustos de la economía del trabajo y del capital humano. A nivel nacional e internacional, la evidencia empírica demuestra que mayores niveles de escolaridad se asocian sistemáticamente con mejores condiciones laborales, mayores ingresos, menor informalidad y mayor estabilidad en el empleo (Mincer, 1974; Becker, 1993). Esta relación no es mecánica, pero sí estructural, y adquiere especial relevancia en territorios con déficits educativos persistentes.

En Colombia, los datos de la GEIH muestran que los trabajadores con educación superior completa presentan tasas de formalidad significativamente más altas y niveles de ingreso sustancialmente superiores a aquellos con educación básica o media incompleta (DANE, 2023). Por el contrario, los individuos con bajos niveles educativos se concentran en ocupaciones de baja productividad, caracterizadas por ingresos volátiles y ausencia de protección social. Esta segmentación se profundiza en contextos territoriales donde la oferta de empleo calificado es limitada.

Buenaventura reproduce y amplifica este patrón nacional. La escasa culminación de la educación media y la baja cobertura en educación superior se traducen en una fuerza laboral mayoritariamente inserta en empleos de baja calidad. Incluso cuando existen oportunidades laborales vinculadas al sector portuario, estas suelen concentrarse en labores operativas de baja calificación, con escasas posibilidades de ascenso y aprendizaje, reforzando un techo estructural a la movilidad laboral.

La calidad del empleo no se limita al nivel de ingresos, sino que incluye dimensiones como estabilidad, acceso a seguridad social, posibilidades de capacitación y condiciones de trabajo dignas. En este sentido, la educación actúa como un factor protector frente a la precariedad laboral. La ausencia de formación suficiente expone a los trabajadores a ciclos recurrentes de desempleo, informalidad y subempleo, fenómeno ampliamente documentado en los estudios sobre empleo y desigualdad en Colombia (Carranza et al., 2021; CEPAL, 2022).

Desde una perspectiva empresarial, la baja calidad del empleo asociada a bajos niveles educativos limita la productividad y la competitividad. Las empresas que operan con mano de obra poco calificada enfrentan mayores

dificultades para innovar, mejorar procesos y adaptarse a entornos cambiantes. Este círculo vicioso entre baja educación y baja calidad del empleo contribuye a la fragilidad empresarial y al cierre recurrente de unidades productivas en territorios como Buenaventura.

En términos sociales, la relación entre educación y calidad del empleo condiciona las oportunidades de bienestar y movilidad social. Los hogares sustentados en empleos precarios presentan mayores probabilidades de pobreza laboral, aun cuando exista ocupación, lo que restringe su capacidad para garantizar la educación de las generaciones siguientes. De este modo, la baja calidad del empleo se convierte en un mecanismo de reproducción intergeneracional de la desigualdad.

5.4. Juventud, educación truncada y exclusión laboral

La situación de la juventud en el mercado laboral constituye uno de los indicadores más sensibles del funcionamiento del sistema educativo y productivo. En Colombia, los jóvenes presentan sistemáticamente mayores tasas de desempleo e informalidad que los adultos, una brecha que se amplía de manera significativa entre quienes no han logrado completar la educación media o acceder a la educación superior (International Labour

Organization, 2020). Esta realidad refleja la vulnerabilidad estructural de las trayectorias juveniles en contextos de fragilidad educativa.

En Buenaventura, la educación truncada emerge como un factor central de exclusión laboral juvenil. La interrupción temprana de la escolaridad limita la adquisición de competencias básicas y reduce drásticamente las oportunidades de inserción en empleos formales. Ante la ausencia de alternativas, muchos jóvenes se incorporan a actividades informales de subsistencia, caracterizadas por bajos ingresos y alta inestabilidad, reproduciendo desde edades tempranas los patrones de precariedad del mercado laboral local.

La evidencia nacional indica que los jóvenes con niveles educativos incompletos enfrentan mayores probabilidades de permanecer en la informalidad durante largos periodos de su vida laboral, con escasas oportunidades de transición hacia empleos de mayor calidad (DANE, 2023). En territorios con baja oferta educativa y productiva, estas trayectorias tienden a consolidarse, generando una “trampa” de exclusión laboral difícil de revertir.

La exclusión laboral juvenil tiene implicaciones sociales profundas. La falta de oportunidades de empleo digno debilita los procesos de integración social, reduce las

expectativas de movilidad y erosiona la confianza en las instituciones. En contextos urbanos vulnerables, esta situación incrementa la exposición de los jóvenes a dinámicas de violencia estructural y economías informales o ilegales, fenómeno señalado de manera reiterada en los informes internacionales sobre juventud y trabajo decente (OIT, 2018; PNUD, 2022).

Desde una perspectiva de desarrollo territorial, la exclusión laboral juvenil representa una pérdida significativa de potencial productivo. La imposibilidad de aprovechar el bono demográfico limita la capacidad del territorio para dinamizar su economía y renovar su tejido empresarial. La ausencia de políticas efectivas de articulación entre educación, formación para el trabajo y empleo agrava esta situación, consolidando un escenario de estancamiento económico y social.

En síntesis, la combinación de educación truncada y exclusión laboral juvenil en Buenaventura constituye uno de los eslabones más críticos del declive socioeconómico del territorio. La persistencia de estas trayectorias no solo compromete el presente de una generación, sino que condiciona de manera decisiva las posibilidades futuras de desarrollo, cohesión social y sostenibilidad económica de la ciudad.

Capítulo 6. Dinámica empresarial en Buenaventura: creación, cierre y extinción de empresas

La dinámica empresarial es uno de los indicadores más sensibles del desempeño económico de un territorio, en tanto refleja su capacidad para transformar recursos en actividad productiva sostenida, generar empleo y absorber fuerza laboral de manera estable.

En contextos urbanos con altos niveles de pobreza, informalidad y fragilidad institucional, la empresa suele desempeñar un papel ambivalente: por un lado, representa una estrategia de subsistencia frente a la ausencia de empleo formal; por otro, evidencia las limitaciones estructurales del entorno para sostener procesos productivos de largo plazo.

En Colombia, esta ambivalencia ha sido ampliamente documentada en territorios periféricos y portuarios, donde la creación empresarial convive con elevadas tasas de cierre y extinción (CEPAL, 2018; Confecámaras, 2024).

Desde una perspectiva estructural, la empresa no puede analizarse de manera aislada del contexto educativo, laboral y social en el que opera. La literatura sobre capital humano y

desarrollo productivo ha demostrado que la sostenibilidad empresarial depende de factores como la formación de los emprendedores, la disponibilidad de mano de obra calificada, la capacidad de gestión y la articulación con mercados y cadenas de valor más amplias (Becker, 1993; Acs, Audretsch & Lehmann, 2013). Cuando estos elementos son débiles, la actividad empresarial tiende a concentrarse en unidades de baja productividad y alta rotación.

En Buenaventura, la dinámica empresarial se desarrolla en un escenario particularmente complejo. A pesar de su posición estratégica como principal puerto del Pacífico colombiano, la ciudad presenta una estructura productiva frágil, con alta informalidad laboral, bajos niveles educativos y una limitada diversificación económica. Esta combinación ha configurado un tejido empresarial vulnerable, donde la creación de empresas no se traduce necesariamente en acumulación productiva ni en fortalecimiento del mercado laboral local.

El análisis de la creación, cierre y extinción de empresas en el municipio permite, por tanto, comprender cómo la crisis educativa y la degradación socioeconómica se materializan en el ámbito productivo. La empresa emerge como un punto de convergencia de las tensiones estructurales del territorio: déficit de capital humano, debilidad de la demanda interna,

escasa articulación institucional y limitada capacidad de adaptación frente a choques económicos. Este capítulo se orienta a examinar estas dinámicas con base en evidencia empírica verificable, situando el caso de Buenaventura dentro del marco nacional y comparativo.

6.1. Estructura empresarial y sectores económicos predominantes

La estructura empresarial colombiana se caracteriza por una marcada concentración en microempresas, que representan más del 90 % del total de unidades productivas formales registradas en el país, según los datos consolidados del Registro Único Empresarial y Social (RUES) analizados por Confecámaras (2024).

Esta configuración es aún más pronunciada en territorios con altos niveles de pobreza y exclusión, donde la empresa suele surgir como respuesta a la precariedad laboral más que como resultado de procesos de innovación o acumulación de capital.

En Buenaventura, la estructura empresarial reproduce e intensifica este patrón nacional. La gran mayoría de las empresas registradas corresponde a microestablecimientos, principalmente constituidos como personas

naturales, con bajos niveles de capitalización y alta dependencia del ingreso diario.

Este rasgo estructural condiciona de manera decisiva la capacidad del tejido empresarial para generar empleo formal, invertir en tecnología o resistir periodos de contracción económica.

En términos sectoriales, la actividad empresarial del municipio se concentra fundamentalmente en el comercio minorista, los servicios personales, el transporte de pequeña escala y actividades informales asociadas al entorno portuario. Estos sectores, si bien cumplen una función relevante en la economía cotidiana de la ciudad, se caracterizan por bajos niveles de productividad, escasa incorporación de conocimiento y limitada generación de valor agregado. De acuerdo con Confecámaras (2024), a escala nacional estos sectores concentran también las tasas más elevadas de cierre empresarial, lo que incrementa la vulnerabilidad del tejido productivo local.

La ausencia de una base industrial diversificada y de servicios empresariales avanzados limita la posibilidad de encadenamientos productivos sostenibles. A diferencia de otros territorios donde la actividad portuaria ha favorecido el desarrollo de industrias complementarias y servicios especializados, en Buenaventura el puerto opera en gran medida como un enclave, con escasa

articulación con las micro y pequeñas empresas locales. Esta desconexión reduce las oportunidades de aprendizaje productivo y de inserción en cadenas de valor más complejas (Porter, 2001).

Desde la perspectiva del capital humano, la estructura sectorial del municipio guarda una relación directa con el bajo nivel educativo promedio de la fuerza laboral. Los sectores predominantes demandan competencias básicas y ofrecen escasas oportunidades de capacitación y ascenso, lo que reduce los incentivos para la formación avanzada y refuerza la especialización en actividades de subsistencia.

La literatura ha mostrado que esta correspondencia entre baja educación y sectores de baja productividad tiende a reproducirse en el tiempo, dificultando los procesos de transformación productiva (Hanushek & Woessmann, 2015).

La fragilidad de la estructura empresarial también se expresa en su limitada capacidad de absorción de choques económicos. La falta de diversificación sectorial, la escasa acumulación de capital y la dependencia de mercados locales de baja demanda incrementan la probabilidad de cierre ante variaciones en el ingreso de los hogares o crisis externas. En este sentido, la estructura empresarial de Buenaventura no solo

refleja las carencias educativas y sociales del territorio, sino que contribuye activamente a reproducirlas.

La estructura empresarial y los sectores económicos predominantes en Buenaventura configuran un tejido productivo altamente vulnerable, de baja productividad y elevada rotación. Este rasgo estructural constituye el punto de partida para comprender las dinámicas de creación, cierre y extinción de empresas que se analizan en los subapartados siguientes, así como su estrecha relación con la crisis educativa y la degradación socioeconómica del municipio.

6.2. Creación versus liquidación empresarial: análisis de series históricas

El contraste entre creación y liquidación de empresas constituye un indicador fundamental para evaluar la solidez real del tejido productivo. En Colombia, los registros consolidados del Registro Único Empresarial y Social muestran que la creación empresarial ha sido cuantitativamente elevada en los últimos años, pero acompañada por un volumen también significativo de cancelaciones y liquidaciones.

Para 2024, Confecámaras reportó la creación de 297.475 empresas a nivel nacional, mientras que un número sustancial de unidades

productivas fue cancelado por cierre definitivo o depuración del registro mercantil, lo que evidencia una dinámica de alta rotación empresarial más que un proceso sostenido de acumulación productiva (Confecámaras, 2024).

El análisis de las series históricas indica que esta rotación se concentra principalmente en las microempresas. Según Confecámaras, más del 90 % de las empresas creadas en Colombia corresponden a microempresas, muchas de ellas constituidas como personas naturales y localizadas en actividades de comercio y servicios de baja complejidad.

Estas mismas categorías concentran las mayores tasas de salida del registro empresarial, lo que sugiere que una parte importante de la creación responde a estrategias de autoempleo frente a restricciones del mercado laboral formal y no a proyectos productivos con vocación de permanencia (Confecámaras, 2024).

Desde una perspectiva territorial, la CEPAL ha señalado que, en contextos urbanos con alta pobreza y demanda interna débil, la probabilidad de cierre empresarial aumenta debido a la baja capacidad de consumo de los hogares y a la escasa resiliencia financiera de las microempresas (CEPAL, 2018). Este patrón resulta particularmente relevante para territorios donde la actividad económica

depende en gran medida del ingreso diario y de mercados locales reducidos, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a cualquier choque económico.

En Buenaventura, la creación empresarial se inscribe en este comportamiento estructural. Aunque el municipio participa del dinamismo agregado de creación de empresas observado a nivel nacional, la composición sectorial de dichas empresas coincide con los sectores que, según Confecámaras, presentan las mayores tasas de cancelación: comercio minorista y servicios personales. Esta coincidencia sectorial permite afirmar, con base empírica, que la relación entre empresas creadas y empresas liquidadas en el territorio tiende a ser frágil y poco favorable a la consolidación productiva.

Para dimensionar empíricamente la magnitud del cierre empresarial en el Distrito de Buenaventura, es necesario observar la evolución del parque empresarial formal en los últimos años. Según los datos del registro mercantil de la Cámara de Comercio de Buenaventura, al cierre del año 2019 se encontraban registradas 8 693 empresas en el distrito, incluyendo todos los tamaños y sectores productivos (Cámara de Comercio de Buenaventura, 2019).

Hacia finales de 2022, esa cifra se redujo a 7 503 empresas activas, lo que equivale a una

disminución de 1 190 empresas en ese periodo (Cámara de Comercio de Buenaventura, 2022), es decir, una caída aproximada del 13,7 % del parque empresarial formal en tres años. Esta reducción no solo refleja la salida de unidades productivas del registro mercantil, sino también una erosión del tejido empresarial local que limita la capacidad de generar empleo, innovación y encadenamientos productivos sostenibles.

La relación creación-liquidación revela, además, una limitada capacidad de acumulación empresarial. Cuando el volumen de empresas que desaparecen se aproxima al de las que se crean, el resultado neto es un tejido productivo inestable, incapaz de generar empleo formal sostenido. Este comportamiento ha sido identificado por Confecámaras como uno de los principales problemas estructurales del emprendimiento en Colombia, especialmente en territorios con bajo capital humano y alta informalidad (Confecámaras, 2024).

El análisis histórico de creación y liquidación empresarial muestra que la dinámica empresarial de Buenaventura se alinea con un patrón nacional de alta rotación, pero lo hace desde una posición de mayor vulnerabilidad estructural. La evidencia disponible permite afirmar que la creación empresarial, en ausencia de condiciones educativas y productivas sólidas,

no logra traducirse en fortalecimiento del aparato económico local.

6.3. Mortalidad empresarial y fragilidad productiva

La mortalidad empresarial constituye uno de los indicadores más claros de la fragilidad productiva de un territorio. A nivel nacional, Confecámaras documenta que solo alrededor del 44 % de las empresas constituidas como sociedades sobreviven cinco años, y que esta proporción desciende a cerca del 30 % en el caso de empresas constituidas como personas naturales, categoría predominante entre las microempresas (Confecámaras, 2024). Estas cifras evidencian una baja capacidad de supervivencia empresarial estructural en el país.

La fragilidad productiva se concentra especialmente en los sectores de comercio y servicios de baja complejidad. Confecámaras señala que estos sectores presentan las tasas más elevadas de mortalidad empresarial, debido a su escaso capital inicial, márgenes de ganancia reducidos y alta exposición a la volatilidad del ingreso de los hogares. Este patrón sectorial coincide con la estructura empresarial predominante en Buenaventura, lo que incrementa la probabilidad de cierre recurrente de unidades productivas.

Desde la teoría del capital humano, esta elevada mortalidad se explica en parte por las limitaciones en capacidades de gestión, planeación financiera y adaptación estratégica. La evidencia académica ha demostrado que los empresarios con menores niveles educativos enfrentan mayores dificultades para sostener sus negocios en el tiempo, especialmente en entornos competitivos e inestables (Becker, 1993; Acs, Audretsch & Lehmann, 2013). En territorios con crisis educativas persistentes, estas limitaciones se amplifican.

En Buenaventura, la fragilidad productiva se ve reforzada por la débil articulación entre empresas locales y grandes actores económicos. La CEPAL ha advertido que, en economías portuarias donde el puerto opera como enclave, las microempresas locales tienen escaso acceso a encadenamientos productivos, innovación y transferencia de conocimiento, lo que reduce sus probabilidades de supervivencia (CEPAL, 2021). Este diagnóstico resulta plenamente aplicable al caso bonaverense.

Los efectos acumulativos de la mortalidad empresarial son medibles y persistentes. Cada cierre implica pérdida de ingresos para los hogares, reducción del empleo disponible y debilitamiento del tejido productivo. La reiteración de estos cierres genera un entorno de incertidumbre que desincentiva la inversión

y refuerza estrategias económicas de corto plazo, un fenómeno que la CEPAL identifica como característico de territorios atrapados en dinámicas de bajo desarrollo (CEPAL, 2018).

En conjunto, la elevada mortalidad empresarial en Buenaventura no puede interpretarse como un fenómeno coyuntural. Los datos nacionales y la literatura estructural permiten afirmar que se trata de una manifestación empírica de la fragilidad productiva del territorio, estrechamente vinculada a déficits de capital humano y a la degradación socioeconómica acumulada.

6.4. Comparación con otras ciudades portuarias colombianas

La comparación con otras ciudades portuarias colombianas permite contextualizar la dinámica empresarial de Buenaventura dentro de un marco nacional. La CEPAL ha demostrado que la presencia de infraestructura portuaria, por sí sola, no garantiza desarrollo productivo local, y que los beneficios del comercio exterior dependen de la capacidad del territorio para articular capital humano, servicios empresariales e instituciones de apoyo (CEPAL, 2021).

En Colombia, los territorios portuarios que han logrado mayor diversificación económica

presentan también mejores indicadores de supervivencia empresarial. Estos territorios concentran una mayor proporción de empresas medianas y grandes, mayor oferta de educación superior y una estructura productiva más diversificada, factores que, según la literatura sobre competitividad territorial, reducen las tasas de mortalidad empresarial (Porter, 2001; Hanushek & Woessmann, 2015).

Buenaventura contrasta con este perfil. La estructura empresarial del municipio se caracteriza por una sobrerrepresentación de microempresas y por su concentración en sectores que, según Confecámaras, presentan las tasas más altas de cierre a nivel nacional. Esta diferencia estructural explica por qué, aun compartiendo la condición portuaria, Buenaventura enfrenta mayores dificultades para consolidar empresas sostenibles.

La comparación no se basa en supuestos, sino en la evidencia sectorial y estructural. Allí donde otros puertos han logrado articular educación, servicios empresariales y diversificación productiva, la empresa local ha operado como motor de desarrollo. En cambio, donde estos elementos están ausentes o debilitados, como en Buenaventura, la empresa tiende a reproducir dinámicas de subsistencia y alta rotación, tal como lo documentan los análisis de la CEPAL

sobre economías portuarias periféricas (CEPAL, 2018; CEPAL, 2021).

En síntesis, la comparación con otras ciudades portuarias confirma que el rezago empresarial de Buenaventura no responde a su condición geográfica, sino a una combinación empíricamente verificable de baja diversificación productiva, elevada mortalidad empresarial y déficits estructurales de capital humano. Estos elementos refuerzan la tesis central del libro: el cierre empresarial en Buenaventura es inseparable de la crisis educativa y de la degradación socioeconómica del territorio.

Capítulo 7. Crisis educativa y cierre empresarial: relaciones causales y evidencias empíricas

La relación entre educación y desempeño empresarial constituye uno de los vínculos más sólidos y documentados en la literatura sobre desarrollo económico. La acumulación de capital humano no solo condiciona la productividad laboral, sino que incide de manera directa en la capacidad de las empresas para planificar, innovar, adaptarse a entornos cambiantes y sostenerse en el tiempo. En territorios donde los sistemas educativos presentan déficits persistentes, estas capacidades se ven severamente limitadas, configurando un entorno productivo frágil y altamente vulnerable al cierre empresarial.

En Colombia, diversos diagnósticos han evidenciado que las regiones con menores niveles de escolaridad concentran empresas de menor tamaño, baja productividad y altas tasas de mortalidad. Las micro y pequeñas empresas, que dominan el tejido empresarial nacional, dependen de manera crítica de las competencias educativas y administrativas de sus propietarios y trabajadores.

Cuando estas competencias son insuficientes, las probabilidades de supervivencia

empresarial disminuyen de forma significativa, especialmente en sectores intensivos en gestión básica como el comercio y los servicios (Carranza et al., 2021; Confecámaras, 2024).

En el caso de Buenaventura, la crisis educativa descrita en los capítulos anteriores se proyecta con claridad sobre la dinámica empresarial. La baja culminación de la educación media, la limitada cobertura de educación superior y los desequilibrios formativos han reducido de manera estructural la disponibilidad de capital humano calificado. Esta carencia no solo afecta las trayectorias individuales de empleo, sino que se traduce en debilidades sistémicas del tejido empresarial local, condicionando su capacidad de consolidación y aumentando la frecuencia de cierres.

La relación causal entre crisis educativa y cierre empresarial en Buenaventura se vuelve explícita cuando se observan de manera integrada las tendencias empíricas documentadas en los capítulos precedentes. En la educación secundaria, la tasa de deserción aumentó de 2,03 % en 2019 a 5,66 % en 2022, alcanzando 7,06 % en ese último año, lo que evidencia una ruptura temprana y persistente de las trayectorias educativas.

Este quiebre se prolonga en la transición hacia la educación superior: aunque la tasa de

tránsito inmediato de la educación media a la superior pasó de 13,82 % en 2014 a 33,27 % en 2020, el distrito continúa rezagado frente a los promedios nacionales, dejando por fuera a una proporción significativa de jóvenes. La consecuencia acumulada de este déficit educativo se refleja en la dinámica empresarial local: entre 2019 y 2022 el número de empresas activas registradas en Buenaventura se redujo en 1.190 unidades, dando cuenta de un tejido productivo frágil y con limitada capacidad de absorber capital humano calificado. Estas cifras permiten afirmar, con base empírica, que el cierre empresarial en el distrito no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado estructural de trayectorias educativas truncadas que preceden y refuerzan el deterioro económico y social del territorio.

En este capítulo examinaremos las relaciones causales entre crisis educativa y cierre empresarial. Lejos de plantear asociaciones abstractas, el análisis se centra en mecanismos concretos —déficit de capital humano, escasez de capacidades técnicas, baja innovación y competitividad— que permiten explicar por qué la degradación educativa termina materializándose en fragilidad productiva. El caso de Buenaventura se aborda como una expresión territorial de dinámicas estructurales ampliamente documentadas en el contexto

colombiano y latinoamericano (CEPAL, 2018; Hanushek & Woessmann, 2015).

7.1. Déficit de capital humano y sostenibilidad empresarial

El déficit de capital humano constituye uno de los factores más determinantes de la baja sostenibilidad empresarial en territorios con rezagos educativos persistentes. La teoría del capital humano ha demostrado que la educación incrementa la productividad individual, mejora la capacidad de gestión y eleva la eficiencia organizativa de las empresas, traduciéndose en mayores probabilidades de supervivencia y crecimiento (Becker, 1993). Cuando estos niveles de formación son bajos, las empresas operan con desventajas estructurales difíciles de compensar.

En Colombia, la evidencia empírica confirma esta relación. Los diagnósticos sobre empleo y estructura productiva muestran que las empresas localizadas en territorios con menores niveles educativos presentan mayores tasas de cierre y menor capacidad de adaptación frente a choques económicos. Carranza et al. (2021) documentan que la baja calificación limita la productividad empresarial, afecta la calidad de la gestión y reduce la posibilidad de sostener empleos formales, especialmente en micro y pequeñas empresas.

Las cifras de Confecámaras refuerzan este diagnóstico. A nivel nacional, solo alrededor del 44 % de las empresas constituidas como sociedades sobreviven cinco años, proporción que desciende a cerca del 30 % en empresas constituidas como personas naturales, categoría predominante entre microempresas con menor dotación de capital humano (Confecámaras, 2024). Esta diferencia cuantitativa evidencia que la estructura educativa y organizativa incide directamente en la sostenibilidad empresarial.

En Buenaventura, el déficit de capital humano se manifiesta con particular intensidad. La limitada culminación de la educación media y la baja cobertura de educación superior reducen la disponibilidad de capacidades técnicas, administrativas y gerenciales necesarias para sostener emprendimientos en el tiempo. Como resultado, una parte significativa de las empresas locales presenta debilidades en planificación financiera, control de costos, cumplimiento normativo y adopción tecnológica, factores críticos para la supervivencia empresarial.

La literatura sobre derrames de conocimiento subraya que los territorios con mayor densidad de capital humano facilitan procesos de aprendizaje colectivo que fortalecen la sostenibilidad empresarial (Acs, Audretsch & Lehmann, 2013). En ausencia de estas

condiciones, las empresas operan de manera aislada, con escasas oportunidades de incorporar mejoras productivas. Este aislamiento resulta evidente en economías portuarias de enclave, como la de Buenaventura, donde la actividad principal no se traduce en transferencia de conocimiento hacia el tejido empresarial local (CEPAL, 2021).

El déficit de capital humano también limita la capacidad de las empresas para integrarse a mercados más amplios y cadenas de valor complejas. La falta de competencias para cumplir estándares de calidad, gestionar procesos logísticos avanzados o acceder a financiamiento formal reduce las oportunidades de crecimiento y aumenta la vulnerabilidad frente a la competencia externa. Esta situación ha sido identificada por la literatura sobre competitividad territorial como un factor clave de la mortalidad empresarial en regiones rezagadas (Porter, 2001).

Como vemos, el déficit de capital humano en Buenaventura constituye un mecanismo causal central que explica la fragilidad y el cierre recurrente de empresas. La evidencia nacional y la literatura académica permiten afirmar, con respaldo empírico, que la crisis educativa no solo antecede al deterioro empresarial, sino que lo alimenta de manera sistemática, reforzando el

círculo de degradación económica y social del territorio.

7.2. Escasez de capacidades técnicas y administrativas

La escasez de capacidades técnicas y administrativas constituye un factor determinante de la fragilidad empresarial en territorios con déficits educativos persistentes. La evidencia nacional muestra que las micro y pequeñas empresas —que representan más del 90 % del tejido empresarial colombiano— concentran debilidades en gestión financiera, planeación estratégica y adopción de tecnologías básicas, lo que incrementa su probabilidad de cierre temprano (Confecámaras, 2024). Estas debilidades no son coyunturales, sino estructurales, y guardan una relación directa con el nivel educativo de emprendedores y trabajadores.

Los diagnósticos sobre empleo y productividad en Colombia indican que los empresarios con menor escolaridad presentan mayores dificultades para acceder a financiamiento formal, cumplir requisitos regulatorios y sostener procesos de mejora continua. El informe de diagnóstico de empleo señala que la baja calificación limita la productividad empresarial y reduce la capacidad de adaptación a entornos

competitivos, especialmente en sectores intensivos en gestión básica como comercio y servicios (Carranza et al., 2021). Este patrón se acentúa en territorios donde la oferta de formación técnica y administrativa es limitada.

En Buenaventura, la escasez de capacidades técnicas se refleja en la estructura sectorial predominante y en la naturaleza de las unidades productivas. La concentración de microempresas en actividades de baja complejidad coincide con los sectores que, a escala nacional, registran las mayores tasas de cierre según el RUES (Confecámaras, 2024). La limitada formación administrativa reduce la capacidad de estas empresas para calcular costos, gestionar inventarios, planificar inversiones y responder a variaciones en la demanda, factores clave para la supervivencia empresarial.

La carencia de capacidades administrativas también afecta la relación de las empresas con el entorno institucional. Los datos nacionales muestran que una proporción relevante de microempresas opera en la informalidad o transita entre formalidad e informalidad, situación asociada a costos de cumplimiento y a la falta de conocimientos sobre trámites y beneficios de la formalización (DANE, 2023). En contextos como Buenaventura, esta fragilidad institucional incrementa el riesgo de cierre ante

sanciones, cambios regulatorios o restricciones de acceso a mercados.

Desde una perspectiva de capital humano, la evidencia académica confirma que la formación técnica y administrativa mejora la eficiencia, reduce errores de gestión y aumenta la supervivencia empresarial (Becker, 1993; Acs, Audretsch & Lehmann, 2013). La ausencia de estas capacidades en el tejido empresarial local explica, con base empírica, por qué la creación de empresas no se traduce en consolidación productiva, sino en alta rotación y extinción recurrente.

En conjunto, la escasez de capacidades técnicas y administrativas en Buenaventura constituye un mecanismo causal que conecta la crisis educativa con el cierre empresarial. La evidencia nacional y sectorial permite afirmar que, sin un fortalecimiento sostenido de estas capacidades, la dinámica empresarial del territorio continuará marcada por la fragilidad y la alta mortalidad.

7.3. Educación, innovación y competitividad local

La relación entre educación, innovación y competitividad ha sido ampliamente documentada por la literatura económica y por los diagnósticos de desarrollo territorial. Los

territorios con mayores niveles de educación formal y formación técnica presentan una mayor capacidad para incorporar innovación, incluso en formas incrementales, lo que mejora la productividad y la supervivencia empresarial (Hanushek & Woessmann, 2015). En contraste, los territorios con déficits educativos persistentes tienden a reproducir estructuras productivas de bajo valor agregado y escasa innovación.

En Colombia, los análisis de competitividad muestran que las empresas con mayor dotación de capital humano presentan mejores indicadores de desempeño, mayor capacidad de adopción tecnológica y mayor resiliencia frente a choques económicos. El diagnóstico de empleo identifica que la falta de habilidades técnicas y cognitivas limita la innovación empresarial y reduce la competitividad, especialmente en micro y pequeñas empresas (Carranza et al., 2021). Este hallazgo es consistente con la evidencia de Confecámaras sobre mortalidad empresarial por sectores.

En Buenaventura, la baja cobertura de educación superior y los desequilibrios formativos descritos en capítulos anteriores restringen la generación y absorción de conocimiento productivo. La estructura empresarial local, concentrada en sectores de baja complejidad, ofrece escasos incentivos para

la innovación, lo que refuerza un equilibrio de baja productividad. Esta situación coincide con los diagnósticos de la CEPAL sobre economías portuarias periféricas, donde la innovación se ve limitada por la débil articulación entre educación, empresa e instituciones (CEPAL, 2021).

La ausencia de innovación tiene consecuencias medibles sobre la competitividad local. Las empresas que no innovan presentan mayores probabilidades de cierre, menores márgenes de ganancia y escasa capacidad de diferenciación. A escala nacional, Confecámaras señala que las empresas de comercio y servicios personales —sectores con baja incorporación de innovación— concentran las mayores tasas de salida del registro mercantil (Confecámaras, 2024), patrón que coincide con la estructura empresarial de Buenaventura.

Desde una perspectiva territorial, la competitividad no depende únicamente de factores individuales de las empresas, sino de la existencia de un entorno que favorezca el aprendizaje colectivo y la transferencia de conocimiento. La literatura sobre derrames de conocimiento muestra que la proximidad de capital humano calificado y de instituciones educativas fortalece la innovación empresarial (Acs, Audretsch & Lehmann, 2013). En ausencia de estas condiciones, como ocurre en contextos

de crisis educativa, la competitividad local se ve estructuralmente limitada.

Finalmente, la relación entre educación, innovación y competitividad en Buenaventura se caracteriza por un déficit acumulado que restringe la capacidad de las empresas para diferenciarse, crecer y sostenerse en el tiempo. La evidencia empírica confirma que esta limitación constituye un eslabón central en la cadena causal que conecta la crisis educativa con el cierre empresarial.

7.4. Evidencias estadísticas del vínculo educación-empresa

El vínculo entre educación y desempeño empresarial no es únicamente teórico, sino que cuenta con respaldo estadístico robusto. A nivel nacional, la GEIH muestra que los trabajadores con educación superior presentan tasas significativamente mayores de empleo formal y niveles de ingreso superiores, mientras que aquellos con educación básica incompleta se concentran en ocupaciones informales y de baja productividad (DANE, 2023). Este patrón educativo-laboral se refleja, a su vez, en la calidad y sostenibilidad de las empresas que los emplean.

Los datos de Confecámaras complementan esta evidencia al mostrar que las empresas con

mayor capital humano tienen mayores tasas de supervivencia. Las cifras nacionales indican que las sociedades —que suelen contar con mayor estructura administrativa y mayor dotación de capital humano— presentan una supervivencia a cinco años cercana al 44 %, frente a cerca del 30 % en empresas constituidas como personas naturales, categoría predominante entre microempresas con baja calificación (Confecámaras, 2024). Esta diferencia cuantitativa respalda empíricamente el vínculo entre educación y sostenibilidad empresarial.

En territorios con alta pobreza y baja educación, la CEPAL ha documentado una correlación negativa entre capital humano y mortalidad empresarial. Los municipios con mayores privaciones educativas presentan mayores tasas de cierre y menor capacidad de acumulación productiva, debido a la debilidad de la demanda interna y a la baja productividad laboral (CEPAL, 2018). Este patrón es consistente con la evidencia observada en Buenaventura a lo largo de los capítulos previos.

La relación estadística entre educación y empresa también se manifiesta en la capacidad de formalización. Los datos del DANE muestran que la informalidad laboral se concentra en trabajadores con bajos niveles educativos, lo que limita el crecimiento y la estabilidad de las empresas en las que participan (DANE, 2023).

La informalidad reduce el acceso a financiamiento, tecnología y mercados formales, incrementando la probabilidad de cierre empresarial.

En conjunto, las evidencias estadísticas provenientes del DANE, Confecámaras y la CEPAL permiten afirmar que el vínculo entre educación y desempeño empresarial es consistente y medible. La crisis educativa de Buenaventura se traduce, con base empírica, en una estructura empresarial frágil, alta mortalidad y baja competitividad, confirmando la relación causal que articula este capítulo.

Capítulo 8. Degradación económica: pobreza, informalidad y estancamiento productivo

La degradación económica de un territorio no se expresa únicamente en la pérdida de dinamismo productivo, sino en la profundización de condiciones estructurales de pobreza, informalidad y desigualdad que limitan de manera persistente las oportunidades de bienestar de su población.

En Colombia, la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional han mostrado una fuerte heterogeneidad territorial, evidenciando que los avances agregados del país no se distribuyen de manera equitativa entre regiones. Los territorios con menor dotación de capital humano y estructuras productivas frágiles concentran mayores niveles de privación económica y social, configurando trayectorias de estancamiento difíciles de revertir (CEPAL, 2018; Monroy, Ramírez & Núñez, 2021).

Desde una perspectiva estructural, la pobreza no puede entenderse únicamente como insuficiencia de ingresos, sino como el resultado de un entramado de carencias que incluyen

educación, empleo, acceso a servicios y calidad del entorno productivo. La medición multidimensional de la pobreza ha permitido visibilizar estas interrelaciones, mostrando que los territorios con altos niveles de informalidad laboral y baja calidad del empleo presentan mayores privaciones simultáneas en múltiples dimensiones del bienestar (DANE, 2020; CEPAL, 2022). En este sentido, la degradación económica se manifiesta como un fenómeno acumulativo y territorialmente diferenciado.

En Buenaventura, la degradación económica adquiere una expresión particularmente aguda debido a la convergencia de pobreza persistente, informalidad extendida y debilidad del tejido empresarial. A pesar de su papel estratégico en la economía nacional como principal puerto del Pacífico, la ciudad ha registrado de manera sistemática indicadores sociales y económicos más desfavorables que el promedio nacional. Esta paradoja —alta relevancia macroeconómica y bajo bienestar local— pone de relieve la desconexión entre el crecimiento agregado y las condiciones de vida de la población residente.

El presente capítulo examina la degradación económica de Buenaventura a partir de tres ejes interrelacionados: la evolución de la pobreza monetaria y multidimensional, la informalidad económica como forma dominante de

subsistencia urbana y la desigualdad de ingresos como factor de fragmentación social. Asimismo, se analizan los efectos acumulativos del cierre empresarial sobre la economía local, entendiendo que la fragilidad productiva no solo es consecuencia de la pobreza, sino también uno de sus principales mecanismos de reproducción en el territorio.

8.1. Evolución de la pobreza monetaria y multidimensional

La evolución de la pobreza monetaria en Colombia durante las últimas décadas ha estado marcada por avances parciales y retrocesos asociados a choques económicos y sociales. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la pobreza monetaria a nivel nacional se redujo de manera gradual hasta finales de la década de 2010, pero experimentó un aumento significativo a partir de 2020, como resultado del impacto económico de la pandemia. En 2020, la incidencia de pobreza monetaria nacional se situó en 42,5 %, afectando de manera desproporcionada a los territorios con mayor fragilidad estructural (DANE, 2020).

En el caso de Buenaventura, la pobreza monetaria ha presentado niveles persistentemente superiores al promedio nacional. Los estudios sobre dinámica de la

pobreza en Colombia muestran que los municipios con alta informalidad laboral y baja diversificación productiva concentran mayores proporciones de población pobre, incluso en periodos de crecimiento económico agregado (Monroy et al., 2021). Esta tendencia se ha mantenido en Buenaventura, donde la dependencia de ingresos inestables y actividades de subsistencia incrementa la vulnerabilidad de los hogares frente a choques económicos.

La pobreza multidimensional ofrece una mirada más integral sobre estas privaciones. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) incorpora dimensiones como educación, condiciones de la niñez, trabajo, salud y vivienda, permitiendo identificar carencias simultáneas que no siempre se reflejan en el ingreso monetario. A nivel nacional, el IPM evidenció que una proporción significativa de los hogares pobres presenta privaciones en educación y empleo, dimensiones estrechamente vinculadas a la estructura productiva del territorio (DANE, 2020).

En Buenaventura, las privaciones multidimensionales se concentran especialmente en los componentes de educación y trabajo. La baja culminación de la educación media, la limitada cobertura de educación superior y la alta informalidad laboral generan

un entorno en el que los hogares enfrentan múltiples carencias de manera simultánea. La CEPAL ha señalado que estos patrones son característicos de territorios atrapados en dinámicas de bajo desarrollo, donde la pobreza tiende a reproducirse de forma intergeneracional (CEPAL, 2018).

La persistencia de la pobreza multidimensional también se relaciona con la debilidad del mercado laboral formal. Los hogares cuyo sustento depende de empleos informales presentan mayores probabilidades de experimentar privaciones en salud, seguridad social y estabilidad habitacional. Los datos del DANE muestran que la informalidad laboral está fuertemente correlacionada con mayores niveles de pobreza, aun cuando exista ocupación, fenómeno conocido como pobreza laboral (DANE, 2023).

Desde una perspectiva histórica, la evolución de la pobreza en Buenaventura evidencia una limitada capacidad de recuperación frente a choques económicos. A diferencia de otros territorios que lograron reducir la pobreza en periodos de crecimiento, la ciudad ha mostrado una mayor rigidez estructural, asociada a la debilidad de su aparato productivo y a la escasa generación de empleo de calidad. Esta rigidez explica por qué los aumentos de la pobreza

tienden a ser más profundos y persistentes en el tiempo (Monroy et al., 2021).

Así pues,, la evolución de la pobreza monetaria y multidimensional en Buenaventura confirma la existencia de un proceso de degradación económica sostenida. La evidencia empírica muestra que la pobreza no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado acumulado de déficits educativos, fragilidad productiva e informalidad laboral, configurando un escenario de estancamiento que condiciona el desarrollo económico y social del territorio.

8.2. Informalidad económica y subsistencia urbana

La informalidad económica constituye uno de los rasgos más persistentes del mercado laboral colombiano y uno de los principales mecanismos de subsistencia urbana en territorios con débil tejido productivo.

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la tasa de informalidad laboral a nivel nacional se ubicó alrededor del 58 % en 2022, con marcadas diferencias territoriales que afectan de manera más intensa a municipios con altos niveles de pobreza y baja diversificación productiva (DANE, 2023). Esta proporción implica que más de la mitad de la población ocupada en el país carece de acceso a seguridad

social, estabilidad laboral y protección frente a choques económicos.

En Buenaventura, la informalidad presenta niveles superiores al promedio nacional. Los registros del DANE muestran que, en ciudades con estructuras productivas frágiles y alta dependencia del comercio y los servicios personales, la informalidad supera con frecuencia el 60 % de la población ocupada, situándose varios puntos porcentuales por encima del promedio nacional (DANE, 2023). Esta elevada informalidad refleja la incapacidad del mercado laboral local para absorber la fuerza de trabajo en empleos formales y productivos.

La informalidad en contextos urbanos como Buenaventura no responde únicamente a decisiones individuales, sino a restricciones estructurales. La OIT ha documentado que los trabajadores informales presentan niveles educativos significativamente más bajos que los trabajadores formales y se concentran en actividades de baja productividad, con ingresos inestables y ausencia de protección social (OIT, 2018). En este sentido, la informalidad opera como un mecanismo de supervivencia frente a la exclusión del empleo formal, más que como una estrategia de emprendimiento voluntario.

Los ingresos derivados de la informalidad tienden a ser insuficientes para superar la

pobreza. Según el DANE, una proporción significativa de los ocupados informales se encuentra por debajo de la línea de pobreza monetaria, lo que configura el fenómeno de pobreza laboral. A nivel nacional, más del 40 % de los trabajadores informales percibe ingresos inferiores al umbral de pobreza, cifra que se incrementa en territorios con menor dinamismo económico (DANE, 2020). Este patrón es consistente con la realidad observada en Buenaventura.

La persistencia de la informalidad tiene efectos directos sobre la estructura económica local. Las actividades informales generan escaso valor agregado, limitan la recaudación fiscal y reducen la capacidad del Estado para invertir en bienes públicos. La CEPAL ha señalado que los territorios con alta informalidad enfrentan mayores dificultades para romper ciclos de pobreza, dado que la informalidad debilita los encadenamientos productivos y perpetúa empleos de baja calidad (CEPAL, 2018).

En síntesis, la informalidad económica en Buenaventura constituye un rasgo estructural del mercado laboral urbano. Las cifras nacionales y territoriales confirman que la subsistencia informal no solo es consecuencia de la pobreza, sino también uno de los principales mecanismos de reproducción de la degradación económica, al limitar la productividad, los

ingresos y la protección social de la población ocupada.

8.3. Desigualdad de ingresos y fragmentación social

La desigualdad de ingresos representa una dimensión central de la degradación económica y social, al reflejar cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento —cuando estos existen— entre distintos grupos de la población. En Colombia, los niveles de desigualdad se han mantenido elevados de manera persistente. Según el DANE, el coeficiente de Gini nacional se situó en 0,54 en 2019 y aumentó a 0,54–0,55 en 2020, evidenciando un alto grado de concentración del ingreso incluso antes y durante la crisis sanitaria (DANE, 2020).

Los estudios sobre dinámica de la pobreza muestran que la desigualdad de ingresos se expresa con mayor intensidad en territorios donde la mayoría de la población depende de empleos informales y de baja productividad. Monroy, Ramírez y Núñez (2021) documentan que los municipios con mayor informalidad presentan distribuciones del ingreso más desiguales, debido a la coexistencia de pequeños grupos con ingresos relativamente altos y grandes segmentos de población con ingresos cercanos o inferiores a la línea de pobreza.

En Buenaventura, esta desigualdad se manifiesta de forma particularmente aguda. La coexistencia de actividades portuarias de alto valor económico con una base laboral mayoritariamente informal genera brechas profundas entre quienes logran vincularse a segmentos más dinámicos de la economía y quienes dependen de actividades de subsistencia. La CEPAL ha advertido que este tipo de estructuras productivas fragmentadas tienden a profundizar la desigualdad y a debilitar la cohesión social en los territorios (CEPAL, 2018).

La desigualdad de ingresos no solo tiene efectos económicos, sino también sociales. Los territorios con mayores brechas distributivas presentan mayores niveles de segregación urbana, menor acceso equitativo a servicios y mayores tensiones sociales. El PNUD ha señalado que la desigualdad persistente limita las oportunidades de movilidad social y refuerza la transmisión intergeneracional de la pobreza, especialmente cuando se combina con déficits educativos y laborales (PNUD, 2022).

Desde una perspectiva territorial, la fragmentación social asociada a la desigualdad se traduce en mercados internos débiles y segmentados. Cuando una parte significativa de la población carece de ingresos suficientes, la demanda local se contrae, afectando

negativamente a las empresas que dependen del consumo interno. Este mecanismo refuerza el estancamiento productivo y contribuye a la alta rotación empresarial observada en contextos de desigualdad elevada.

Vemos pues como la desigualdad de ingresos en Buenaventura constituye un componente estructural de la degradación económica. Las cifras nacionales y los análisis territoriales confirman que la concentración del ingreso, combinada con informalidad y baja productividad, fragmenta el tejido social y limita las posibilidades de desarrollo económico inclusivo.

8.4. Efectos acumulativos del cierre empresarial en la economía local

El cierre recurrente de empresas genera efectos acumulativos que trascienden la pérdida individual de unidades productivas y se proyectan sobre la economía local en su conjunto. A nivel nacional, Confecámaras ha documentado que la elevada mortalidad empresarial reduce la generación de empleo formal y debilita la estabilidad del mercado laboral, especialmente en territorios donde predominan microempresas de baja productividad (Confecámaras, 2024). Estos efectos son más pronunciados en contextos de alta pobreza e informalidad.

Cada cierre empresarial implica la pérdida directa de puestos de trabajo y la interrupción de ingresos para los hogares vinculados a la empresa. En territorios donde la informalidad supera el 60 %, como ocurre en ciudades con estructuras productivas frágiles, estas pérdidas tienden a absorberse mediante actividades informales de menor productividad, reforzando el ciclo de subsistencia urbana (DANE, 2023). De este modo, el cierre empresarial no reduce la presión sobre el mercado laboral, sino que la desplaza hacia formas más precarias de ocupación.

Los efectos acumulativos también se manifiestan en la contracción de la base productiva local. La desaparición recurrente de empresas reduce la diversidad de bienes y servicios disponibles, limita los encadenamientos económicos y debilita la capacidad del territorio para atraer inversión. La CEPAL ha señalado que los territorios con alta rotación empresarial presentan mayores dificultades para sostener procesos de crecimiento, debido a la ausencia de empresas ancla que estructuren cadenas productivas estables (CEPAL, 2021).

Desde el punto de vista fiscal, el cierre empresarial reduce la recaudación y limita la capacidad del Estado local para financiar políticas sociales y de desarrollo. Esta

restricción fiscal agrava la degradación económica, al reducir la inversión en educación, infraestructura y servicios, dimensiones clave para romper los ciclos de pobreza y estancamiento (CEPAL, 2018).

En Buenaventura, la reiteración de cierres empresariales refuerza un equilibrio de bajo desarrollo. La pérdida de empleo formal, la expansión de la informalidad y la debilidad de la demanda interna se retroalimentan, configurando un escenario de estancamiento productivo persistente. Este proceso explica por qué la degradación económica no se revierte espontáneamente, aun en contextos de crecimiento macroeconómico nacional.

Así pues, los efectos acumulativos del cierre empresarial constituyen un mecanismo central de reproducción de la degradación económica en Buenaventura. La evidencia empírica confirma que la fragilidad productiva no es solo consecuencia de la pobreza y la informalidad, sino también una de sus principales causas, cerrando el círculo que articula pobreza, informalidad y estancamiento productivo en el territorio.

Capítulo 9. Degradación social y territorial en Buenaventura

La degradación social y territorial es una expresión profunda y persistente del deterioro económico, en tanto se manifiesta en la erosión de los vínculos comunitarios, la fragmentación del espacio urbano y el debilitamiento de las capacidades colectivas para la acción social.

En Colombia, los territorios caracterizados por altos niveles de pobreza, informalidad y desempleo tienden a experimentar procesos acumulativos de exclusión social que trascienden el ámbito económico y afectan la cohesión del tejido social (CEPAL, 2018; PNUD, 2022). Estas dinámicas se intensifican cuando los déficits educativos limitan las oportunidades de movilidad social y participación ciudadana.

Desde una perspectiva territorial, la degradación social no se distribuye de manera homogénea, sino que se concentra en determinados espacios urbanos donde confluyen precariedad laboral, baja calidad educativa y ausencia de servicios públicos adecuados. La literatura sobre desarrollo humano ha mostrado que estas condiciones generan entornos de alta vulnerabilidad social, en los que los individuos y los hogares enfrentan mayores riesgos de exclusión, violencia y

ruptura de redes comunitarias (Sen, 1999; PNUD, 2022). En estos contextos, la desigualdad territorial se convierte en un factor estructurante de la experiencia cotidiana.

Buenaventura representa un caso emblemático de esta convergencia de factores. A pesar de su importancia estratégica en la economía nacional, la ciudad ha registrado de manera sistemática indicadores sociales más desfavorables que el promedio del país. La persistencia del desempleo, la informalidad laboral y la precariedad educativa ha configurado un entorno social frágil, marcado por la inseguridad económica y la limitada capacidad de los hogares para proyectar trayectorias de bienestar sostenido (Monroy et al., 2021).

Este capítulo examina la degradación social y territorial de Buenaventura a partir de cuatro dimensiones interrelacionadas: los impactos sociales del desempleo y la precariedad educativa, la fragmentación urbana y la exclusión territorial, la relación entre educación y violencia estructural, y el debilitamiento del capital social y la cohesión comunitaria. El análisis se sustenta en evidencia empírica verificable y en marcos conceptuales que permiten comprender cómo la crisis educativa y productiva se traduce en vulnerabilidad social persistente.

9.1. Impactos sociales del desempleo y la precariedad educativa

El desempleo constituye uno de los principales determinantes de la vulnerabilidad social en contextos urbanos, al afectar de manera directa los ingresos de los hogares y su acceso a bienes y servicios básicos. Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la tasa de desempleo nacional se situó en 13,7 % en 2021 y descendió gradualmente hasta ubicarse en torno al 10 % en 2023, aunque con diferencias territoriales significativas (DANE, 2023). Los territorios con estructuras productivas frágiles presentaron tasas persistentemente superiores, lo que incrementó la presión social sobre los hogares.

En Buenaventura, el desempleo ha mostrado niveles sistemáticamente más altos que el promedio nacional. Diversos análisis territoriales indican que las ciudades con alta informalidad y baja diversificación productiva registran tasas de desempleo urbano que superan con frecuencia el **20 %**, situando a amplios segmentos de la población en condiciones de inestabilidad económica prolongada (DANE, 2023). Este desempleo estructural afecta de manera particular a jóvenes y personas con bajos niveles educativos, grupos que enfrentan mayores barreras de acceso al empleo formal.

La precariedad educativa amplifica los efectos sociales del desempleo. Los datos del DANE muestran que los individuos con educación básica incompleta presentan tasas de desempleo significativamente más altas que aquellos con educación media completa o superior. A nivel nacional, la tasa de desempleo de personas con baja escolaridad supera en varios puntos porcentuales la de quienes cuentan con educación superior, evidenciando la relación directa entre nivel educativo y empleabilidad (DANE, 2023). En territorios como Buenaventura, donde la culminación de la educación media es limitada, este efecto se intensifica.

Los impactos sociales del desempleo y la precariedad educativa se reflejan en el aumento de la inseguridad económica de los hogares. La pérdida o ausencia prolongada de ingresos estables incrementa la probabilidad de pobreza, endeudamiento y dependencia de actividades informales de subsistencia. Monroy, Ramírez y Núñez (2021) documentan que los hogares con jefes de hogar desempleados o subempleados presentan mayores riesgos de pobreza persistente y menor capacidad de recuperación frente a choques económicos.

El desempleo también tiene efectos no monetarios significativos. La literatura sobre desarrollo humano ha mostrado que la exclusión

del mercado laboral afecta la autoestima, la participación social y la percepción de pertenencia, debilitando los vínculos comunitarios y aumentando la vulnerabilidad social (Sen, 1999; PNUD, 2022). En contextos de alta precariedad educativa, estas consecuencias se profundizan debido a la escasez de alternativas de inserción social y económica.

En el ámbito familiar, la combinación de desempleo y baja educación incrementa la transmisión intergeneracional de la pobreza. Los hogares con ingresos inestables enfrentan mayores dificultades para sostener la permanencia escolar de niños y adolescentes, lo que reproduce los déficits educativos y limita las oportunidades futuras. La CEPAL ha señalado que esta dinámica constituye uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad social en América Latina (CEPAL, 2018).

Como vemos, los impactos sociales del desempleo y la precariedad educativa en Buenaventura configuran un escenario de alta vulnerabilidad social. La evidencia empírica muestra que estas condiciones no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan mutuamente, debilitando el tejido social y sentando las bases de procesos más amplios de degradación territorial.

9.2. Fragmentación urbana y exclusión territorial

La fragmentación urbana constituye una expresión espacial de la desigualdad social y económica. En Colombia, los procesos de urbanización acelerada y desigual han dado lugar a ciudades con profundas brechas intraurbanas en acceso a servicios, infraestructura y oportunidades. Según el DANE, más del 30 % de los hogares urbanos del país presenta al menos una carencia asociada a condiciones de vivienda o acceso a servicios básicos, proporción que se incrementa en territorios con altos niveles de pobreza y precariedad laboral (DANE, 2020).

En Buenaventura, la fragmentación territorial se manifiesta con particular intensidad. Los estudios sobre pobreza multidimensional indican que una proporción significativa de los hogares urbanos del municipio presenta privaciones simultáneas en vivienda, saneamiento y acceso a servicios públicos, dimensiones estrechamente asociadas a la localización territorial (DANE, 2020). Esta distribución desigual de las condiciones urbanas genera espacios de exclusión persistente, donde la vulnerabilidad social se concentra y se reproduce.

La exclusión territorial también se refleja en el acceso diferencial a equipamientos educativos y sociales. La CEPAL ha documentado que los barrios periféricos y de menor ingreso presentan mayores déficits en infraestructura educativa y menor oferta de servicios sociales, lo que limita las oportunidades de formación y participación de sus habitantes (CEPAL, 2018). En contextos como Buenaventura, estas carencias refuerzan la segregación socioespacial y profundizan las brechas educativas y laborales.

Desde una perspectiva social, la fragmentación urbana debilita los vínculos entre distintos sectores de la ciudad. La coexistencia de áreas con alta concentración de pobreza y otras con mayor dotación de recursos genera barreras simbólicas y materiales que restringen la movilidad social y territorial. El PNUD ha señalado que esta segregación limita la interacción social y reduce las posibilidades de construcción de proyectos colectivos de ciudad (PNUD, 2022).

Los efectos económicos de la fragmentación son igualmente relevantes. La concentración de pobreza en determinados sectores urbanos reduce la demanda local y limita la viabilidad de actividades productivas formales, lo que refuerza la informalidad y el estancamiento económico. Este patrón ha sido identificado por

la CEPAL como un rasgo estructural de territorios atrapados en dinámicas de bajo desarrollo (CEPAL, 2018).

La fragmentación urbana y la exclusión territorial en Buenaventura constituyen mecanismos centrales de la degradación social. Las cifras disponibles confirman que la desigual distribución espacial de las condiciones de vida profundiza la vulnerabilidad social y limita las posibilidades de integración económica y social del territorio.

9.3. Educación, violencia estructural y vulnerabilidad social

La violencia estructural se manifiesta cuando las condiciones sociales, económicas y educativas limitan de manera sistemática las oportunidades de desarrollo de amplios sectores de la población. En Colombia, la relación entre pobreza, baja educación y vulnerabilidad social ha sido ampliamente documentada. Los territorios con mayores déficits educativos presentan mayores riesgos de exclusión y exposición a dinámicas de violencia estructural, entendida como la negación persistente de derechos y oportunidades (CEPAL, 2018).

Los datos educativos muestran que la baja culminación de la educación media se asocia a

mayores niveles de vulnerabilidad social. A nivel nacional, el DANE indica que los jóvenes que no completan la educación secundaria presentan tasas significativamente más altas de desempleo e informalidad, situándose en condiciones de mayor riesgo social (DANE, 2023). En territorios como Buenaventura, donde estas tasas de culminación son inferiores al promedio nacional, el impacto de esta relación se intensifica.

La UNESCO ha señalado que la exclusión educativa constituye uno de los principales factores de vulnerabilidad juvenil, al limitar las capacidades para la participación social y el acceso a empleos de calidad (UNESCO, 2021). En contextos urbanos con alta pobreza, la ausencia de trayectorias educativas estables incrementa la exposición de niños y jóvenes a entornos de riesgo, reforzando dinámicas de marginalidad y exclusión.

La violencia estructural no se expresa únicamente en hechos violentos directos, sino en la acumulación de carencias que afectan la vida cotidiana. El PNUD documenta que los territorios con mayores niveles de pobreza y desigualdad presentan mayores indicadores de estrés social, deterioro del bienestar y desconfianza institucional (PNUD, 2022). Estas condiciones erosionan la capacidad de las

comunidades para enfrentar colectivamente los problemas sociales.

En Buenaventura, la combinación de precariedad educativa, desempleo e informalidad configura un entorno de alta vulnerabilidad social. La CEPAL ha advertido que, en estos contextos, la falta de oportunidades educativas y laborales actúa como un factor estructural que perpetúa la exclusión y limita la cohesión social (CEPAL, 2018).

En síntesis, la relación entre educación, violencia estructural y vulnerabilidad social en Buenaventura se sustenta en evidencias empíricas claras. Los déficits educativos no solo afectan el desempeño económico, sino que generan condiciones sociales que incrementan la exclusión y debilitan el tejido social del territorio.

9.4. Capital social debilitado y pérdida de cohesión comunitaria

El capital social, entendido como el conjunto de redes, normas y relaciones de confianza que facilitan la cooperación colectiva, constituye un recurso fundamental para el desarrollo territorial. La literatura sobre desarrollo humano ha demostrado que los territorios con mayor capital social presentan mejores

capacidades para enfrentar crisis económicas y sociales (Sen, 1999; PNUD, 2022). Cuando este capital se debilita, la cohesión comunitaria se erosiona y aumentan las dificultades para la acción colectiva.

En Colombia, los estudios sobre pobreza y desigualdad muestran que los territorios con alta informalidad y pobreza persistente presentan menores niveles de confianza social y participación comunitaria. La CEPAL ha documentado que la precariedad económica prolongada tiende a debilitar las redes de apoyo y a reducir la participación en organizaciones sociales, especialmente en contextos urbanos fragmentados (CEPAL, 2018).

En Buenaventura, la pérdida de cohesión comunitaria se vincula estrechamente a la inestabilidad económica y educativa. La reiteración de cierres empresariales, el desempleo persistente y la precariedad educativa generan incertidumbre y reducen la capacidad de los hogares para sostener vínculos de cooperación a largo plazo. Este proceso ha sido identificado por el PNUD como un factor que limita la resiliencia social en territorios vulnerables (PNUD, 2022).

La debilitación del capital social tiene efectos directos sobre el desarrollo territorial. La ausencia de redes sólidas dificulta la articulación entre comunidad, Estado y sector

productivo, reduciendo la eficacia de las políticas públicas y los proyectos de desarrollo. La UNESCO ha señalado que la cohesión social es un componente clave para la construcción de entornos educativos y sociales inclusivos (UNESCO, 2021).

Desde una perspectiva empírica, la pérdida de capital social se refleja en menores niveles de participación comunitaria y en la fragmentación de las relaciones sociales. Estos procesos refuerzan la exclusión y limitan las posibilidades de construir respuestas colectivas frente a la degradación económica y social.

El debilitamiento del capital social en Buenaventura constituye una consecuencia y, al mismo tiempo, un mecanismo de reproducción de la degradación social y territorial. La evidencia empírica confirma que sin cohesión comunitaria resulta difícil romper los ciclos de pobreza, exclusión y vulnerabilidad que afectan al territorio.

Capítulo 10. Buenaventura frente al promedio nacional: brechas educativas, económicas y sociales

La comparación entre territorios constituye una herramienta analítica central para identificar rezagos estructurales y comprender por qué ciertos municipios permanecen atrapados en trayectorias de bajo desarrollo. En Colombia, las brechas educativas, económicas y sociales presentan una marcada dimensión territorial, de modo que los promedios nacionales ocultan profundas desigualdades internas. Municipios con alta pobreza, baja diversificación productiva y débil capital humano exhiben sistemáticamente indicadores inferiores en educación, empleo e ingresos, aun cuando el país registre avances agregados (CEPAL, 2018; Monroy et al., 2021).

Desde una perspectiva educativa, las diferencias territoriales se reflejan tanto en la cobertura como en la calidad y continuidad de los procesos formativos. La evidencia nacional muestra que los territorios con menor cobertura en educación media y superior presentan mayores dificultades para generar empleo formal y sostener dinámicas empresariales estables. Estas brechas educativas se traducen

en desigualdades económicas persistentes, al limitar la acumulación de capital humano y la productividad laboral (Hanushek & Woessmann, 2015).

En el plano económico, la comparación territorial revela contrastes significativos en estructura productiva, formalización empresarial y calidad del empleo. Mientras algunas ciudades han logrado consolidar sectores productivos diversificados y empresas con mayor capacidad de supervivencia, otras — como Buenaventura— concentran microempresas de baja productividad y altas tasas de cierre. Esta divergencia explica por qué los beneficios del crecimiento nacional no se distribuyen de manera homogénea y por qué ciertos territorios permanecen rezagados (Confecámaras, 2024).

El análisis comparado permite, además, identificar la interrelación entre brechas educativas, económicas y sociales. Los territorios con mayores rezagos educativos presentan mayores niveles de pobreza, informalidad y desigualdad, configurando un círculo de exclusión difícil de romper. Este capítulo examina estas brechas situando a Buenaventura frente al promedio nacional, con el propósito de evidenciar la magnitud del rezago estructural y su carácter persistente.

10.1. Comparaciones nacionales en educación básica y superior

Las brechas educativas entre Buenaventura y el promedio nacional se manifiestan de manera clara en los indicadores de cobertura y culminación de la educación básica y media. A nivel nacional, la tasa neta de cobertura en educación secundaria se ha situado en torno al 76–78 % en los últimos años, mientras que en municipios con alta pobreza urbana estas tasas son sensiblemente menores (MEN, s. f.; CEPAL, 2022). Esta diferencia implica una menor proporción de adolescentes que logra transitar de manera continua por el sistema educativo.

La culminación de la educación media constituye uno de los puntos críticos de la brecha territorial. Los datos nacionales muestran que una proporción significativa de jóvenes abandona el sistema educativo antes de finalizar el grado once, fenómeno asociado a condiciones socioeconómicas adversas y a la necesidad de incorporarse tempranamente al mercado laboral informal (DANE, 2023). En territorios como Buenaventura, donde la pobreza monetaria y la informalidad superan el promedio nacional, esta deserción tiende a ser más elevada, profundizando el rezago educativo.

Las diferencias se amplían de manera significativa en el acceso a la educación superior.

A nivel nacional, la cobertura bruta en educación superior se ha ubicado alrededor del 52 %, según los registros del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (MEN-SNIES, s. f.). Sin embargo, esta cifra oculta profundas disparidades territoriales: los municipios con menor infraestructura educativa y menor ingreso per cápita presentan coberturas muy inferiores, limitando las oportunidades de formación avanzada de su población joven.

En Buenaventura, la baja cobertura en educación superior se traduce en una menor disponibilidad de capital humano calificado. La literatura ha mostrado que los territorios con baja presencia de educación técnica, tecnológica y universitaria enfrentan mayores dificultades para atraer inversión y diversificar su estructura productiva (OCDE, 2024). Esta carencia educativa contribuye a explicar por qué la ciudad presenta mayores tasas de informalidad laboral y menor productividad promedio que el conjunto del país.

La comparación nacional también revela brechas en la composición de la oferta educativa. Mientras en el promedio nacional la educación superior ha avanzado hacia una mayor diversificación de programas y modalidades, en territorios rezagados la oferta es limitada y poco articulada con las necesidades productivas

locales. La CEPAL ha señalado que esta desconexión entre educación y territorio refuerza las desigualdades regionales y reduce el impacto de la formación sobre el desarrollo económico (CEPAL, 2022).

Las comparaciones nacionales en educación básica y superior, como vemos, muestran que Buenaventura enfrenta un rezago educativo significativo frente al promedio del país. Las cifras de cobertura, culminación y acceso a educación superior confirman que estas brechas no son coyunturales, sino estructurales, y constituyen uno de los principales factores que explican las desigualdades económicas y sociales analizadas a lo largo del libro.

10.2. Brechas empresariales y productivas

Las brechas empresariales entre Buenaventura y el promedio nacional se evidencian con claridad en la estructura, tamaño y supervivencia de las empresas. A nivel nacional, los registros del Registro Único Empresarial y Social indican que más del 90 % de las empresas formales corresponde a microempresas, pero también muestran diferencias territoriales significativas en su capacidad de permanencia.

Según Confecámaras, la tasa de supervivencia a cinco años se sitúa en torno al 44 % para sociedades y cerca del 30 % para personas naturales, con desempeños inferiores en territorios con alta informalidad y baja diversificación productiva (Confecámaras, 2024).

En Buenaventura, la brecha productiva se manifiesta en la concentración del tejido empresarial en sectores de comercio minorista y servicios personales, categorías que, a escala nacional, registran las mayores tasas de cancelación y liquidación. Confecámaras documenta que estos sectores presentan salidas del registro mercantil superiores al promedio, lo que implica una mayor rotación y menor acumulación productiva. Esta composición sectorial explica por qué la creación empresarial en el municipio no se traduce en fortalecimiento sostenido del aparato productivo.

La productividad laboral constituye otro eje de la brecha. Los diagnósticos nacionales muestran que los territorios con menor capital humano y mayor informalidad presentan niveles de productividad significativamente inferiores al promedio. El informe de diagnóstico de empleo señala que la baja calificación limita la productividad y reduce la capacidad de las empresas para generar valor agregado y empleo formal (Carranza et al.,

2021). En Buenaventura, la baja cobertura de educación superior refuerza esta brecha productiva frente a otras ciudades.

Las diferencias también se observan en la capacidad de formalización y escalamiento empresarial. A nivel nacional, las empresas con mayor estructura organizativa y capital humano muestran mayor acceso a financiamiento y mercados formales. En contraste, en territorios como Buenaventura predomina la empresa de subsistencia, con baja capitalización y escasas posibilidades de crecimiento. Esta divergencia ha sido identificada por la CEPAL como un rasgo estructural de los territorios rezagados (CEPAL, 2021).

Desde una perspectiva comparada, la brecha empresarial no responde únicamente al número de empresas, sino a su calidad productiva. Mientras el promedio nacional ha mostrado avances parciales en diversificación y formalización, Buenaventura mantiene una estructura empresarial frágil, con alta mortalidad y bajo impacto sobre el empleo. Esta diferencia explica por qué el crecimiento nacional no se traduce de manera proporcional en dinamismo económico local.

Las brechas empresariales y productivas entre Buenaventura y el promedio nacional son estructurales y medibles. Las cifras de supervivencia empresarial, composición

sectorial y productividad confirman que el rezago del municipio no es coyuntural, sino resultado de una trayectoria productiva limitada y poco diversificada.

10.3. Indicadores sociales comparados

Las brechas sociales entre Buenaventura y el promedio nacional se reflejan de manera clara en indicadores de pobreza, informalidad y desigualdad. A nivel nacional, la pobreza monetaria se situó en 42,5 % en 2020, con una reducción parcial en los años posteriores, mientras que los territorios con mayor fragilidad estructural mantuvieron niveles significativamente más altos (DANE, 2020). Estas diferencias evidencian la desigual capacidad de los territorios para recuperarse frente a choques económicos.

La informalidad laboral constituye otro indicador clave de la brecha social. Según la GEIH, la informalidad a nivel nacional se ubicó alrededor del 58 % en 2022, mientras que en ciudades con estructuras productivas débiles supera con frecuencia el 60 % de la población ocupada (DANE, 2023). Esta mayor informalidad implica menor acceso a seguridad social y mayor exposición a la pobreza laboral, profundizando la brecha social frente al promedio nacional.

La desigualdad de ingresos refuerza estas diferencias. El coeficiente de Gini nacional se mantuvo alrededor de 0,54–0,55 en el periodo 2019–2020, reflejando una alta concentración del ingreso (DANE, 2020). Los estudios territoriales muestran que los municipios con alta informalidad y pobreza persistente presentan niveles de desigualdad similares o superiores, lo que limita la cohesión social y la movilidad social ascendente (Monroy et al., 2021).

Desde la perspectiva del desarrollo humano, el PNUD ha señalado que las brechas territoriales en ingreso, educación y empleo se traducen en diferencias sustantivas en bienestar y oportunidades. Los territorios rezagados presentan menores capacidades para garantizar trayectorias de vida dignas y sostenibles, aun cuando el país en su conjunto registre mejoras agregadas (PNUD, 2022).

La comparación social evidencia, además, que las brechas no se limitan a indicadores económicos, sino que se proyectan sobre el acceso a servicios, la calidad del entorno urbano y la cohesión comunitaria. La CEPAL ha advertido que estas desigualdades territoriales tienden a reproducirse en el tiempo cuando no se abordan de manera integral (CEPAL, 2018).

Los indicadores sociales comparados confirman que Buenaventura presenta un

rezago significativo frente al promedio nacional. Las cifras de pobreza, informalidad y desigualdad muestran que las brechas son persistentes y estructurales, reforzando el diagnóstico de degradación social y económica del territorio.

10.4. El rezago estructural como problema persistente

El conjunto de brechas educativas, empresariales y sociales analizadas permite caracterizar el rezago de Buenaventura como un fenómeno estructural y persistente. La evidencia empírica muestra que las diferencias frente al promedio nacional no se han cerrado de manera sostenida, sino que tienden a reproducirse a lo largo del tiempo, incluso en periodos de crecimiento económico agregado. Este comportamiento es consistente con los diagnósticos de la CEPAL sobre territorios atrapados en trayectorias de bajo desarrollo (CEPAL, 2018).

El rezago estructural se explica por la interacción de múltiples factores. La baja acumulación de capital humano limita la productividad y la diversificación productiva; la fragilidad empresarial reduce la generación de empleo formal; y la alta informalidad perpetúa la pobreza y la desigualdad. Estos elementos se refuerzan mutuamente, configurando un

equilibrio de bajo desarrollo difícil de romper sin intervenciones integrales y sostenidas.

Desde una perspectiva comparativa, el rezago de Buenaventura no responde a una ausencia de actividad económica, sino a la desconexión entre dicha actividad y el bienestar local. La OCDE ha señalado que los territorios con enclaves productivos no articulados al entorno local presentan mayores dificultades para traducir el crecimiento en desarrollo inclusivo (OCDE, 2024). Este diagnóstico resulta especialmente pertinente para comprender la persistencia del rezago bonaverense.

La persistencia del rezago tiene implicaciones directas para la política pública. Los enfoques sectoriales aislados resultan insuficientes para revertir brechas que se originan en la interacción entre educación, empresa y estructura social. La evidencia analizada sugiere que solo estrategias integrales, orientadas al fortalecimiento del capital humano, la diversificación productiva y la reducción de la informalidad, pueden modificar de manera sostenible la trayectoria del territorio (CEPAL, 2021).

El rezago estructural de Buenaventura frente al promedio nacional constituye un problema persistente, empíricamente verificable y de naturaleza multidimensional. Reconocer este carácter estructural resulta fundamental para

comprender los límites de las políticas tradicionales y para orientar propuestas de transformación que aborden simultáneamente las brechas educativas, económicas y sociales del municipio.

Capítulo 11. Educación como eje de recuperación territorial y reactivación empresarial

La superación del rezago estructural que caracteriza a Buenaventura exige un cambio de enfoque que trascienda las intervenciones coyunturales y sectoriales. La evidencia acumulada a lo largo de este libro muestra que la degradación educativa, empresarial y social no responde a fallas aisladas, sino a la ausencia de un proyecto territorial articulado que coloque a la educación en el centro del desarrollo. En este sentido, la educación emerge no solo como un derecho social, sino como el principal activo estratégico para reconstruir capacidades productivas, fortalecer el tejido empresarial y recuperar la cohesión social del territorio.

La literatura sobre desarrollo económico y capital humano ha demostrado de manera consistente que las inversiones sostenidas en educación generan retornos económicos y sociales de largo plazo. Estas inversiones inciden en la productividad laboral, la innovación empresarial y la resiliencia de las economías locales frente a choques externos (Becker, 1993; Hanushek & Woessmann, 2015). En territorios donde la educación ha sido

relegada, como Buenaventura, la recuperación educativa constituye una condición necesaria para revertir los ciclos de pobreza, informalidad y estancamiento productivo.

Desde una perspectiva territorial, la educación cumple además una función integradora. Los sistemas educativos que articulan formación básica, media, técnica y superior con las necesidades productivas locales contribuyen a generar encadenamientos virtuosos entre escuela, empresa y comunidad.

La CEPAL ha subrayado que los territorios que logran alinear su oferta educativa con estrategias de desarrollo productivo presentan mayores niveles de inclusión social y sostenibilidad económica (CEPAL, 2021). Esta articulación resulta particularmente relevante en contextos portuarios donde existe potencial económico no aprovechado.

El presente capítulo se orienta a analizar la educación como eje de recuperación territorial y reactivación empresarial en Buenaventura. A partir de la evidencia empírica y los marcos conceptuales desarrollados, se examinan los fundamentos de la educación como inversión estratégica, su papel en la formación para el trabajo y la empresa, la necesidad de articular actores educativos, productivos y estatales, y los lineamientos para una transformación estructural del territorio. El objetivo es

identificar rutas viables para convertir la educación en motor de desarrollo inclusivo y sostenible.

11.1. La educación como inversión estratégica de largo plazo

La educación constituye una de las inversiones públicas con mayores retornos económicos y sociales, especialmente en territorios con rezagos estructurales. La teoría del capital humano ha demostrado que cada incremento en los años de escolaridad se asocia con aumentos significativos en la productividad y en los ingresos laborales, lo que repercute positivamente en el crecimiento económico agregado (Becker, 1993). Estos efectos son particularmente relevantes en contextos donde la baja educación limita la competitividad empresarial y la generación de empleo formal.

La evidencia empírica internacional respalda esta relación. Los estudios comparativos muestran que los países y regiones con mayores niveles de educación alcanzan tasas más altas de crecimiento económico y presentan mayor resiliencia frente a crisis económicas. Hanushek y Woessmann (2015) estiman que las mejoras en la calidad educativa tienen un impacto directo y sostenido sobre el crecimiento del producto interno bruto a largo plazo, superando

incluso el efecto de incrementos marginales en la inversión física.

En Colombia, los diagnósticos sobre empleo y productividad confirman que la baja acumulación de capital humano constituye uno de los principales cuellos de botella del desarrollo territorial. Carranza et al. (2021) señalan que la insuficiente formación de la fuerza laboral limita la productividad empresarial y reduce la capacidad de las empresas para innovar y escalar. En territorios como Buenaventura, donde la cobertura de educación media y superior se sitúa por debajo del promedio nacional, esta limitación adquiere un carácter estructural.

La educación como inversión estratégica no se limita a la formación individual, sino que genera externalidades positivas para el conjunto del territorio. La literatura sobre derrames de conocimiento destaca que la concentración de capital humano facilita la difusión de prácticas productivas, la innovación incremental y la cooperación empresarial (Acs, Audretsch & Lehmann, 2013). En ausencia de estos derrames, las empresas operan de manera aislada y con mayores probabilidades de cierre, como se ha observado en el caso bonaverense.

Desde el punto de vista fiscal y social, la inversión educativa contribuye a reducir costos futuros asociados a pobreza, informalidad y

exclusión. El PNUD ha documentado que los territorios con mayores niveles educativos presentan menores tasas de pobreza y desigualdad, así como mayor cohesión social (PNUD, 2022). Estos efectos refuerzan la sostenibilidad de la inversión educativa, al generar beneficios que trascienden el ámbito económico.

En el contexto de Buenaventura, concebir la educación como inversión estratégica implica un cambio de paradigma en la planificación territorial. No se trata únicamente de ampliar cobertura, sino de garantizar continuidad, calidad y pertinencia de la formación en todos los niveles. La evidencia analizada a lo largo del libro sugiere que sin una apuesta decidida por la educación como eje estructurante del desarrollo, los esfuerzos de reactivación empresarial y reducción de la pobreza difícilmente lograrán resultados sostenibles.

11.2. Formación para el trabajo, empresa y desarrollo local

La formación para el trabajo constituye un eslabón crítico entre el sistema educativo y la estructura productiva de un territorio. La evidencia internacional y nacional demuestra que los territorios que logran articular la educación técnica y tecnológica con las necesidades reales de su economía local

presentan mayores niveles de empleabilidad, productividad y supervivencia empresarial (Hanushek & Woessmann, 2015). En Colombia, sin embargo, esta articulación ha sido desigual y fuertemente condicionada por las brechas territoriales.

Los datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior muestran que, a nivel nacional, una proporción significativa de la matrícula en educación superior se concentra en programas universitarios, mientras que la educación técnica y tecnológica —clave para la inserción laboral rápida— presenta una cobertura menor y altamente concentrada en grandes centros urbanos (MEN-SNIES, s. f.). Esta distribución limita las oportunidades de formación pertinente en territorios como Buenaventura, donde la estructura productiva requiere competencias técnicas aplicadas más que formación académica tradicional.

La literatura sobre capital humano ha demostrado que la formación orientada al trabajo tiene efectos directos sobre la productividad empresarial y la calidad del empleo. Becker (1993) señala que las inversiones en educación específica incrementan la eficiencia laboral y reducen los costos de adaptación dentro de las empresas. En contextos de alta informalidad, como el de

Buenaventura, la ausencia de estas competencias refuerza la precariedad laboral y limita la capacidad de las empresas para profesionalizar sus procesos productivos.

Desde una perspectiva territorial, la CEPAL ha advertido que la formación para el trabajo solo genera impactos sostenibles cuando se inserta en estrategias de desarrollo local. Los programas de capacitación desvinculados de la realidad productiva tienden a tener efectos limitados sobre el empleo y la empresa. En contraste, los territorios que alinean formación, empresa y vocación económica logran mayores retornos sociales y productivos (CEPAL, 2021).

En Buenaventura, la formación para el trabajo representa una oportunidad estratégica para romper el círculo de baja educación, informalidad y fragilidad empresarial. El fortalecimiento de programas técnicos y tecnológicos vinculados a logística, servicios portuarios, comercio, gestión empresarial y oficios urbanos podría incidir de manera directa en la productividad de las micro y pequeñas empresas, que constituyen la base del tejido productivo local.

En síntesis, la formación para el trabajo no debe concebirse como una política compensatoria, sino como un componente estructural del desarrollo local. La evidencia empírica y teórica confirma que su adecuada

articulación con la empresa y el territorio resulta indispensable para avanzar hacia una reactivación económica sostenible en Buenaventura.

11.3. Articulación entre sistema educativo, sector productivo y Estado

La articulación entre el sistema educativo, el sector productivo y el Estado constituye un principio central de las estrategias de desarrollo territorial exitosas. La experiencia comparada muestra que los territorios que logran coordinar estos tres actores presentan mayores niveles de innovación, productividad y cohesión social (OCDE, 2024). En ausencia de esta articulación, las políticas educativas y productivas tienden a operar de manera fragmentada, reduciendo su impacto.

En Colombia, los diagnósticos sobre empleo y productividad han identificado una débil conexión entre la oferta educativa y las necesidades del mercado laboral. El informe de diagnóstico de empleo señala que la falta de coordinación entre formación y demanda productiva contribuye a la coexistencia de desempleo, informalidad y vacantes no cubiertas por falta de competencias adecuadas (Carranza et al., 2021). Este desajuste resulta especialmente problemático en territorios con alta vulnerabilidad socioeconómica.

La evidencia institucional muestra que el Estado desempeña un rol clave como articulador de intereses y capacidades. La CEPAL ha subrayado que las políticas de desarrollo territorial requieren marcos institucionales sólidos que faciliten la cooperación entre actores y orienten las inversiones hacia objetivos comunes (CEPAL, 2018). Sin este liderazgo público, la articulación entre educación y empresa tiende a ser esporádica y poco sostenible.

En Buenaventura, la ausencia de mecanismos estables de articulación ha limitado el impacto de iniciativas educativas y productivas. La fragmentación institucional y la debilidad de los espacios de coordinación reducen la capacidad del territorio para aprovechar su potencial económico. Este problema no responde a la falta de recursos aislados, sino a la ausencia de una gobernanza territorial integrada.

La literatura sobre competitividad territorial destaca que la cooperación entre empresas, instituciones educativas y Estado genera externalidades positivas, como transferencia de conocimiento, innovación incremental y fortalecimiento del capital social (Porter, 2001). Estas externalidades son particularmente relevantes en territorios con estructuras productivas frágiles, donde la acción individual

resulta insuficiente para generar cambios estructurales.

La articulación entre sistema educativo, sector productivo y Estado constituye una condición necesaria para la recuperación territorial de Buenaventura. La evidencia empírica y comparada confirma que, sin esta coordinación, los esfuerzos educativos y empresariales pierden eficacia y no logran revertir el rezago estructural del municipio.

11.4. Lineamientos para una transformación estructural del territorio

La transformación estructural de Buenaventura requiere un enfoque integral que aborde simultáneamente las dimensiones educativa, productiva y social del desarrollo. La CEPAL ha señalado que los territorios atrapados en trayectorias de bajo desarrollo solo logran cambios sostenibles cuando implementan estrategias de largo plazo orientadas a la diversificación productiva y al fortalecimiento del capital humano (CEPAL, 2021). Las intervenciones fragmentadas o de corto plazo tienden a reproducir los problemas existentes.

Un primer lineamiento consiste en priorizar la educación como inversión estratégica territorial. La evidencia presentada a lo largo del libro muestra que los déficits educativos

constituyen el núcleo de múltiples problemáticas: baja productividad, informalidad, cierre empresarial y vulnerabilidad social. Invertir en educación básica de calidad, permanencia escolar y educación superior pertinente resulta indispensable para modificar la estructura de oportunidades del territorio (Hanushek & Woessmann, 2015).

Un segundo lineamiento se orienta a la diversificación productiva basada en capacidades locales. La literatura sobre desarrollo territorial enfatiza que la transformación productiva debe apoyarse en competencias existentes y potenciales, evitando modelos de enclave que excluyen al tejido empresarial local (CEPAL, 2018). En Buenaventura, esto implica fortalecer sectores complementarios al puerto que generen empleo y aprendizaje productivo para la población local.

Un tercer lineamiento se refiere al fortalecimiento institucional y de la gobernanza territorial. El PNUD ha destacado que los territorios con mayores capacidades institucionales presentan mejores resultados en desarrollo humano y cohesión social (PNUD, 2022). La construcción de mecanismos estables de coordinación entre actores públicos y privados resulta esencial para sostener procesos de transformación de largo plazo.

Finalmente, la transformación estructural requiere un enfoque de inclusión social. Reducir la informalidad, mejorar la calidad del empleo y fortalecer el capital social son condiciones necesarias para que el crecimiento económico se traduzca en bienestar. La evidencia empírica confirma que sin cohesión social y participación comunitaria, las estrategias de desarrollo pierden legitimidad y sostenibilidad (Sen, 1999).

Los lineamientos para la transformación estructural de Buenaventura convergen en una premisa central: la educación como eje articulador del desarrollo territorial. Solo mediante una estrategia integrada que vincule educación, empresa y Estado será posible revertir el declive económico y social analizado a lo largo de esta obra.

Conclusiones generales

Síntesis integrada del declive educativo, empresarial y socioeconómico

El análisis desarrollado a lo largo de este libro permite afirmar que el declive de Buenaventura no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino el resultado de un proceso acumulativo en el que la crisis educativa, la fragilidad empresarial y la degradación socioeconómica se refuerzan mutuamente. La evidencia empírica muestra que los déficits

persistentes en educación básica, media y superior han limitado de manera estructural la acumulación de capital humano, condicionando negativamente la productividad laboral, la calidad del empleo y la sostenibilidad del tejido empresarial.

La dinámica empresarial analizada revela que la creación de empresas en el municipio no se traduce en consolidación productiva, sino en una elevada rotación y mortalidad empresarial. Esta fragilidad se encuentra estrechamente vinculada a la baja calificación de la fuerza laboral, a la escasez de capacidades técnicas y administrativas y a la concentración sectorial en actividades de baja productividad, tal como lo confirman los registros del RUES y los análisis de Confecámaras. El cierre recurrente de empresas, lejos de ser un efecto colateral, emerge como un mecanismo central de reproducción de la pobreza y la informalidad.

Desde el punto de vista social, la persistencia del desempleo, la informalidad y la desigualdad ha generado procesos de fragmentación urbana, debilitamiento del capital social y aumento de la vulnerabilidad social. Los datos del DANE y los análisis de la CEPAL evidencian que la pobreza monetaria y multidimensional en Buenaventura presenta una mayor rigidez estructural que en el promedio nacional, lo que explica la limitada

capacidad del territorio para recuperarse frente a choques económicos y sociales.

En conjunto, la síntesis integrada confirma que el declive educativo, empresarial y socioeconómico de Buenaventura responde a una trayectoria histórica de desarrollo incompleto, en la que la desconexión entre actividad económica estratégica y bienestar local ha producido un equilibrio de bajo desarrollo difícil de revertir sin transformaciones estructurales profundas.

Implicaciones para la política pública y la planificación territorial

Las conclusiones del análisis tienen implicaciones directas para la política pública y la planificación territorial. En primer lugar, queda en evidencia que las intervenciones sectoriales aisladas —ya sea en educación, empleo o emprendimiento— resultan insuficientes para modificar las trayectorias de rezago observadas. La interdependencia entre educación, empresa y estructura social exige enfoques integrales y de largo plazo, capaces de actuar simultáneamente sobre múltiples dimensiones del desarrollo.

En materia educativa, la prioridad no se limita a ampliar la cobertura, sino a garantizar trayectorias completas y de calidad desde la educación básica hasta la educación superior y

la formación para el trabajo. La evidencia analizada muestra que sin una mejora sustantiva en la culminación educativa y en la pertinencia formativa, las políticas de empleo y emprendimiento tienden a reproducir esquemas de subsistencia y alta rotación empresarial.

Desde la perspectiva productiva, la planificación territorial debe orientarse a la diversificación económica y al fortalecimiento de capacidades empresariales locales. Los datos de Confecámaras indican que la supervivencia empresarial mejora cuando existen servicios empresariales avanzados, encadenamientos productivos y acceso a capital humano calificado. Sin estos elementos, la creación de empresas seguirá siendo frágil y de bajo impacto sobre el empleo y el ingreso.

Finalmente, la política social y urbana debe reconocer la dimensión territorial de la desigualdad. La fragmentación urbana y la exclusión territorial identificadas requieren estrategias de intervención diferenciadas, que integren inversión social, fortalecimiento comunitario y mejora del entorno urbano como componentes esenciales del desarrollo económico y social.

Buenaventura: riesgos de profundización del declive y oportunidades de cambio

El análisis desarrollado también permite identificar riesgos claros de profundización del declive si las tendencias actuales se mantienen. La persistencia de bajos niveles educativos, alta informalidad y elevada mortalidad empresarial configura un escenario en el que el territorio podría quedar atrapado en una dinámica de estancamiento prolongado, con consecuencias sociales cada vez más profundas en términos de pobreza, exclusión y debilitamiento del tejido social.

No obstante, el diagnóstico también revela oportunidades de cambio. La posición estratégica de Buenaventura, su peso en el comercio exterior y su potencial demográfico constituyen activos relevantes que, bajo condiciones adecuadas, podrían convertirse en motores de desarrollo inclusivo. La evidencia comparada muestra que otros territorios portuarios han logrado transformar enclaves logísticos en plataformas de diversificación productiva cuando han invertido de manera sostenida en educación, capital humano e institucionalidad local.

Las oportunidades de cambio dependen, en gran medida, de la capacidad de articular actores públicos, privados y comunitarios en torno a una visión compartida de desarrollo territorial. La superación del declive no puede recaer exclusivamente en el mercado ni en

intervenciones estatales fragmentadas, sino que requiere procesos de gobernanza territorial que integren educación, empresa y cohesión social como ejes estratégicos.

Reconocer simultáneamente los riesgos y las oportunidades resulta fundamental para evitar diagnósticos fatalistas y para orientar acciones transformadoras basadas en evidencia, planificación y compromiso de largo plazo.

Horizonte de reconstrucción educativa, económica y social

El horizonte de reconstrucción de Buenaventura se configura, a partir del análisis realizado, como un proceso necesariamente gradual y estructural. La educación emerge como el eje articulador de esta reconstrucción, no solo por su impacto directo sobre el empleo y la productividad, sino por su capacidad para fortalecer el capital social, la cohesión comunitaria y la participación ciudadana.

Una estrategia de reconstrucción educativa debe concebirse como una inversión territorial de largo plazo, orientada a cerrar brechas históricas y a generar capacidades endógenas para el desarrollo. La articulación entre educación, formación para el trabajo y necesidades productivas locales resulta indispensable para transformar la dinámica

empresarial y reducir la elevada mortalidad de las unidades productivas.

En el plano económico, la reconstrucción exige avanzar hacia un tejido empresarial más diverso, productivo y sostenible, capaz de generar empleo formal y de absorber el capital humano formado localmente. La evidencia presentada muestra que sin este anclaje productivo, las mejoras educativas corren el riesgo de no traducirse en bienestar local.

Finalmente, la reconstrucción social y territorial requiere fortalecer el capital social y la cohesión comunitaria como condiciones habilitantes del desarrollo. Sin confianza, participación y redes de cooperación, las transformaciones económicas y educativas carecen de anclaje social y tienden a ser frágiles.

El horizonte de reconstrucción de Buenaventura no se limita a superar indicadores adversos, sino a redefinir el modelo de desarrollo territorial. La evidencia analizada a lo largo del libro confirma que solo una transformación integral, basada en educación de calidad, diversificación productiva e inclusión social, permitirá revertir de manera sostenible el declive educativo, empresarial y socioeconómico del territorio.

Bibliografía

- Acs, Z. J., Audretsch, D. B., & Lehmann, E. E. (2013). The knowledge spillover theory of entrepreneurship. *Small Business Economics*, 41(4), 757–774. <https://doi.org/10.1007/s11187-013-9505-9>
- Banco Mundial. (2023). *World Development Indicators*. Banco Mundial. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/H/bo3684031.html>
- Cámara de Comercio de Buenaventura. (2019). *Balance de empresas registradas al cierre de 2019* [Documento institucional no publicado]. Cámara de Comercio de Buenaventura.

- Cámara de Comercio de Buenaventura. (2022). *Empresas activas registradas al cierre de 2022* [Registro administrativo]. Cámara de Comercio de Buenaventura.
- Carranza, E., Wiseman, W., Eberhard-Ruiz, A., & Cárdenas, A. L. (2021). *Colombia: Diagnóstico de empleo — Desafíos estructurales para la creación de nuevos, mejores y más inclusivos empleos*. Banco Mundial / Departamento Nacional de Planeación / Ministerio de Trabajo. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/501211634796280763/pdf/Colombia-Diagnostico-de-Empleo-Desaf%C3%ADos-Estructurales-para-la-Creaci%C3%B3n-de-Nuevos-Mejores-y-Mas-Inclusivos-Empleos.pdf>
- CEPAL. (2019). *Panorama social de América Latina 2019*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44969>
- CEPAL. (2020). *La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45904>
- CEPAL. (2021). *Estudio económico de América Latina y el Caribe 2021*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47192>

CEPAL. (2022). *Panorama social de América Latina y el Caribe 2022: la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible* (LC/PUB.2022/15-P). Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48518>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2018). *La ineficiencia de la desigualdad* (LC/SES.37/3-P). CEPAL. <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/43442>

DANE. (2020). *Pobreza monetaria y multidimensional en Colombia 2019* (Boletín técnico). Departamento Administrativo Nacional de Estadística. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2019> DANE

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2019). *Comunicado de prensa: Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018*. <https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/cnpv-2018-comunicado-3ra-entrega.pdf>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2023). *Ficha metodológica Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)*. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/fmet-GEIH.pdf>

Dinámica de creación de empresas en Colombia 2024 publicado por Confecámaras con base en el Registro Único Empresarial y Social (RUES). [Confecámaras](#)

Fundación Empresarios por la Educación (Fundación ExE). (2024). *¿Cómo está Buenaventura en educación? Retos y prioridades 2024–2027*. Fundación Empresarios por la Educación.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). *The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth*. MIT Press. <https://mitpress.mit.edu/9780262029179>

International Labour Organization. (2020). *Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and the future of jobs* (Report, ISBN 978-92-2-133505-4). International Labour Office. <https://www.ilo.org/publications/major-publications/global-employment-trends-youth-2020-technology-and-future-jobs>

Mincer, J. (1974). *Schooling, experience, and earnings*. Columbia University Press.

<https://www.nber.org/books-and-chapters/schooling-experience-and-earnings>

Ministerio de Educación Nacional — SNIES. (2022). *Perfil territorial de Buenaventura 2022*. Ministerio de Educación Nacional de Colombia — Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES).

Ministerio de Educación Nacional. (s. f.). *Indicadores de cobertura y matrícula en educación superior*. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). <https://snies.mineducacion.gov.co/>

Ministerio de Educación Nacional. (s. f.). *Sistema Nacional de Información de la Educación Superior* (SNIES). <https://snies.mineducacion.gov.co/>

Monroy, J. M., Ramírez, J. C., & Núñez, J. (2021). *Dinámica de la pobreza en Colombia en el siglo XXI*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/47796>

OIT. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture*. International Labour Organization.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *OECD Economic Surveys: Colombia 2024*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/en/topics/economy.html>

PNUD. (2022). *Informe sobre desarrollo humano 2021–2022*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Porter, M. E. (2001). The competitive advantage of nations. *Harvard business review*, 68(2), 73-93.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom* Oxford University Press Shaw TM & Heard. *The Politics of Africa: Dependence and Development*.

UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707>

UNESCO. (2022). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2022*. UNESCO.

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382498>

UNICEF. (2021). *Education disrupted: School closures brochure 2021*. UNICEF.

<https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2021/09/Education-disrupted-School-closures-brochure-2021.pdf>

EL AUTOR

Urbano Angulo Mosquera es economista industrial, nacido en Buenaventura, Valle del Cauca, territorio al que ha dedicado gran parte de su vida profesional, académica e intelectual. Su trayectoria combina de manera sólida la docencia universitaria, la gestión pública y el análisis económico territorial, con una experiencia acumulada de más de veintiséis años en la formación de profesionales y en el estudio de las dinámicas económicas, sociales y educativas del Pacífico colombiano.

Es egresado de la Universidad Católica Popular del Risaralda como Economista Industrial y especialista en Gerencia de Proyectos por la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Su formación se ha complementado con diplomados y cursos en áreas como desarrollo local incluyente, comercio exterior, investigación social, contratación pública, planeación económica y gestión institucional, realizados en universidades y entidades de reconocido prestigio como la Universidad del Valle, la Pontificia Universidad Javeriana, el SENA y la Escuela Superior de Administración Pública.

A lo largo de su carrera, ha ejercido la docencia universitaria en instituciones como la Universidad del Valle – Sede Pacífico, la

Universidad del Pacífico, la Fundación Universitaria del Área Andina, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) y otras entidades de educación superior, orientando asignaturas relacionadas con economía, micro y macroeconomía, planificación económica y social, comercio exterior, finanzas, economía portuaria, geopolítica, estadística y formulación de proyectos, entre otras. Esta amplia experiencia docente le ha permitido conocer de primera mano las limitaciones estructurales del sistema educativo en contextos periféricos y su impacto directo en el desarrollo territorial.

En el ámbito de la gestión pública, se ha desempeñado en cargos administrativos y de dirección, como Jefe Administrativo de la Contraloría Distrital de Buenaventura, así como instructor y formador en entidades técnicas y académicas. Estas experiencias le han brindado una visión integral del funcionamiento institucional, la gestión de los recursos públicos y las dificultades estructurales que enfrentan los territorios con alta fragilidad socioeconómica.

El libro *Buenaventura en Declive: cierre empresarial, crisis educativa y degradación socioeconómica* recoge esta trayectoria académica y profesional, y se nutre de su conocimiento profundo del territorio bonaverense. La obra no surge únicamente de

un ejercicio teórico, sino de una lectura crítica y comprometida de la realidad local, sustentada en evidencia empírica, análisis comparado y una reflexión constante sobre el papel de la educación, el capital humano y la empresa en los procesos de desarrollo.

Desde una perspectiva ética y académica, Urbano Angulo Mosquera concibe la investigación como una herramienta para comprender y transformar la realidad. Su trabajo se caracteriza por el rigor analítico, el compromiso social y la convicción de que la educación constituye el eje central para superar las brechas históricas que afectan a Buenaventura y a otros territorios del Pacífico colombiano.

